

Países con situaciones de tensión en 2022

2. Tensiones

- Durante 2022 se registraron 108 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (36) y Asia y Pacífico (33), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron entre América (16), Europa (12) y Oriente Medio (11).
- En Burkina Faso se acentuó la crisis política en el país durante el año padeciendo dos golpes de Estado.
- El diálogo nacional en Chad concluyó con la prolongación del mandato del Consejo MIlitar de Transición, lo que ratificó la ruptura constitucional iniciada en abril de 2021 por Mahamat Déby y su junta militar.
- Se deterioró gravemente la relación entre RDC y Rwanda como consecuencia de los choques esporádicos entre los cuerpos de seguridad de ambos países y de las acusaciones hacia Rwanda de apoyar al grupo M23.
- A finales de año se logró un acuerdo marco transicional en Sudán en el cual los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político, aunque permanecieron las tensiones por la conformación de un Ejército unificado.
- El Gobierno haitiano solicitó el despliegue inmediato de una fuerza internacional que pudiera revertir la violencia ejercida por numerosos grupos armados y mitigar sus consecuencias humanitarias.
- En Ecuador se incrementaron dramáticamente la violencia y los homicidios relacionados con el narcotráfico y se registraron protestas de gran alcance y un intento de destitución del presidente.
- La destitución y detención del presidente Castillo, acusado de querer perpetrar un autogolpe de Estado, motivaron unas de las protestas más importantes de los últimos años en Perú.
- Se incrementó la tensión fronteriza entre Kirguistán y Tayikistán, con incidentes durante el año y una escalada militar que causó un centenar de fallecidos.
- La tensión política en Sri Lanka como consecuencia de la crisis económica escaló hasta provocar la caída del presidente y el primer ministro.
- Se agravó la preocupación internacional por el drástico incremento del número de lanzamiento de misiles de Corea del Norte y por la reanudación de su programa nuclear.
- La situación entre Armenia y Azerbaiyán y en torno al enclave en disputa de Nagorno-Karabaj fue de fragilidad, y una ofensiva militar de Azerbaiyán causó más de 280 víctimas mortales y medio millar de heridos.
- Las movilizaciones en Irán fueron consideradas como uno de los mayores desafíos al régimen desde 1979 y la respuesta represiva de las autoridades había causado la muerte de unas 500 personas hasta finales de año.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2022 Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2022 En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por situaciones de tensión durante 2022.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2022

| Tensión ¹ | Tipología ² | Actores principales | Intensidad ³ |
|----------------------|--|--|-------------------------|
| , | 10 | | Evolución ⁴ |
| ÁFRICA | | | |
| África Central (LRA) | Internacional | LRA, Fuerzas Armadas de Sudán, Sudán del Sur, RDC, RCA y Uganda, milicias comunitarias y grupos armados de los países de la región | 1 |
| | Recursos | inincias comunitarias y grupos armados de los países de la region | ↓ |
| Argelia ⁵ | Interno | Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak, | 2 |
| | Gobierno, Sistema | grupos armados AQMI (ex GSPC), Jund al-Khilafa (filial ISIS) | = |
| Benín | Interna internacionalizada | Gobierno, oposición política y social | 2 |
| Beilin | Gobierno | desirent, openion pontically securi | 1 |
| Burkina Faso | Interna internacionalizada | Gobierno, oposición política y social, sectores del Ejército | 3 |
| Durkina i aso | Gobierno | dobiento, oposicion pontica y social, sectores del Ejercito | 1 |
| | Interna internacionalizada | Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Tansformateurs), | 3 |
| Chad | Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad | grupos armados chadianos (52 grupos, entre los principales, FACT, CCMSR, UFDD, UFR), milicias comunitarias, milicias privadas | 1 |
| Casta da Maríl | Interna internacionalizada | O-bi-man analisifa attitua assalal arbana amanda arribaala | 2 |
| Costa de Marfil | Gobierno, Identidad, Recursos | Gobierno, oposición política y social, actores armados regionales | 1 |
| | Interna | Gobierno, oposición política y social, grupo armado FRUD-armé | 2 |
| Djibouti | Gobierno | | ↑ |
| | Interna internacionalizada | Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos | 1 |
| Eritrea | Gobierno, Autogobierno, Identidad | | = |
| | Internacional | - Eritrea, Etiopía | 1 |
| Eritrea – Etiopía | Territorio | | = |
| | Interna | | 1 |
| Eswatini | Gobierno | Gobierno, oposición política y social | = |
| | Interna | | 3 |
| Etiopía | Gobierno | Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados | 1 |
| Etiopía – Egipto – | Internacional | | 2 |
| Sudán | Recursos | - Etiopía, Egipto, Sudán | = |
| Etiopía – Sudán | Internacional | Etiopía, Sudán, milicias comunitarias | 2 |
| | Recursos | | |
| Guinea | Interna | | 2 |
| | Gobierno | Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos | |
| | | | 2 |
| Guinea-Bissau - | | Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes internacionales de narcotráfico | |
| | | Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, | |

^{1.} En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.

Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.

^{3.} La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.

En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2022 con la del año 2021 apareciendo el símbolo (†) si la situación general durante 2022 es más grave que la del año anterior, (1) si es mejor y (=) si no ha experimentado cambios significativos.

Desde la pasada edición del informe Alerta! la tensión denominada "Argelia" incluye también las actividades de grupos yihadistas (en particular de AQMI) que en el pasado se analizaban por separado.

| Tensión | Tipología | Actores principales | Intensidad Evolución |
|-------------------------------|---|--|-------------------------|
| ÁFRICA | | | |
| 0 | Interna | | 1 |
| Guinea Ecuatorial | Gobierno | Gobierno, oposición política en el exilio | = |
| | Interna internacionalizada | Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social | 3 |
| Kenia | Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno | (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenia, ISIS | 1 |
| Malí | Interna internacionalizada | Cabiarna anaciaián política y casial CEDEAO | 3 |
| Iviali | Gobierno | Gobierno, oposición política y social, CEDEAO | = |
| Marruecos – Sáhara | Internacional ⁶ | Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo | 2 |
| Occidental | Autogobierno, Identidad, Territorio | armado Frente POLISARIO | 1 |
| | Interna | 0.11 | 1 |
| Mozambique | Gobierno, sistema | Gobierno, RENAMO | = |
| | Interna | | 1 |
| Niger | Gobierno | Gobierno, oposición política y social | = |
| | Interna | Gobierno, oposición política, organizaciones de la sociedad civil, | 3 |
| Nigeria | Identidad, Recursos, Gobierno | comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN | 1 |
| | Interna internacionalizada | Gobierno, organizaciones independentistas MASSOB, IPOB (que | 3 |
| Nigeria (Biafra) | Identidad, Autogobierno | dispone de un brazo armado, el ESN) | = |
| Nimonia (Dalta Nimon) | Interna | Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada | 1 |
| Nigeria (Delta Níger) | Identidad, Recursos | | = |
| | Interna | Gobierno liderado por la coalición Union Sacrée (liderada por Félix Tshisekedi e integrada por diferentes actores políticos, incluidos disidentes de la coalición Front Commun pour le Congo del expresidente Joseph Kabila), oposición política (entre otros, Front Commun pour le Congo y Lamuka) y social | 2 |
| RDC | Gobierno | | = |
| | Internacional | Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupo armado ruandés FDLR, | 3 |
| RDC – Rwanda | Identidad, Gobierno, Recursos | grupo armado congolés pro ruandés M23 (ex CNDP) | 1 |
| | Interna internacionalizada | Gobierno, grupo armado ruandés FDLR, oposición política, sectores | 1 |
| Rwanda | Gobierno, Identidad | disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora ruandesa en otros países de África y en Occidente | = |
| | Internacional | | 1 |
| Rwanda - Burundi | Gobierno | Gobierno de Rwanda, Gobierno de Burundi, grupos armados | ↓ |
| | Interna | Gobierno, facciones del grupo armado Movimiento de las Fuerzas | 1 |
| Senegal (Casamance) | Autogobierno | Democráticas de Casamance (MFDC) | 1 |
| Somalia | Interna | Panública da Camalilandia, ragión autónomo da Duntlandia, catala | 3 |
| (Somalilandia- Puntlandia) | Territorio | República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo | 1 |
| | Interna | | 3 |
| Sudán | Gobierno | Gobierno, oposición política y social | 1 |
| | Internacional | | 1 |
| Sudán – Sudán del Sur | Recursos, Identidad | Gobierno de Sudán, Gobierno de Sudán del Sur, milicias comunitarias | |
| | | | 1 |
| Tanzania | Gobierno | Gobierno, oposición política y social | 1 |
| | Interna | | |

^{6.} A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como "internacional" y no como "interna" por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

| Tensión | Tipología | Actores principales | Intensidad Evolución | |
|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--|
| ÁFRICA | | | | |
| Túnez | Interna | Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el | 2 | |
| | Gobierno, Sistema | Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS | 1 | |
| | Interna | | 2 | |
| Uganda | Gobierno | Gobierno, oposición política y social | 1 | |
| | Interna | | 1 | |
| Zimbabwe | Gobierno | Gobierno, oposición política y social | = | |
| AMÉRICA | | | | |
| Dallida | Interna | Oskiema sassista saltiisa sassisl | 1 | |
| Bolivia | Gobierno, Autogobierno, Identidad | Gobierno, oposición política y social | 1 | |
| B.v.T | Interna | 0.1: | 2 | |
| Brasil | Gobierno | Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado | 1 | |
| Chile | Interna | Oshisma analisia asla | 2 | |
| Chile | Gobierno, Autogobierno, Identidad | Gobierno, oposición política y social | 1 | |
| 0.1 | Interna | | 1 | |
| Colombia | Gobierno | Gobierno, oposición política y social | ↓ | |
| | Interna | | 1 | |
| Cuba | Gobierno, Sistema | Gobierno, oposición política y social | 1 | |
| | Interna | | 3 | |
| Ecuador | Gobierno, Recursos | Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado | 1 | |
| | Interna | | 1 | |
| EEUU | Gobierno, Sistema | Gobierno, oposición política y social, milicias ciudadanas | 1 | |
| | Interna | | 2 | |
| El Salvador | Gobierno | Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado | ↓ | |
| | Interna | | 1 | |
| Guatemala | Gobierno | Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado | = | |
| | Interna | | 3 | |
| Haití | Gobierno | Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado | <u></u> | |
| | Interna | | 1 | |
| Honduras | Gobierno | Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado | = | |
| | Interna | | 1 | |
| Jamaica | Gobierno | Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado | 1 | |
| | Interna | Oskiema zasisifa zaliti. | 3 | |
| México | Gobierno, Recursos, Identidad | Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado, grupos armados de oposición | = | |
| | Interna | | 1 | |
| Nicaragua | Gobierno | Gobierno, oposición política y social | = | |
| | Interna | | 3 | |
| Perú | Gobierno, Recursos | Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas) | 1 | |
| | Interna | | 3 | |
| Venezuela | Gobierno | Gobierno, oposición política y social | ı | |
| | GODIEITIO | | + | |

| ASIA Bangladesh China (Hong Kong) China (Tíbet) China (Tíbet) China (Xinjiang) China (Xinjiang) China - Japón China - Taiwán China - EEUU Corea, RPD - EEUU, Japón, Rep. de Corea Corea, RPD - Rep. de Corea, RPD Corea, RPD Corea, RPD China - Interna Interna Internacional China - Rep. de Corea, RPD Corea, RPD Corea, RPD Internacional Internacional Internacional Internacional Internacional Gobierno Internacional Gobierno Internacional Internacional Internacional Gobierno Internacional Internacional Gobierno Internacional Internacional | Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB) Gobierno, oposición política y social Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social China, Japón, EEUU China, Taiwán, EEUU | 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 |
|--|--|------------------------------------|
| Bangladesh Gobierno China (Hong Kong) Interna Autogobierno, Identidad, Sistema Interna internacionalizada Autogobierno, Identidad, Sistema Interna internacionalizada Autogobierno, Sistema, Identidad Internacional Territorio, Recursos Internacional Territorio, Recursos, Sistema China - Taiwán China - EEUU Internacional Sistema, Gobierno, Territorio Corea, RPD -EEUU, Japón, Rep. de Corea Corea, RPD - Rep. de Corea Internacional Sistema Internacional Gobierno Internacional Gobierno Internacional Sistema Internacional | National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crimenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB) Gobierno, oposición política y social Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social China, Japón, EEUU China, Taiwán, EEUU | 1 |
| China (Hong Kong) China (Hong Kong) China (Tíbet) China (Tíbet) China (Xinjiang) China (Xinjiang) China – Japón China – Taiwán China – Taiwán China - EEUU Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea Corea, RPD – Rep. de Corea, RPD Corea, RPD – Rep. de Corea, RPD Corea, RPD Interna Internacional Internacional Internacional Sistema Internacional China – Taiwán Corea, RPD – Rep. de Corea Internacional Sistema Internacional Internacional Sistema Internacional Internacional Sistema Internacional | Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB) Gobierno, oposición política y social Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social China, Japón, EEUU China, Taiwán, EEUU | 1 |
| China (Hong Kong) Autogobierno, Identidad, Sistema Interna internacionalizada Autogobierno, Identidad, Sistema Interna internacionalizada Autogobierno, Sistema, Identidad Internacional Territorio, Recursos Internacional Territorio, Recursos, Sistema China - Taiwán China - EEUU Internacional Sistema, Gobierno, Territorio Corea, RPD - EEUU, Japón, Rep. de Corea Corea, RPD - Rep. de Corea Internacional Sistema Internacional Gobierno Internacional Sistema Internacional | Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social China, Japón, EEUU China, Taiwán, EEUU | ↓ 1 = 1 = 2 ↑ ↑ 2 |
| Autogobierno, Identidad, Sistema Interna internacionalizada Autogobierno, Identidad, Sistema Interna internacionalizada Autogobierno, Sistema, Identidad Internacional Territorio, Recursos Internacional Territorio, Recursos, Sistema Internacional Sistema, Gobierno, Territorio Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea Corea, RPD – Rep. de Corea Internacional Sistema Internacional Internacional Sistema Internacional Gobierno Internacional Sistema Internacional | Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social China, Japón, EEUU China, Taiwán, EEUU | 1 = 1 = 2 |
| China (Tíbet) Autogobierno, Identidad, Sistema Interna internacionalizada Autogobierno, Sistema, Identidad Internacional Territorio, Recursos Internacional Territorio, Recursos, Sistema Internacional China - Taiwán China - EEUU Internacional Sistema, Gobierno, Territorio Corea, RPD - EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁷ Corea, RPD - Rep. de Corea Sistema Internacional Gobierno Internacional Sistema Internacional Sistema Internacional | Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social China, Japón, EEUU China, Taiwán, EEUU | = 1 = 2 |
| Autogobierno, Identidad, Sistema Interna internacionalizada Autogobierno, Sistema, Identidad Internacional Territorio, Recursos Internacional Territorio, Recursos, Sistema Internacional Sistema, Gobierno, Territorio Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea Corea, RPD – Rep. de Corea Internacional Sistema Internacional Sistema Internacional Sistema Internacional Sistema Internacional Sistema Internacional | Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social China, Japón, EEUU China, Taiwán, EEUU | 1 = 2 |
| China (Xinjiang) Autogobierno, Sistema, Identidad Internacional Territorio, Recursos Internacional Territorio, Recursos, Sistema Internacional Sistema, Gobierno, Territorio Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁷ Corea, RPD – Rep. de Corea Internacional Sistema Internacional Gobierno Internacional Sistema Internacional Internacional Sistema Internacional | China, Japón, EEUU China, Taiwán, EEUU | = 2 ↑ 2 |
| Autogobierno, Sistema, Identidad Internacional Territorio, Recursos Internacional Territorio, Recursos, Sistema Internacional Sistema, Gobierno, Territorio Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea? Corea, RPD – Rep. de Corea Internacional Sistema Internacional Gobierno Internacional Sistema Internacional Sistema Internacional Sistema | China, Japón, EEUU China, Taiwán, EEUU | 2 1 2 2 |
| China – Japón Territorio, Recursos Internacional Territorio, Recursos, Sistema Internacional Sistema, Gobierno, Territorio Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁷ Corea, RPD – Rep. de Corea Internacional Gobierno Internacional Sistema Internacional Internacional Sistema Internacional | China, Taiwán, EEUU | ↑ 2 |
| Territorio, Recursos Internacional Territorio, Recursos, Sistema China - Taiwán China - EEUU Internacional Sistema, Gobierno, Territorio Corea, RPD - EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁷ Corea, RPD - Rep. de Corea Internacional Sistema Internacional Sistema Internacional Corea, RPD - Rep. de Corea | China, Taiwán, EEUU | 2 |
| China – Taiwán Territorio, Recursos, Sistema Internacional Sistema, Gobierno, Territorio Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea Corea, RPD – Rep. de Corea Sistema Internacional Sistema Internacional Sistema | | |
| Territorio, Recursos, Sistema Internacional Sistema, Gobierno, Territorio Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁷ Corea, RPD – Rep. de Corea Internacional Sistema Internacional Sistema Internacional | | |
| Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea? Corea, RPD – Rep. de Corea Internacional Gobierno Internacional Sistema Internacional Sistema Internacional | China, EEUU | ↑ |
| Sistema, Gobierno, Territorio Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁷ Corea, RPD – Rep. de Corea Internacional Sistema Interna Corea, RPD | China, EEUU | 1 |
| Japón, Rep. de Corea ⁷ Gobierno Corea, RPD – Rep. de Corea Sistema Interna Corea, RPD | | 1 |
| Corea, RPD – Rep. de Corea Corea, RPD – Rep. de Corea Internacional Sistema Interna | | 3 |
| de Corea Sistema Interna Corea, RPD – Rep. Interna | RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia | 1 |
| de Corea Sistema Interna Corea, RPD | | 3 |
| Corea, RPD | RPD Corea, Rep. de Corea | 1 |
| | | 1 |
| Gobierno, Sistema | Gobierno, oposición política y social | |
| Interna | | 1 |
| Fiji Gobierno | Gobierno, oposición política | 1 |
| Interna | | 1 |
| India Sistema, Gobierno | Gobierno, oposición política y social | = |
| Interna internacionalizada | Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(IKS), ADF, | 1 |
| India (Assam) Autogobierno, Identidad | RNLF, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT | |
| Interna | Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, | 1 |
| India (Manipur) Autogobierno, Identidad | RPF, UNLF, KNF, KNA) | |
| Interna | Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, | 1 |
| India (Nagalandia) Identidad, Autogobierno | NNC, ZUF | = |
| Internacional | | 3 |
| India – China Territorio | India, China | |
| Internacional | | 3 |
| India – Pakistán Identidad, Territorio | India, Pakistán | |
| Indonesia Interna | | 1 |
| (Sulawesi) Identidad, Sistema | Gobierno, grupo armado MIT | |
| Indonesia (Panúa Interna | | 3 |
| Indonesia (Papúa Occidental) Autogobierno, Identidad, Recursos | Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport | |

^{7.} Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

| Tensión | Tipología | Actores principales | Intensidad Evolución |
|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| ASIA | | | |
| Japón - Rusia (Islas | Internacional | | 1 |
| Kuriles) | Territorio, Recursos | - Japón, Rusia | 1 |
| | Interna internacionalizada | Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y | 3 |
| Kazajstán | Sistema, Gobierno | regionales | 1 |
| | Interna internacionalizada | Cobierno enecición político y cocial grupos armedes regionales | 1 |
| Kirguistán | Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio | Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán | = |
| Kirguistán - | Internacional | Kirguistán, Tayikistán | 3 |
| Tayikistán ⁸ | Territorio, recursos | Niiguistaii, iayikistaii | 1 |
| Las DDD | Interna | Gobierno, oposiición política y social, organizaciones políticas y | 1 |
| Lao, RDP | Sistema, Identidad | armadas de origen hmong | = |
| Mar de la China | Internacional | China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Brunei | 2 |
| Meridional | Territorio, Recursos | Darussalam | 1 |
| | Interna | | 2 |
| Pakistán | Gobierno | Gobierno, oposición política y social | 1 |
| | Interna | | 3 |
| Papúa Nueva Guinea | Identidad, Recursos, Territorio, Autogobierno | Gobierno, milicias comunitarias, Gobierno de Bougainville | 1 |
| | Interna | Gobierno, oposición política y social | 3 |
| Sri Lanka | Gobierno | | 1 |
| | Interna | | 1 |
| Tailandia | Gobierno | Gobierno, oposición política y social | ↓ |
| | Interna internacionalizada | Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, | 2 |
| Tayikistán | Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio | grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán | = |
| Tayikistán (Gorno- | Interna | Cabiana analytica and de la Dantica Autónomo de Como | 2 |
| Badakhshan) | Identidad | Gobierno, oposición social de la Región Autónoma de Gorno- Badakhshan (GBAO) | 1 |
| | Interna internacionalizada | Cabiarna aposición assist y patítica grupos armados variandos | 1 |
| Uzbekistán | Gobierno, Sistema, territorio | Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán | = |
| | Interna | | 2 |
| Uzbekistán (Karakalpakistán) | Autogobierno | Gobierno, oposición social en la región autónoma de Karakalpakistán | 1 |
| EUROPA | | | ' |
| Armenia-Azerbaiyán | Internacional | Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, | 3 |
| (Nagorno-Karabaj) | Autogobierno, Identidad, Territorio | Rusia, Turquía | <u> </u> |
| | Interna internacionalizada | | 2 |
| Belarús | Gobierno | Gobierno, oposición social y política, UE, Polonia, EEUU, Rusia | |
| | Interna internacionalizada | Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de | 2 |
| Bosnia y Herzegovina | Autogobierno, Identidad, Gobierno | la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional | 1 |
| | Interna internacionalizada | | 1 |
| Georgia (Abjasia) | Autogobierno, Identidad, Gobierno | Georgia, autoproclamada República de Abjasia, Rusia | 1 |
| Georgia (Osotia dal | Interna internacionalizada | | 1 |
| Georgia (Osetia del Sur) | Autogobierno, Identidad | Georgia, autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia | |

^{8.} En años anteriores esta tensión se analizaba dentro del resumen de Kirguistán de este capítulo.

| Tensión | Tipología | Actores principales | Intensidad Evolución |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------|
| EUROPA | | | |
| | Interna internacionalizada | | 2 |
| Moldova | Gobierno | Gobierno, oposición política, Rusia | 1 |
| Moldova, Rep. de | Interna internacionalizada | | 2 |
| (Transnistria) | Autogobierno, Identidad | Moldova, autoproclamada República de Transnistria, Rusia | 1 |
| | Interna | | 2 |
| Rusia | Gobierno | Gobierno, oposición política y social, actores armados de oposición | 1 |
| Rusia (norte del | Interna | Gobierno federal ruso, gobiernos de las repúblicas de Daguestán, | 1 |
| Cáucaso) | Sistema, Identidad, Gobierno | Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS) | = |
| | Internacional ⁹ | Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad | 2 |
| Serbia – Kosovo | Autogobierno, Identidad, Gobierno | serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX | 1 |
| | Interna internacionalizada | Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah | 2 |
| Turquía | Gobierno, Sistema | Gülen | 1 |
| Turquía Crasia | Internacional | Turquía, Grecia, República de Chipre, autoproclamada República | 2 |
| Turquía - Grecia, Chipre | Territorio, Recursos, Autogobierno, Identidad | Turca del Norte de Chipre, Egipto, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia | 1 |
| ORIENTE MEDIO | | | |
| Arabia Saudita | Interna internacionalizada | Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo | 1 |
| Alabia Gaddita | Gobierno, Identidad | AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd) | = |
| Bahrein | Interna | Gobierno, oposición política y social | 1 |
| Barreni | Gobierno, Identidad | debicine, operation pointed y social | = |
| Egipto | Interna | Gobierno, oposición política y social | 2 |
| Egipto | Gobierno | debicine, operation pointed y social | = |
| Irán | Interna | Gobierno, oposición política y social | 3 |
| ITall | Gobierno | dobiento, oposición pontica y social | 1 |
| Irán (noroeste) | Interna internacionalizada | Gobierno, oposición política y social, grupos armados PJAK y PDKI, | 2 |
| man (noroeste) | Autogobierno, Identidad | Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) | 1 |
| Irán (Sistán | Interna internacionalizada | Gobierno, oposición política y social, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat | 2 |
| Baluchistán) | Autogobierno, Identidad | Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán | 1 |
| Irán – EEUU, Israel ¹⁰ | Internacional | Irán EEIIII Ioraal | 3 |
| iidii – EEOO, Isidei | Sistema, Gobierno | Irán, EEUU, Israel | = |
| | Interna internacionalizada | | 1 |
| Iraq (Kurdistán) | Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio | Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Turquía, Irán, PKK | = |
| laural Ciri 1.7 | Internacional | level Ciris I (hans Hashallah (n. 1712 - 1712) 1 (| 3 |
| Israel – Siria –Líbano | Sistema, Recursos, Territorio | Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán | = |
| I Shama | Interna internacionalizada | Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, | 2 |
| Líbano | Gobierno, Sistema | grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham | = |
| Palestina | Interna | ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas | 1 |
| i alestilla | Gobierno | y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas | |

^{1:} intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta. ↑: escalada de la tensión; ↓: reducción de la tensión; ≕ sin cambios. Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

La tensión entre Kosovo y Serbia se considera "internacional" ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.
 Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2022

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2022, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

Durante 2022 se identificaron 108 escenarios de tensión en todo el mundo, diez más que en 2021, en línea con la tendencia al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años (25 casos más desde el año 2018). África y Asia fueron las regiones

del mundo con mayor número de tensiones (36 y 33 respectivamente), seguidas de América (16), Europa (12) y Oriente Medio (11). Respecto a la variación de casos en comparación con el año anterior, se identificaron 15 nuevos casos y otros cinco dejaron de ser calificados como tensión,

la mayoría en África: Gambia, Etiopía (Oromiya), que pasó a ser considerado conflicto armado, RDC-Uganda, Rwanda-Uganda y España (Cataluña). Los casos que, por distintos motivos, se incorporaron al listado de casos de tensión, se concentraron principalmente en Asia y América: Brasil; China-EEUU; Corea, RPD; Ecuador; EEUU; Fiji; Jamaica; Japón-Rusia (Islas Kuriles); Kirguistán-Tayikistán; Moldova; Papúa Nueva Guinea; Rusia; Sri Lanka; Tayikistán (Gorno-Badakhshan) y Uzbekistán (Karakalpakistán).

Uno de los aspectos más destacados en el análisis de las tensiones en 2022 es que, si bien en un 32% de los casos no se observaron cambios significativos y en un 18% la tensión se redujo respecto del 2021, la mitad de los casos identificados en 2022 se agravaron respecto del año anterior. Ello se tradujo, en parte, en un incremento sustancial de los casos de alta intensidad, que pasaron de 19 en 2021 a 28 en 2022: Burkina Faso; Chad; Etiopía; Kenia; Malí; Nigeria; Nigeria (Biafra); RDC-Rwanda; Somalia (Somalilandia-Puntlandia); Sudán; Ecuador; Haití; México; Perú; Venezuela; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; India-China; India-Pakistán; Indonesia (Papúa Occidental); Kazajstán; Kirguistán-Tayikistán; Papúa Nueva Guinea; Sri Lanka; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj); Irán-EEUU, Israel; Irán; e Israel-Siria-Líbano. Además de los 28 casos de alta intensidad, que supusieron más de una cuarta parte del total, el 42% de los 108 casos de tensión fueron de intensidad baja (en 2021 eran el 50%) y el 32% de intensidad media (31% en 2021). Por tanto, en 2022 no solamente se incrementó con claridad el número de tensiones, sino también su intensidad media respecto del año anterior. El incremento de la intensidad de las tensiones se concentró especialmente en Europa

> (donde el 92% de los casos escalaron) o en Asia (donde lo hizo un 56%).

> En cuanto a los principales factores de causalidad, la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o

internacional de un Gobierno, estaba presente en un 71% de las tensiones analizadas; las demandas de autodeterminación y autogobierno, o las aspiraciones identitarias lo estaban en un 38%; y el control de los recursos o del territorio lo estaba en un 31%. Tales cifras mantienen una cierta continuidad respecto de las

Cuadro 2.1. Tensiones de alta intensidad en 2022

| ÁFRICA (10) | ASIA (9) | ORIENTE MEDIO (3) |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Burkina Faso | Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur | Irán-EEUU, Israel |
| Chad | Corea del Norte-Corea del Sur | Irán |
| Etiopía | India-China | Israel-Siria-Líbano |
| Kenia | India-Pakistán | AMÉRICA (5) |
| Malí | Indonesia (Papúa Occidental) | |
| Nigeria | Kazajstán | Ecuador |
| Nigeria (Biafra) | Kirguistán-Tayikistán | Haití |
| RDC-Rwanda | Papúa Nueva Guinea | México |
| Somalia (Somalilandia-Puntlandia) | Sri Lanka | Perú |
| Sudán | | Venezuela |
| | | EUROPA (1) |
| | | Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj) |

La mitad de los casos

identificados en 2022

se agravaron respecto

del año anterior

del año anterior, aunque aquellas tensiones asociadas al control del territorio o los recursos se incrementaron del 21% al 31%. En un análisis desagregado de factores, la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno fue la causa con mayor preponderancia y estuvo presente en el 64% de los 108 escenarios de tensión, exactamente el mismo porcentaje que el año anterior. El segundo factor con mayor prevalencia fue la reivindicación de aspiraciones de tipo identitario (36%), especialmente relevante en regiones como Europa (67%) u Oriente Medio (46%). A continuación, con porcentajes muy parecidos, se situaron las demandas de autodeterminación y autogobierno (24%), el control de los recursos (23%), la oposición al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto (22%) y el control del territorio (19%). Los distintos factores de causalidad asociados a las tensiones también observan

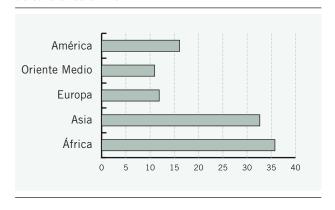
una gran oscilación entre regiones. A modo de ejemplo, la oposición al Gobierno está presente en el 100% de las tensiones en América, pero solamente en un 39% de los casos en Asia. En cambio, la oposición al sistema o al Estado en su conjunto está presente en un 45% de las tensiones en Asia, pero solamente en un 6% de las que se ubican en América. Las demandas de autodeterminación y/o autogobierno

estaban asociadas a un 58% de los casos en Europa, pero solamente a un 13% y un 14% de los casos en América y África respectivamente; mientras que las reivindicaciones relacionadas con la identidad estaban presentes en un 67% de los casos en Europa y en un 25% de los casos en África o América.

En consonancia con la tendencia observada en 2021 y en años anteriores, aproximadamente la mitad de las tensiones en todo el mundo tuvieron un carácter interno (52%), aunque con una pronunciada variabilidad geográfica (100% de los casos en América y 17% en Europa). Aproximadamente una quinta parte de las tensiones (21%) fueron internacionales, pero algunas de ellas se contaron entre las de mayor intensidad en todo el mundo, como por ejemplo RDC-Rwanda; India-China; India-Pakistán; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; Kirguistán-Tayikistán: Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj), Irán-EEUU, Israel o Israel-Siria-Líbano. Finalmente, más de una cuarta parte (27%) de las tensiones fueron internas internacionalizadas –aquellas en las que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos-, pero, nuevamente, se observaron importantes variaciones entre regiones (en Asia el 58% de los casos fueron de este tipo, mientras que América Latina no se registró ninguno).

En un análisis geográfico más pormenorizado, algunas de las subregiones con un mayor número de casos fueron, por este orden, África Central y Grandes Lagos (12 casos), Asia Oriental y África Occidental (11 cada una); Asia Meridional (8); América del Sur; Asia

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2022



Central; Cuerno de África; y el Golfo (7 cada una); Rusia

y Cáucaso (5); y Centroamérica; Mashreg; Sudeste de Europa y Sudeste Asiático (4 cada una). Los países que padecieron más tensiones en su territorio o cuyos gobiernos fueron actores relevantes en un mayor número de disputas foráneas fueron, por este orden, Rusia (9 casos); China (8); EEUU (7); India e Irán (6); Etiopía, Sudán y Tayikistán (5); Turquía y Uzbekistán (4); o Etiopía, Nigeria, RDC, Rwanda, Indonesia,

Japón y Corea del Norte (3).

Durante 2022 se

identificaron 108

escenarios de tensión.

36 en África, 33 en

Asia y Pacífico, 16 en

América, 12 en Europa

y 11 en Oriente Medio

2.2.2. Tendencias regionales

Como en los últimos años, África fue la región que concentró un mayor número de tensiones (36), aunque su porcentaje sobre el total de casos (33%) disminuyó significativamente respecto del año anterior (41%), tanto por la identificación de un menor número de casos en el continente -dejaron de ser considerados como tales Gambia, Etiopía (Oromiya), RDC-Uganda, Rwanda-Uganda- como por el incremento de casos que se registró en regiones como América o Asia. Por subregiones, África Central y Grandes Lagos fue, con 12 casos, la zona de África (y del mundo) con un mayor número de casos -África Central (LRA); Chad; Guinea Ecuatorial; RDC; RDC-Rwanda; Kenia; Rwanda: Rwanda-Burundi: Sudán: Sudán-Sudán del

□ Baja ■ Alta América Europa Oriente Medio Asia África 10 15 25 20

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones

Sur; Tanzania; Uganda-, seguida de África Occidental (11) -Benín; Burkina Faso; Costa de Marfil; Guinea; Guinea-Bissau; Malí; Níger; Nigeria; Nigeria (Biafra); Nigeria (Delta Níger); Senegal (Casamance)-; el Cuerno

de África (7) -Djibouti; Eritrea; Eritrea-Etiopía; Etiopía; Etiopía-Egipto-Sudán; Etiopía-Sudán; Somalia (Somalilandia-Puntlandia)-; África del Sur (3) - Eswatini; Mozambique y Zimbabwe-y el Norte de África-Magreb (3) -Argelia; Marruecos-Sáhara Occidental; y Túnez. Finalmente, cabe señalar que hubo varios países que estaban involucrados en varios escenarios de tensión, como Etiopía (cinco casos), Sudán y Rwanda (cuatro casos), o RDC, Nigeria y Uganda (tres casos).

Aunque África fue el continente en el que se registraron un mayor número de casos de alta intensidad (10 de 28), su porcentaje sobre el total de casos en 2022 (36%) también disminuyó claramente en comparación con el de 2021 (53%). En su conjunto, el 39% de las tensiones fueron de intensidad baja, el 33% de intensidad media y el 28% de intensidad alta, concretamente 10 casos: Burkina Faso; Chad; Etiopía; Kenia; Malí; Nigeria; Nigeria (Biafra); RDC-Rwanda; Somalia (Somalilandia-Puntlandia); y Sudán. En cuanto a la evolución de las tensiones, el 36% de las mismas en el continente se agravaron, el 39% no registraron cambios fundamentales, y el 25% restante se redujo. Cabe señalar que en 2021 el número de tensiones que se agravaron en África había sido claramente superior (50%), así como su porcentaje sobre el total de tensiones que escalaron (54% en 2021 y 24% en 2022). Cabe destacar especialmente aquellas tensiones que en 2022 dejaron de ser consideradas como tal —Gambia, RDC-Uganda, Rwanda-Uganda y aquellas que en 2021 habían sido de intensidad alta pero que durante el 2022 registraron una reducción en los niveles de violencia respecto al año anterior: Guinea y Marruecos-Sáhara Occidental.

En el sentido inverso, hubo tres tensiones que en 2022 escalaron significativamente y que pasaron a ser consideradas de máxima intensidad -Burkina Faso, RDC-Rwanda y Somalia (Somalilandia y Puntlandia) – y otra - Etiopía (Oromiya) - que se agravó notablemente y pasó a ser considerada como un conflicto armado. En Burkina Faso en un contexto de violencia e inestabilidad política, se produjeron dos golpes de Estado, en enero y en septiembre. La tensión entre RDC y Rwanda se deterioró gravemente como consecuencia de los enfrentamientos ocasionales entre los cuerpos de seguridad de ambos países en la zona fronteriza y de las acusaciones de RDC a Rwanda de apoyar militarmente la ofensiva del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte. En lo concerniente al contencioso entre la autoproclamada república de Somalilandia y la administración de Puntlandia (que

forma parte del Estado federal de Somalia), en diciembre se produjo una escalada de los enfrentamientos en la localidad de Las Anod entre activistas de Puntlandia y los cuerpos de seguridad de Somalilandia, que

Aunque África fue el

continente en el que

se registraron un mayor

número de casos

de alta intensidad.

su porcentaje sobre

el total de casos en

2022 (36%) también

disminuyó claramente

en comparación con el

de 2021 (53%)

desde 2007 ocupan la ciudad de Las Anod -situada geográficamente dentro de las fronteras de Somalilandia aunque la mayoría de los clanes de la región se encuentran asociados a los de Puntlandia. Los enfrentamientos provocaron la muerte de alrededor de 20 personas, según diversas fuentes. A principios de 2023 las fuerzas de Somalilandia se retiraron de la localidad para evitar una escalada de la violencia.

Los factores de causalidad más preponderantes en la región fueron, por

este orden, la oposición al Gobierno (69%); el control de los recursos (28%), las cuestiones relacionadas con la identidad (25%); las demandas de autogobierno y autodeterminación y el control de los recursos (un 14% cada uno de ellos); y la oposición al sistema (11%). Estos datos guardan cierta continuidad con los del año anterior, salvo en las cuestiones de identidad (que se reducen del 30% al 25%), oposición al Gobierno (disminuyen del 74% al 69%) y control de los recursos (que se incrementan del 8% al 14%). En comparación con los datos agregados a escala global, hay algunas causas que están claramente por debajo de la media, como las demandas de autodeterminación (14% vs. 24%), las disputas vinculadas con la identidad (25% vs. 36%) y la oposición al sistema (11 vs. 22%). Por otra parte, las tensiones de naturaleza interna supusieron el 50% de los casos (un 60% en 2021), las internas internacionalizadas un 28% (un 17% en 2021) y las internacionales un 22% (un 23% en 2021), en todos los casos porcentajes muy parecidos a la media mundial.

En América se registraron 16 escenarios de tensión (15% del total), cuatro casos más que en 2021: Jamaica, EEUU, Brasil y Ecuador. De los 16 casos, la gran mayoría se ubicaron en América del Sur (7), seguida de Centroamérica (4), el Caribe (3) y América del Norte (2). En términos generales, la intensidad media de los casos en la región se incrementó respecto del año anterior, puesto que, aunque los casos de máxima intensidad fueron parecidos a los del año anterior (un tercio en 2021 y un 31% en 2022), los casos de menor intensidad se redujeron respecto del año anterior (del 58% al 50%) y los de intensidad media se incrementaron (del 8 al 19%). Además, en términos comparativos, América fue la región con una mayor proporción de casos de máxima intensidad (casi un tercio): Ecuador; Haití; México; Perú; Venezuela. Si bien México, Haití y Venezuela va habían sido considerados como escenarios de alta intensidad en 2021 y en años precedentes, Ecuador y Perú padecieron importantes incrementos de las dinámicas de conflictividad en 2022. En Ecuador, por el dramático aumento de los homicidios y la violencia relacionada con el narcotráfico, así como por las importantes protestas que se registraron en la segunda mitad del año; y en Perú, por las enormes protestas

que se produjeron en diciembre tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, acusado de querer perpetrar un autogolpe de Estado. Por el contrario, si bien las manifestaciones multitudinarias que se registraron en Colombia en 2021 ameritaron que el caso fuera considerado de máxima intensidad el pasado año, en 2022 se redujeron muy significativemente.

2022 se redujeron muy significativamente los niveles de protestas y movilizaciones sociales.

En cuanto a las causas, los 16 casos identificados estaban vinculados a la oposición a las políticas domésticas o internacionales del Gobierno, como en 2021. Además, factores como el control de los recursos y las cuestiones identitarias estuvieron asociadas a tres casos cada uno de ellos; mientras que las dinámicas vinculadas al autogobierno fueron un factor explicativo en otros dos casos y la oposición al sistema en un solo caso (Cuba). Ninguno de los casos en América estuvo relacionado con disputas por el control del territorio. Por otra parte, cabe destacar que todas las tensiones en la región fueron internas, lo que contrasta con los datos agregados a nivel internacional, según los que aproximadamente la mitad de casos en todo el mundo son tensiones de naturaleza interna.

En Asia y el Pacífico se registraron 33 tensiones, el 31% del total a nivel global. En relación al 2021, se contabilizaron nueve casos adicionales: Kirguistán-Tayikistán; Tayikistán (Gorno-Badakhshan); Uzbekistán (Karakalpakistán); China-EEUU; Corea, RPD; Japón-Rusia (Islas Kuriles); Papúa Nueva Guinea; Fiji y Sri Lanka. Por subregiones, 11 de las tensiones estaban en Asia oriental —China (Xinjiang), China (Tíbet), China (Hong Kong), China-Japón, China-

Taiwán, Corea, RPD-EEUU, Japón, Rep. de Corea; Mar de la China Meridional—, ocho en Asia Meridional —Bangladesh, India, India (Assam), India (Manipur), India (Nagalandia), India-China, India-Pakistán y Pakistán—, siete en Asia central—Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán—, cuatro en el Sudeste asiático—Indonesia (Sulawesi), Indonesia (Papúa Occidental), Laos y Tailandia—y dos en el Pacífico—Papúa Nueva Guinea y Fiji. Como en años anteriores, hubo algunos países que estuvieron

involucrados en varios escenarios de tensión, como China (ocho tensiones), India (seis), Tayikistán (cinco), Uzbekistán (cuatro) o Indonesia, Japón y Corea del Sur (tres). Prácticamente la mitad de los casos (49%) fueron de intensidad baja, el 24% de intensidad media

y el 27% restante de alta intensidad. Cabe señalar, sin embargo, que la intensidad media de las tensiones en la región se incrementó significativamente respecto del año 2021, puesto que los escenarios de máxima intensidad se incrementaron del 8% al 27%, mientras

que las de intensidad baja pasaron del 63% al 49%. En consonancia con estos datos, el 58% de los casos identificados en Asia y el Pacífico escalaron en 2022 respecto del año anterior, mientras que solamente un 18% de los casos disminuyeron en intensidad. De hecho, más de una tercera parte de todas las

tensiones en el mundo que escalaron en 2022 se concentraron en Asia. Cabe destacar especialmente la escalada de aquellos escenarios que en 2022 pasaron a ser considerados de máxima intensidad. Kazajstán fue escenario de una crisis social y política en enero, con protestas ciudadanas y grave represión violenta de estas, y un balance de en torno a 200 víctimas mortales, el más mortífero en su historia reciente. La tensión fronteriza entre Kirguistán y Tayikistán se agravó durante el año, con incidentes bélicos y una escalada militar en septiembre que provocó la muerte de un centenar de personas y la evacuación de decenas de miles de personas. En la península coreana, el dramático incremento en el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte respecto de los años anteriores agudizó sustancialmente la preocupación internacional respecto del programa armamentístico norcoreano y deterioró enormemente las relaciones con Seúl, especialmente tras la elección de un nuevo presidente en Corea del Sur. En Sri Lanka, las protestas masivas en Colombo y otras ciudades provocaron la renuncia del primer ministro y, posteriormente, del presidente, que huyó del país. En Pakistán, la destitución del primer ministro mediante una moción de censura motivó intensas protestas sociales. En Papúa Nueva Guinea, los numerosos episodios de violencia comunitaria y vinculada a las elecciones del mes de julio provocaron la muerte de cientos de personas y el desplazamiento

de otras decenas de miles.

El 58% de los casos identificados en Asia y el Pacífico escalaron en 2022 respecto del año anterior, mientras que solamente un 18% de los casos disminuyeron en intensidad

América fue la

región con una

mayor proporción

de tensiones de alta

intensidad

En cuanto a las causas de fondo, los factores con mayor relevancia en la región fueron la oposición al Estado (42%); la oposición al Gobierno y las cuestiones identitarias (39% cada factor); el control del territorio (36%); y las demandas de autogobierno y el control de los recursos (27% cada uno). Esta distribución de factores es parecida a la del año 2021, pero cabe destacar una ligera disminución de la importancia de la oposición al Estado (del 50% al 42%) y

un sensible aumento de la prevalencia del control del territorio (del 29% al 36%). En términos comparativos con otras regiones, la preponderancia de la oposición al Gobierno en Asia fue mucho más baja que la media mundial (39% vs. 69%) o la de algunos otros

continentes, como América (100%) o África (69%). Sin embargo, la prevalencia de otros factores como el control del territorio (36% vs. 19%) fue con mucha diferencia la más alta del mundo. De igual modo, 14 casos (con una prevalencia que prácticamente doblaba la media mundial, 42% vs. 22%) estuvieron vinculados a la oposición al Estado o al sistema: China (Xinjiang); China (Tíbet); China (Hong Kong); China-EEUU;

Corea, RPD-Rep. de Corea; Corea, RPD; India; Indonesia (Sulawesi); Kazajstán; Kirguistán; Lao, RPD; Pakistán; Tayikistán y Uzbekistán. Por otra parte, un poco más de una quinta parte (21%) de las tensiones fueron internas internacionalizadas, una disminución importante respecto del año

anterior, en que significaron una tercera parte. En cambio, si en 2021 las tensiones internas fueron el 38% del total de las tensiones en Asia y el Pacífico, en 2022 tal porcentaje ascendió hasta casi la mitad (49%). El 30% restante de las tensiones fueron internacionales, siendo así Asia la región con un porcentaje más alto de tensiones internacionales. La mayor parte de las mismas se sitúan en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Meridional: la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu); la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur y también con varios países acerca de su programa armamentístico; la tensión entre China-Taiwán; el contencioso entre China y EEUU, que tiene uno de sus principales escenarios en Asia Oriental; la disputa histórica entre Rusia y Japón por las Islas Kuriles, o la crisis en el Mar de la China Meridional que involucra a China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia y Brunei Darussalam. India estuvo involucrada en dos tensiones internacionales con países fronterizos con quienes mantiene una fuerte rivalidad histórica (Pakistán y China), mientras que la tensión internacional restante es la que enfrentó a Tayikistán y Kirguistán.

En Europa se registraron 12 casos, el 11% del total. Respecto del año anterior, dos casos pasaron a ser considerados tensiones - Rusia y Moldova, cuyas dinámicas políticas estuvieron decisivamente influenciadas invasión rusa de Ucrania-, mientras que otro dejó de serlo - España (Cataluña). Precisamente la subregión con un mayor número de casos activos (5) fue Rusia

y el Cáucaso, seguida del Sudeste de Europa (4) y Europa Oriental (3). Además de las dos tensiones que acontecen en su territorio -Rusia y Rusia (norte del Cáucaso)-, Rusia fue claramente el país con una mayor participación en disputas en la región, tanto en escenarios de Europa Oriental -Belarús, Moldova o Moldova (Transnistria) -- como del Cáucaso -- Armenia-Azerbaiyán, Georgia (Osetia del Sur), Georgia (Abjasia). Turquía fue actor en tres de los casos de la región -

Turquía; Turquía-Grecia-Chipre; y, en menor medida, en Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj).

Sin duda el aspecto más destacado del análisis de las tensiones en esta región es que en 2022 se agravaron todos los casos, excepto uno -Rusia (norte del Cáucaso)-, que no registró cambios significativos respecto del año anterior. Por tanto, Europa fue la

> región en la que hubo un mayor porcentaje de casos que empeoraron en 2022 (92%). El deterioro estuvo vinculado tanto a repercusiones de la invasión de Rusia a Ucrania en el continente como a otras dinámicas locales y regionales. Si bien en 2021 el 55% de los casos era de intensidad

baja, en 2022 lo eran solamente el 25%. Los casos de intensidad media subieron del 36 al 67%, y, como en 2021, solamente hubo un caso de alta intensidad: el de Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj).

En cuanto a las causas, la oposición al Gobierno y las disputas vinculadas a la identidad estuvieron presentes en un 67% de los casos cada una, seguidas de las demandas de autogobierno y autodeterminación (58%), de la oposición al sistema y del control del territorio (17%) y, finalmente, del control de los recursos (8%). Cabe destacar que la oposición a las políticas domésticas o internacionales del Gobierno se incrementaron respecto del año anterior (del 55% al 67%) mientras que las demandas de autogobierno disminuyeron su prevalencia en la región (pasando del 73% al 58%). A pesar de ello, Europa sigue siendo a mucha distancia la región del mundo en la que esta causa tiene mayor presencia (la media mundial es del 24%). De igual modo, las cuestiones relacionadas con la identidad tuvieron una mayor importancia en Europa (67%) que en cualquier otra región del mundo. En todo caso, son elementos presentes en contextos de tensión complejos insertos en dinámicas

> más amplias e internacionalizadas en los que tienen peso otros elementos como las disputas geoestratégicas e intereses de actores externos, como es el caso de Rusia en relación a Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria o la ascendencia de Turquía sobre la autoproclamada república turca del norte de Chipre. Finalmente, cabe destacar que el 58% de los casos fueron tensiones internas internacionalizadas, un 25% internacionales y un 17% internas,

porcentajes muy similares a los del año anterior. Respecto de esta cuestión, lo más significativo es la gran disparidad que existe entre el porcentaje de tensiones internas a nivel global (una media del 52%) y en Europa (17%), con solamente tres casos: Rusia, Rusia (norte del Cáucaso) y Turquía. De manera complementaria, las tensiones internas internacionalizadas tenían más del doble de prevalencia en Europa (58%) que a escala internacional (27%).

En Oriente Medio el 64% de los casos estuvieron relacionados con la oposición al Gobierno y el 46% con cuestiones identitarias

En Europa, en

2022 se agravaron

11 de los 12 casos

identificados

En Oriente Medio se identificaron 11 escenarios de tensión, el mismo número que el año pasado, que representa el 10% del total. De los 11 casos identificados, siete se concentraron en el Golfo y los cuatro restantes en el Mashreg. Tal y como sucedió en otras regiones, la tensión promedio de la región se incrementó respecto de 2021, puesto que los casos de intensidad media pasaron de 27 a 36% y los de intensidad alta del 18% a 27%. Además de los escenarios que en 2021 ya fueron de alta intensidad (Irán - EEUU, Israel e Israel - Siria -Líbano), en 2022 se añadió el caso de Irán, donde las movilizaciones antigubernamentales que se iniciaron en septiembre, en las que habrían muerto unas 500 personas hasta finales de año, fueron consideradas como uno de los mayores desafíos al régimen desde 1979. En cuanto a la evolución de las dinámicas de conflictividad, el 73% de los casos no registró cambios significativos respecto del año anterior, pero hubo tres casos (un 27%) relacionados con Irán que escalaron en comparación con 2021: Irán, Irán (noroeste) e Irán (Sistán Baluchistán).

En cuanto a las causas de las tensiones, el panorama fue muy parecido al del año anterior: el 64% de los casos estuvieron relacionados con la oposición al Gobierno; el 46% a cuestiones relacionadas con la identidad; el 27% a las demandas de autodeterminación y autogobierno y también a la oposición al sistema; y el 18% al control de los recursos y del territorio. De todos los factores, aquel que tiene una mayor prevalencia en relación con otras regiones o con la media global es de aspiraciones relacionadas con la identidad (46% en Oriente Medio y un 35% a escala global). Como en 2021, el 46% de las tensiones fueron internas internacionalizadas, el 36% internas, y el 18% internacionales, siendo los dos casos - Irán-EEUU, Israel e Israel-Siria-Líbano- de alta intensidad.

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Occidental

| Burkina Faso | |
|--------------|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Gobierno Interna internacionalizada |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social, sectores del Ejército |

Burkina Faso, antigua colonia francesa, se ha enfrentado desde su independencia en 1960 a diversos golpes militares y numerosos retos socioeconómicos, en un país sin salida al mar y vulnerable a la volatilidad de los precios globales de materias como el algodón. La etapa bajo la presidencia de Blaise Compaoré, quien tomó el poder mediante golpe militar en 1987 y que ganó sucesivas elecciones, afrontó progresivamente numerosos ejes de tensión, vinculados al déficit de derechos humanos, a las alegaciones de participación del país en conflictos de países vecinos, al alza de precios y deterioro del nivel de vida de la población y a las críticas a los intentos del presidente por perpetuarse en el poder. En 2011 se incrementaron las protestas y se produjeron diversos motines militares, generándose una grave crisis de desconfianza entre el Gobierno y sectores diversos. A finales de 2014 Compaoré abandonó el poder tras amplias protestas ciudadanas contra los planes del presidente de eliminar los límites a su mandato presidencial y tras la toma de poder del Ejército. Ante el rechazo social al golpe militar, se dio paso a un proceso de transición bajo liderazgos compartidos, incluyendo las Fuerzas Armadas. El deterioro de la situación de seguridad en el país, debido a los efectos de la regionalización del conflicto armado iniciado en el norte de Malí en 2012, ha contribuido a ampliar la crisis política. En este contexto, Burkina Faso ha sido escenario de diferentes golpes de Estado en los últimos años.

La crisis política se acentuó en el país durante el año padeciendo dos golpes de Estado. El año se inició con un golpe militar que derrocó, el 24 de enero, al Gobierno presidido por Roch Marc Christian Kaboré. Fue depuesto por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, líder del Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y la Restauración (MPSR). Damiba, quien solo un mes antes había sido ascendido a comandante de la tercera región militar de Burkina Faso por Kaboré, anunció la disolución del Gobierno, de la Asamblea Nacional, la suspensión de la Constitución y el cierre de las fronteras del país. Al igual que lo sucedido en otros países del entorno que habían sufrido golpes como Malí y Guinea, el cambio inconstitucional de gobierno generó reacciones dispares al interior y exterior del país. A nivel interno, a diferencia de lo que ocurrió en el 2015 con otro intento de golpe de Estado en el país que provocó importantes movilizaciones en contra, en esta ocasión no se registraron movilizaciones para defender las instituciones democráticas, en gran medida debido al enorme malestar con la situación económica y el deterioro de la seguridad en el país.

Sin embargo, a nivel externo generó la condena de la UA, la CEDEAO, la ONU, EEUU o Francia, entre otros actores. 11 La UA y la CEDEAO suspendieron a Burkina Faso de sus organismos, aunque sin imponer sanciones y la CEDEAO envió una misión de mediación al país. En febrero la Junta Militar aprobó un periodo transicional de tres años antes de la celebración de elecciones v el teniente coronel Damiba juró como presidente. La amenaza de sanciones por parte de la CEDEAO generó que la Junta modificase el cronograma de transición a 24 meses a partir del 1 de julio, programando un referéndum constitucional para finales de 2014 y elecciones generales para febrero de 2025.

El deterioro de la situación de seguridad en el país¹² y la incapacidad de la Junta Militar para contener la violencia, provocó, nueve meses después, un segundo golpe de Estado el 30 de septiembre que derrocó a la Junta presidida por Damiba. El capitán Ibrahim Traoré, jefe de una unidad de artillería de las Fuerzas Armadas de Burkina Faso que encabezó el golpe, justificó el mismo por el deterioro de la situación de seguridad en el país. Los golpistas tomaron el control de la televisión estatal, cerraron las fronteras, impusieron un toque de queda nocturno, anunciaron la disolución del Gobierno de transición y suspendieron la Constitución, acusando a Damiba de no haber sofocado la escalada de violencia en todo el país desde que asumió el poder.

En el contexto del golpe, diferentes edificios franceses, incluida la embajada y los institutos franceses en Uagadugú y Bobo-Dioulasso, fueron atacados por manifestantes que acusaron a Francia de proteger a Damiba. El 2 de octubre, Damiba, quien presuntamente se había refugiado en una base militar francesa, anunció que renunciaba oficialmente a su cargo y se exilió a Togo. En respuesta al nuevo cambio inconstitucional de gobierno, la CEDEAO condenó el golpe y pidió el retorno al orden constitucional, aunque nuevamente sin aplicar sanciones contra el país. El 5 de octubre

Traoré anunció que se adherirá al plan de transición establecido por el régimen anterior. Posteriormente, entre el 14 y 15 de octubre, la nueva junta militar organizó un foro nacional con los representantes de la junta en el cual Traoré fue designado presidente de transición y decretó que el

retorno al orden constitucional se produciría el 2 de julio de 2024 con la celebración de elecciones. La inestabilidad se mantuvo en el país hasta finalizar el año, y el 1 de diciembre la Junta Militar denunció un supuesto intento de golpe que el Ejercito frustró.

| Malí | |
|-------------|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | = |
| Tipología: | Gobierno Interna Internacionalizada |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social, CEDEAO |

Síntesis:

Desde su independencia de Francia en 1960, Malí ha hecho frente a diversos periodos de inestabilidad, incluyendo el golpe militar de 1968; una rebelión popular y militar en 1991; y revueltas e insurgencia tuareg en demanda de mayor participación política y desarrollo del norte del país. Malí celebró sus primeras elecciones pluripartidistas en 1992, si bien desde entonces los diversos comicios han transcurrido en medio de críticas opositoras en relación a la falta de garantías democráticas. El peso del Ejército se evidenció con un nuevo intento de golpe militar en el año 2000, que fue desbaratado. La inestabilidad se incrementó una vez más en 2012, con la toma de control del norte por parte de grupos tuareg e islamistas y un golpe de Estado militar que forzó la caída del Gobierno. A partir de ese momento los sucesivos Gobiernos que ha tenido el país se han enfrentado a múltiples desafíos políticos, económicos y de seguridad, persistiendo la violencia en la zona septentrional del país, y extendiéndose hacia la región central. Durante 2019 se produjo un incremento significativo de las protestas y movilizaciones populares, que fueron seguidas en 2020 de un golpe de Estado y la conformación de un nuevo Gobierno transicional en el país.

Durante el año se mantuvo la crisis política en el país tras el golpe de Estado de 2020 y se siguieron deteriorando las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar maliense y sus aliados tradicionales debido a las discrepancias en el periodo de transición sobre la transferencia de poder a la población civil y la estrategia de seguridad en la región. El año se inició con el anuncio de la Junta Militar de posponer el proceso transicional por cinco años, estableciendo un referéndum constitucional en enero de 2024, elecciones legislativas en noviembre de 2025

> y elecciones presidenciales en diciembre de 2026. El anuncio generó la condena de una coalición de 100 partidos políticos y 60 grupos de la sociedad civil, solicitando a las autoridades interinas respetar el acuerdo de transición de septiembre de 2020. Por su parte, el bloque de países del

África Occidental (CEDEAO) respondió estableciendo nuevas sanciones económicas al país, congeló los bienes de Malí en los bancos centrales de sus Estados miembros, frenó la asistencia financiera y anunció el cierre de las fronteras entre los países de la CEDEAO y Malí. La UE también impuso sanciones al país, en línea con las decisiones tomadas por la CEDEAO, mientras que Rusia y China impidieron que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una declaración

Burkina Faso padeció

durante el año dos

golpes de Estado

^{11.} Bajo, Carlos, "Turbulencias en el Sahel: entre los defectos de la democracia y la reivindicación de la soberanía", Actualidad Africana, El Salto, 4 de febrero de 2022

^{12.} Véase el resumen de Sahel Occidental en el capítulo 1 (Conflictos armados).

redactada por Francia que respaldaba las sanciones. Durante el año se produjeron diferentes manifestaciones en la capital Bamako contra la presencia francesa y las sanciones de la CEDEAO y en apoyo de la Junta, aunque también se registraron protestas contra los cambios en el cronograma de transición impuestos por los militares. Tras varios espacios de negociación entre la Junta Militar y la CEDEAO¹³, en junio el presidente de transición, coronel Assimi Goïta, anunció unilateralmente un período de transición de dos años, en el cual se prevé la celebración de un referéndum constitucional en marzo de 2023 y elecciones presidenciales en febrero de 2024. La CEDEAO volvió a cuestionar la decisión unilateral, anunciando que mantendría las conversaciones. En julio, en la cumbre del organismo, se acordó levantar las sanciones económicas y financieras contra Malí, manteniendo las individuales y diplomáticas, y se exigió que ningún miembro del Gobierno de transición se presentara como candidato presidencial en las elecciones de 2024. En octubre la comisión encargada de la redacción de una nueva Constitución presentó el borrador preliminar, que deberá de someterse a referéndum en marzo de 2023. El texto fue cuestionado por una coalición de partidos de oposición que demandó que el proceso de redacción de la Carta Fundamental fuera manejado por un gobierno civil elegido democráticamente.

Paralelamente, otra de las tensiones políticas en el país se relaciona directamente con el **deterioro de las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar y los antiguos aliados occidentales de Malí**, principalmente con el Gobierno francés. ¹⁴ Este deterioro de las relaciones responde también al anuncio del Gobierno maliense de un acuerdo de cooperación militar con Rusia, desplegándose en el país a principios de año entre 300 y 400 instructores rusos. Las autoridades interinas negaron su vinculación con la empresa rusa de seguridad privada Wagner Group. Entre los episodios más destacados durante el año en la crisis diplomática se encuentra la orden de expulsión del embajador francés del país; la suspensión

de los acuerdos de colaboración militar con Francia; la suspensión de los permisos de transmisiones de los medios de comunicación franceses RFI y France24; el fin de la operación antiterrorista Barkhane en el país; la retirada del país de la operación europea Takouba; la suspensión de las misiones de la UE en Malí (EUCAP y EUTM); las tensiones con la misión de mantenimiento de la paz de

la ONU (MINUSMA); la retirada de Malí de todos los órganos e instancias del G5 Sahel, incluida la fuerza militar conjunta; la prohibición a las ONG francesas y financiadas por Francia de operar en el país; o la

acusación realizada por la Junta Militar de haber abortado un intento de golpe de Estado entre el 11 y 12 de mayo, supuestamente orquestado por un Estado occidental.

| Nigeria | |
|-------------|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Identidad, Recursos, Gobierno Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política, organizaciones de la sociedad civil,comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN |

Síntesis:

Tras la independencia en 1960, la incapacidad de los sucesivos gobiernos para abordar los problemas asociados con ciudadanía, etnia, religión o distribución de recursos ha agravado las percepciones de agravios y descontento, lo que ha llevado al surgimiento de demandas separatistas en varias regiones. Además, desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas. Paralelamente, las acciones de grupos criminales en el noroeste del país, de origen multicausal, se han multiplicado desde 2018.

En Nigeria se produjo un incremento de la violencia política y de la violencia criminal, principalmente como

consecuencia de la proximidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias de febrero de 2023 y de la persistencia del aumento de la violencia durante el 2022 por parte de grupos criminales en el noroeste del país, mientras que el conflicto en esa región y en la cuenca del Lago Chad permaneció en unos umbrales de violencia similares a 2021. ¹⁵ A esto se sumó el clima permanente de violencia

intercomunitaria entre ganaderos y agricultores del cinturón central del país, así como la persistencia de los enfrentamientos y acciones insurgentes en el estado de Biafra. 16 Las elecciones de 2023 marcan

diplomáticas entre la Junta Militar de Malí y los antiguos aliados occidentales

Las relaciones

ados occidenta siguieron deteriorándose

13. Véase Escola de Cultura de Pau, Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios, Barcelona: Icaria, 2023.

^{14.} Véase los resúmenes sobre Malí (norte) y Sahel Occidental en el capítulo 1 (Conflictos armados).

^{15.} Véase el resumen de Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

^{16.} Véase resumen de Nigeria (Biafra) en este capítulo.

24 años de democracia ininterrumpida, el período más largo desde la independencia, aunque tendrá lugar en medio de un clima general de inseguridad y violencia multifactorial y multiactor en el conjunto del país. Una veintena de los 36 estados que componen el Estado federal nigeriano se vieron gravemente afectados en 2022 por este elevado clima de violencia. Centros de investigación como el International Crisis Group y

ACLED señalaban que durante el año 2022 se habrían producido más de 10.000 víctimas mortales vinculadas al clima de violencia criminal e insurgente en el conjunto del país. La compra masiva de votos comprometería profundamente la integridad de las elecciones y socavaría la confianza en el resultado, según destacó el International Crisis Group en diciembre. 17

Los grupos armados islamistas BH, Ansaru e ISWAP, en su voluntad de obstaculizar las acciones gubernamentales -como los procesos electorales, vistos como una imposición occidental- establecieron enclaves en diversas partes de los estados

de Zamfara, Katsina, Kaduna y Níger, donde llevaron a cabo acciones armadas de forma creciente durante 2022.18 En el noroeste, también había más de cien grupos de bandas de criminales que participan en secuestros, saqueos e incendios provocados con la voluntad de erosionar al Estado nigeriano. En años anteriores el Gobierno federal había llevado a cabo iniciativas que fracasaron, como las operaciones militares terrestres y aéreas contra las bases de estos grupos criminales, el apagón de las telecomunicaciones por parte del Gobierno y las restricciones en el acceso a combustible y en el suministro de alimentos, así como las limitaciones a los movimientos de ganado y la reducción de los horarios o cierre de los mercados, como medidas para presionar a los grupos criminales. Ante el fracaso de medidas de años anteriores, en el estado de Zamfara, uno de los más afectados por la violencia, las autoridades intentaron promover acuerdos de paz, amnistías y otros incentivos -como el acuerdo con el poderoso señor de la guerra Bello Turji, anteriormente ganadero– con desigual resultado. Este clima de violencia fue en aumento durante el año, siguiendo la tónica de años precedentes, exacerbado por la proximidad del proceso electoral, debido a la instrumentalización de la violencia criminal y política por parte de los actores contendientes. Además, según diversos análisis, la posibilidad de que los grupos de criminales e islamistas se coordinen para interrumpir o al menos entorpecer las elecciones sigue siendo elevada, y ambos grupos ya colaboran cuando es de interés mutuo. 19 Con el pretexto de abordar la inseguridad, surgieron diversos actores armados no estatales progubernamentales que alegaban tener el objetivo de mantener la ley y el orden. Algunos, como Amotekun en el suroeste, Ebubeagu en el sureste y la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF) en el noreste, contaban con el respaldo del Estado y sus gobernadores.²⁰ Estos grupos, según diversos análisis, contaban con una mala

> formación y podrían ser instrumentalizados políticamente ante la proximidad de la cita electoral. A finales de año surgieron denuncias sobre acciones abusivas, como actos de intimidación, de estas milicias y grupos paramilitares progubernamentales. El uso de grupos paramilitares y milicias de autodefensa financiadas u organizadas por parte de gobernadores y políticos locales ha sido una constante histórica en Nigeria.

> En los cuatro estados del noroeste del

país (Zamfara, Katsina, Kaduna y Níger) los actos de violencia provocaron 4.480 víctimas mortales, según ACLED -cifra que ascendía a 4.655 víctimas mortales

si se incluye Sokoto-, 500 víctimas mortales más que el año 2021, cuando se produjeron 4.162 (año en que se incluyó a Sokoto en el recuento). Esta cifra, no obstante, se debe relativizar dadas las dificultades para diferenciar las acciones de estos grupos de bandas de criminales de otras dinámicas de violencia, debido a la multiplicidad de actores, entre ellos grupos criminales, cuerpos de seguridad, actores armados yihadistas, grupos vinculados a comunidades ganaderas y milicias de autodefensa civiles.

| Nigeria (Biafra) | |
|------------------|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | = |
| Tipología: | Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada |
| Actores: | Gobierno, organizaciones independentistas MASSOB, IPOB (que dispone de un brazo armado, el ESN) |

Síntesis:

Ante la escalada

de violencia e

inseguridad en

Nigeria surgieron

diversos actores

armados no estatales

progubernamentales

que podrían ser

instrumentalizados

políticamente en el

marco del proceso

electoral

Tras la independencia en 1960, el Estado nigeriano se ha enfrentado al reto de articular las diferentes nacionalidades étnicas. El ejemplo más paradigmático fue la guerra civil entre el Estado y la autoproclamada República de Biafra (1967-1970), en la que murieron entre 1 y 3 millones de personas. Después de tres décadas de gobierno militar, el advenimiento de la democracia en 1999 generó nuevas expectativas de acomodación de identidades y demandas de reestructuración política que no se han hecho realidad,

^{17.} International Crisis Group, Countdown Begins to Nigeria's Crucial 2023 Elections, 23 de diciembre de 2022.

^{18.} Véase el resumen del conflicto armado en la región del Lago Chad en el capítulo 1 (Conflictos armados).

^{19.} Idayat Hassan, The insecurity ahead of Nigeria's 2023 elections is unprecedented, African Arguments, 21 de diciembre de 2022.

^{20.} Op.cit.

alimentando los agravios separatistas. En este contexto, las demandas de autodeterminación han resurgido en el sureste del país -denominado como Biafra por los movimientos independentistas- a través de organizaciones noviolentas, principalmente con el Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra (MASSOB), creado en 1999 y luego por otros movimientos secesionistas incluido el Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), creado en 2012. El ascenso al poder de Muhammadu Buhari en 2015, percibido como una amenaza en las regiones del sur, ha contribuido a un incremento de la tensión. El encarcelamiento en 2015 del líder del IPOB, Nnamdi Kanu, provocó un incremento de las movilizaciones que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad nigerianos, que desde entonces emprendieron una campaña de violencia y ejecuciones extrajudiciales, situación que se agravó con la ilegalización del IPOB en 2017 y el incremento de la violencia en la segunda mitad del 2020, especialmente en el contexto de la prohibición del IPOB.

En el sureste de Nigeria persistieron los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y la insurgencia, así como las operaciones militares que causaron decenas de víctimas mortales. El brazo armado del movimiento independentista IPOB, la Red de Seguridad del Este (ESN), continuó llevando a cabo acciones armadas durante todo el año. Según el centro de investigación ACLED, en 2022 se produjeron 703 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 985 personas en el conjunto de los 10 estados que componen la región de Biafra (Enugu, Anambra, Ebonyi, Imo, Abia, Rivers, Bayelsa, Akwa Ibom, Delta y Cross River, aunque fue en los cinco primeros, en los que la comunidad ibo es mayoritaria, donde se concentraron la mayoría de las víctimas mortales vinculadas al conflicto). Esta cifra incluía la violencia vinculada al conflicto armado de Biafra entre el Gobierno y grupos armados independentistas, pero también los múltiples ataques en ese estado cometidos por grupos criminales, así como los enfrentamientos de carácter intercomunitario por los usos y la propiedad de la tierra, así como por el acceso al agua, que causaron centenares de víctimas mortales.

El clima de inestabilidad y la recurrencia de las operaciones militares, que causaron decenas de víctimas mortales durante el año, así como los ataques contra puestos de policía y destacamentos militares, supusieron un grave obstáculo para el desarrollo de las elecciones presidenciales y parlamentarias de febrero de 2023, ya que la ESN se encontraba detrás de los ataques contra el personal e infraestructuras de la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC). Cabe destacar que el 13 de octubre el Tribunal de Apelaciones de Abuja retiró todos los cargos contra el líder del IPOB Nnamdi Kanu. Kanu había demandado en marzo al fiscal general y al presidente Buhari por su arresto. El tribunal argumentó irregularidades procedimentales y el arresto y extradición ilegal. Kanu había sido arrestado en junio de 2021 en Kenia y extraditado a Nigeria, acusado de sedición, incitación al odio étnico y traición. Desde entonces, se había producido una intensificación de las protestas y movilizaciones sociales exigiendo su liberación, sumada

a múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad de Nigeria (NSF). A pesar de la sentencia, el 19 de octubre el Gobierno apeló la sentencia y Kanu permaneció en custodia policial.

Cuerno de África

| Etiopía | |
|-------------|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Gobierno |
| | Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados |

Síntesis:

El régimen que ha gobernado Etiopía desde 1991 se ha enfrentado a una serie de movimientos opositores que reclamaban avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) estuvo controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que gobernó el país entre 1991 y 2019 con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Ha existido un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estadonación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista. Los siguientes comicios (2010, 2015) limitaron todavía más la apertura democrática al incrementar la verticalidad del régimen y la represión de la oposición política. La Ley antiterrorista de 2009 contribuyó a diezmar a la oposición. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, y la organización del desarrollo de la ciudad generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya, lo que contribuyó a incrementar la tensión. La movilización social contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn a inicios de 2018 y la designación de Abiy Ahmed, que emprendió una serie de reformas –entre las cuales, disolver la coalición EPRDF y refundarla en diciembre de 2019 en un nuevo partido de ámbito nacional, el Prosperity Party (PP), que rehuía el federalismo étnico, partido en el que el TPLF no quiso integrarse- dirigidas a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles. Sin embargo, los cambios introducidos por el Gobierno de Abiy Ahmed provocaron tensiones en la federación, en especial entre el Gobierno Federal controlado por el PP y el TPLF, que culminó con el estallido de un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigré, conflicto de dimensiones regionales por la implicación de Eritrea. En paralelo, durante 2022 se produjo una escalada de la violencia por parte del grupo armado OLA y un aumento de la represión por parte de los cuerpos de seguridad en la región de Oromiya.

El país continuó sumido en una grave situación como consecuencia de los impactos de la guerra entre actores armados de la región de Tigré y el Gobierno federal y sus aliados,21 cuya intensidad se redujo a partir de diciembre como consecuencia del acuerdo de paz. No obstante, cabe destacar la persistente escalada de la violencia en la región de Oromiya,22 los recurrentes brotes de violencia intercomunitaria en diferentes partes de la federación, las incursiones del grupo armado somalí al-Shabaab en el este de Etiopía y la creciente tensión en diversas regiones vinculada a movimientos secesionistas. Finalmente, es remarcable la mejora de la situación en la región de al-Fashaga, fronteriza con Sudán, a raíz de la distensión de las relaciones entre Etiopía y Sudán después de meses de grave tensión.

Las iniciativas de diálogo político anunciadas por el Gobierno a principios de 2022 y celebradas por la comunidad internacional —que incluyeron la liberación de prominentes opositores, como uno de los fundadores del Tigrayan People's Liberation Front, Sebhat Nega, los líderes del Oromo Federalist Congress, Jawar Mohammed y Bekele Gerba, y el periodista y líder opositor Eskinder Nega, decisión

calificada por el secretario general de la ONU Antonio Guterres como una medida de construcción de confianza significativa- surtieron poco efecto debido al boicot de diferentes movimientos políticos secesionistas del país, como los partidos políticos Oromo Federalist Congress, Oromo Liberation Front y Ogaden National Liberation Front. En paralelo, la violencia intercomunitaria que sacude periódicamente diferentes regiones del país se vio agravada por el conflicto en la región de Oromiya y la extensión de este a otras regiones, así como las crecientes actividades de grupos secesionistas y las acciones contrainsurgentes de los cuerpos de seguridad, como en Gambella o en Benishangul-Gumuz, entre otras. En Gambella, el Gambella Liberation Front, un grupo rebelde de la región, colaboró con el grupo armado Oromo Liberation Army en acciones contra los cuerpos de seguridad regionales. La presencia de comunidad oromo en otras regiones del país tuvo consecuencias en términos de brotes de violencia y persecución de la comunidad oromo -como en la región de las Naciones y Nacionalidades del Sur (SNNPR, por sus siglas en inglés)– tal y como denunciaron diferentes organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. Cabe destacar también los enfrentamientos esporádicos entre el Gumuz People's Democratic Movement y las Fuerzas Armadas federales en la región de Benishangul-Gumuz. En este sentido, también cabe señalar que durante el año se produjeron brotes esporádicos de violencia y represalias entre grupos vinculados a diferentes religiones en diferentes partes del país.

Otro de los focos de tensión que ha afectado a Etiopía en los últimos años ha sido el contencioso regional vinculado a la construcción de la **Gran Presa del Renacimiento Etíope** (GERD, por sus siglas en inglés). En febrero Etiopía señaló que había iniciado la producción de energía hidroeléctrica en la GERD y en agosto el primer ministro Abiy Ahmed anunció que había completado el tercer llenado del embalse, iniciado en 2020.²³ Estos anuncios provocaron reacciones de rechazo de Sudán y Egipto y una comunicación de Egipto al Consejo de Seguridad de la ONU a finales de julio protestando ante las decisiones unilaterales de Etiopía que podrían desencadenar una escalada de la tensión de graves

consecuencias regionales. Finalmente, cabe destacar la incursión en Etiopía que llevó a cabo el grupo armado somalí al-Shabaab en julio, cuando penetró en la región etíope de Somalí. Las autoridades anunciaron la muerte de alrededor de más de 200 combatientes del grupo en diferentes operaciones. Al-Shabaab, según diversos análisis, estaría pretendiendo ampliar su radio de acción fuera del territorio somalí.

Finalmente, en relación con la disputa fronteriza entre Sudán y Etiopía, motivo de inestabilidad y enfrentamientos esporádicos entre ambos países desde el inicio de la guerra en Tigré, cabe destacar la mejora de las relaciones entre ambos a raíz del encuentro entre el primer ministro etíope y el presidente de facto de Sudán, en general al-Burhan el 15 de octubre en la ciudad etíope de Bahir Dar. Ambos países habían mantenido históricamente una disputa en torno a la región fronteriza de al-Fashaga (un área de Sudán al este del río Atbara y al sur del río Tekeze). Etiopía nunca firmó un tratado con Sudán sobre el territorio, porque el gobierno argumentó que la región quedó bajo control etíope cuando Sudán fue se declaró independiente en 1956. Etiopía había abandonado desde 2008 todas las reclamaciones sobre al-Fashaga siempre que Sudán permitiera que los agricultores y activistas etíopes armados y no armados permanecieran en el área. Con el estallido de la guerra de Tigré, la tensión entre Sudán y Etiopía se intensificó. Desde entonces y durante el año 2022 se produjeron enfrentamientos esporádicos entre los cuerpos de seguridad etíopes y sudaneses y milicias en la frontera común, que causaron decenas de víctimas mortales, así como la ocupación por parte de Sudán de territorios en disputa. Tras este encuentro en octubre, se celebraron diversas reuniones que culminaron con la

firma de un acuerdo de cooperación y seguridad el 15

de diciembre para resolver la disputa fronteriza.

Etiopía continuó

sumida en una grave

situación como

consecuencia de

los impactos en el

conjunto del país de

las guerras en Tigré

y en Oromiya

^{21.} Véase el resumen sobre Etiopía (Tigré) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

^{22.} Véase el resumen sobre Etiopía (Oromiya) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

^{23.} Véase "La cuenca del Nilo: ¿cooperación o conflicto?" en capítulo 5 (Escenarios de Riesgo para 2021) en Escola de Cultura de Pau. Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Barcelona: Icaria, 2021.

| Kenia | |
|-------------|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | \uparrow |
| Tipología: | Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada |
| Actores: | Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenia, ISIS |

Síntesis:

La política y la economía de Kenia han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. A partir de 2002, el proceso clientelar para suceder al autocrático Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) se interrumpió por la victoria de Mwai Kibaki. Desde entonces, han aflorado diferentes conflictos etnopolíticos en el país lo que ha provocado un clima de violencia política durante los diferentes ciclos electorales. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras este proceso electoral se formó un frágil Gobierno de unidad nacional entre Mwai Kibabi y Raila Odinga. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007, aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, la intervención militar de Kenia en Somalia desencadenó ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenia, la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenia, y tensiones entre Kenia y Somalia a causa de sus diferentes agendas políticas, lo que suponen retos añadidos a la estabilidad del país.

El año estuvo marcado por un creciente clima de tensión y polarización vinculado al proceso electoral

celebrado en agosto, así como por la persistencia de los ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en el este y el noreste y el incremento de la violencia intercomunitaria y de la criminalidad principalmente en el norte y el centronorte, vinculada a disputas estructurales en torno a los usos y la propiedad de la tierra agravadas por la extrema sequía derivada de las consecuencias del cambio climático. Según datos de ACLED,24 durante el 2022 se registraron 440 eventos violentos (batallas, contra civiles y explosivos improvisados) en el conjunto del país que costaron la vida

a 498 personas, acciones que estarían principalmente vinculadas a la violencia intercomunitaria y los ataques

de al-Shabaab. Si a esta cifra se le añade la violencia vinculada a protestas y a movilizaciones con disturbios, el número de eventos violentos alcanzó la cifra de 1.660 y las víctimas mortales ascendieron a 698, lo que pone en evidencia la inestabilidad vinculada al proceso electoral.

Las confrontaciones y la movilización política entre los partidarios del presidente Uhuru Kenyatta, aliado del candidato Raila Odinga, y los partidarios del vicepresidente William Ruto y aspirante a la presidencia, fueron en aumento y alcanzaron cotas de violencia muy preocupantes durante el año hasta la celebración de las elecciones en agosto. La jornada electoral transcurrió de forma generalmente pacífica, y las misiones de observación electoral, como la de la EAC, ratificaron que el proceso había transcurrido de forma transparente y en libertad, aunque se registraron una decena de incidentes violentos. Las elecciones dieron la victoria a William Ruto y su alianza de partidos United Democratic Alliance (UDA) sobre Raila Odinga y la coalición Azimio la Umoja, en la que se integraba el partido Jubilee del presidente saliente Uhuru Kenyatta. Raila Odinga no aceptó la derrota y anunció que llevaría a cabo todas las medidas legales a su alcance así como protestas y movilizaciones por todo el país para impugnar los resultados. El Tribunal Supremo ratificó la victoria de Ruto. A pesar de las críticas y las movilizaciones, el nuevo presidente William Ruto consiguió consolidar su poder, y Uhuru Kenyatta –que fue nombrado enviado especial para los Grandes Lagos, confirmando Ruto la continuidad en la política exterior de Kenia- anunció que facilitaría el traspaso de poder. En octubre cabe destacar que Ruto desmanteló una unidad de policía de elite, la Special Service Unit, acusada de haber cometido ejecuciones extrajudiciales, decisión celebrada por Amnistía Internacional.

Por otra parte, el grupo armado somalí al-Shabaab continuó llevando a cabo ataques contra las fuerzas

de seguridad y la población civil durante todo el año, incluyendo el uso de artefactos improvisados al paso de convoyes militares, principalmente en los condados del noreste y este (Mandera, Wahir, Garissa y Lamu) causando decenas de víctimas mortales. En agosto el grupo armado reiteró que continuaría perpetrando ataques hasta que las tropas de Kenia abandonaran Somalia.²⁵ No obstante, algunos ataques supuestamente cometidos por al-Shabaab respondían a disputas intercomunitarias instrumentalizadas políticamente debido a la carrera electoral. Fue el caso de Lamu, donde aunque el Gobierno responsabilizó

a al-Shabaab de los actos de violencia, fuentes locales señalaron que la tensión entre las comunidades kikuyu

electoral continuó llevando a cabo ataques contra las fuerz de seguridad y la población civil durar todo el año, incluyendo el uso de artefact

que afecta el Cuerno

de África se puso

de manifiesto por

la gravedad de la

situación humanitaria

y por el deterioro

de la situación de

seguridad derivada de

la competencia por

los recursos escasos

^{24.} ACLED, en línea. [Consultado el 31 de enero de 2023].

^{25.} Mohammed Dhaaysane, Al-Shabab Militants Issue New Threats Against Kenya, VOA, 28 de agosto de 2022.

y swahili en competencia por alcanzar el puesto de gobernador en el condado estaba agravando las tensiones estructurales en torno a las disputas por la propiedad y usos de la tierra.

La extrema seguía que afecta el Cuerno de África se puso de manifiesto en Kenya por la gravedad de la situación humanitaria y por el deterioro de la situación de seguridad derivada de la competencia por los recursos escasos. El PMA alertó en abril de que tres millones de personas sufrían una situación de inseguridad alimentaria grave como consecuencia de la sequía. Los condados del norte y centro-norte registraron disputas intercomunitarias persistentes en torno al acceso a tierra, agua y pastos, así como por la proximidad de las elecciones generales de 2022, que los partidos políticos tradicionalmente instrumentalizan en beneficio propio. Los robos de ganado, ataques de milicias comunitarias, represalias y la intervención de los cuerpos de seguridad fueron constantes durante todo el año en los condados de Marsabit, Isiolo, Baringo, West Pokot, Elgeyo-Marakwet, Samburu, Turkana, Garissa y Wajir. La gravedad de la situación llevó a las autoridades a declarar el toque de queda en mayo en los condados de Marsabit e Isiolo, que fue prorrogado durante varios meses y ampliado en julio a partes de los condados de Baringo, Elgeyo-Marakwet y West Pokot en un intento de hacer frente a la criminalidad y la violencia intercomunitaria. En el caso de Marsabit se añade el hecho de que el grupo insurgente etíope Oromo Liberation Army (OLA) habría estado utilizando este condado como base de apoyo a sus operaciones en Etiopía, según el International Crisis Group. El OLA se habría dirigido al Gobierno de Kenia demandando neutralidad en lo concerniente al conflicto entre el OLA y las autoridades etíopes.²⁶

Grandes Lagos y África Central

| Chad | |
|-------------|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | <u> </u> |
| Tipología: | Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad Interna internacionalizada |
| Actores: | Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Tansformateurs), grupos armados chadianos (52 grupos, entre los principales, FACT, CCMSR, UFDD, UFR), milicias comunitarias, milicias privadas |

Síntesis:

Con frecuencia clasificado como uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, Chad enfrenta un complejo clima de inestabilidad y violencia desde casi todo el período posterior a la independencia en 1960. La diversidad étnica del país se ha visto instrumentalizada por una tradición de faccionalismo. El colonialismo francés también exacerbó la animosidad entre el norte mayoritariamente musulmán y el sur más cristiano y animista, división instrumentalizada políticamente y que forma parte del núcleo del conflicto. Los sucesivos gobiernos desde 1966 se han visto confrontados por insurgencias que pretendían acceder al poder. Libia y Francia históricamente han estado presentes en los asuntos internos chadianos, apoyando, respectivamente, a insurgencias y gobiernos. El presidente autoritario Hissène Habré (en el poder desde 1982) fue reemplazado mediante un golpe de Estado en 1990 por otro norteño, Idriss Déby, que gobernó desde entonces en un clima de represión y violencia. Déby reformó la Constitución en 2005, boicoteada por la oposición, lo que le permitió convertirse en uno de los líderes más longevos en el poder (1990-2021), pero que fue el germen de una insurgencia compuesta por desafectos al régimen. A esto se añade el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra de la vecina región sudanesa de Darfur desde 2003. Por último, cabe destacar las recientes intervenciones militares en el norte contra grupos con base en Libia (entre los que se encuentra el Frente para el Cambio y la Concordia en Chad, FACT) y contra la minería ilegal, así como contra Boko Haram en la región del Lago Chad. El clima de inestabilidad se agravó con la muerte del presidente Idriss Déby en abril de 2021 y el subsiguiente golpe de Estado por parte de un consejo militar que instaló a su hijo, Mahamat Idriss Déby, como nuevo presidente, suspendió la Constitución y la reemplazó con una carta de transición y la promesa de elecciones libres al cabo de 18 meses, tras la celebración de un diálogo nacional.

Chad continuó inmerso en un grave clima de inestabilidad y violencia.27 El periodo de transición de 18 meses adoptado en abril de 2021 por el consejo militar que ocupó el poder mediante un golpe de Estado -y que suspendió la Constitución e instaló a Mahamat Idriss Déby, hijo de Idriss Déby, tras la muerte de esteha significado la consolidación del poder de Déby. Durante este periodo entre abril de 2021 y finales de 2022 la Junta Militar ha utilizado la violencia para reprimir la disidencia y las protestas pacíficas que pedían el regreso de un gobierno civil. El proceso de paz de Doha y el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano concluyó en octubre de 2022 con la prolongación del mandato del Consejo Militar de Transición (CMT) bajo la imagen de un nuevo Gobierno, calificado de unidad nacional, y la continuidad de la presidencia de Mahamat Déby, lo que ha supuesto la perpetuación de la ruptura constitucional iniciada en abril de 2021. El mandato del CMT fue prolongado a partir de octubre de 2022 por un nuevo periodo de 24 meses, tras el cual se celebrarán

^{26.} Finfinne News Network, OLF-OLA sends an open letter to the Kenyan government, 11 de mayo de 2022.

^{27.} Véase el resumen de Chad en el capítulo 1 (Conflictos armados). Para profundizar en la cuestión, véase Josep Maria Royo, Claves y retos de la transición en Chad (2) esperanzas frustradas con el proceso de paz y el diálogo nacional, Apunts ECP de Conflictes i Pau, No 23, Escola de Cultura de Pau, diciembre de 2022; Josep Maria Royo, Claves y retos de la transición en Chad (1) Cambio climático, inestabilidad y conflicto, Apunts ECP de Conflictes i Pau, No, 19, Escola de Cultura de Pau, noviembre de 2022.

elecciones a las que se podrá presentar Mahamat Déby. La perpetuación del régimen de Déby desencadenó en octubre el rechazo de la oposición política y social y la subsiguiente represión por parte de los cuerpos de seguridad, causando decenas de víctimas mortales en 2022, lo que evidenció la deriva autoritaria del Gobierno y la voluntad de silenciar la oposición política y social con todos los medios a su alcance. La respuesta internacional tras la prolongación del mandato del CMT evidenció el fracaso de la comunidad internacional para evitar la deriva autoritaria y represora del régimen chadiano y lanzó un peligroso mensaje a otros países de la región.

En julio de 2021 se estableció el Comité Organizador para el Diálogo Nacional Inclusivo (CODNI), con la voluntad de organizar –inicialmente en diciembre de 2021– el anunciado diálogo nacional. No obstante, los desacuerdos en torno a los integrantes del CODNI, la inclusividad del diálogo nacional, la injerencia del CMT, la participación de las diferentes insurgencias o la agenda de temas del mismo diálogo,

entre otras cuestiones, retrasaron su celebración. Su retraso se justificó por la voluntad de facilitar la participación de las insurgencias en el diálogo, para lo cual se pretendía un acuerdo de paz previo entre estas y el CMT. Las negociaciones formales se iniciaron en marzo de 2022 en Doha (Qatar) bajo la mediación qatarí, y después de diversas rondas negociadoras, el 7 de agosto se alcanzó un acuerdo de paz entre decenas de grupos insurgentes del país y el Gobierno. Este acuerdo era el paso previo y condición para participar en el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (DNIS) que había estado impulsando el Gobierno junto a diferentes sectores de la sociedad civil, y que se celebró entre el 20 de agosto y el 8 de octubre de 2022.²⁸

Los contactos entre representantes oficiosos del CMT y sectores insurgentes en Togo, en Egipto y Francia, celebrados en 2021 continuaron con el ofrecimiento de Qatar a facilitar encuentros en Doha con los grupos insurgentes, lo que fue celebrado por la oposición político-militar chadiana como un impulso al proceso. Previamente, el CMT había dado luz verde a una de las principales demandas de la insurgencia, el establecimiento de una amnistía como condición a participar en el diálogo nacional. En noviembre de 2021 Mahamat Déby había decretado una amnistía para alrededor de 300 líderes insurgentes y opositores políticos encarcelados o exiliados. Esta cuestión dio una imagen de apertura a la junta militar. En este sentido, el CMT había llevado a cabo una política de gestos y medidas para ganarse el apoyo de la oposición

a través de la cooptación de actores políticos y sociales opositores, entre los que destaca el histórico líder de la oposición Saleh Kebzabo (nombrado vicepresidente del CODNI y al término del DNIS, primer ministro). Después de diversos retrasos, finalmente el 13 de marzo de 2022 se iniciaron los contactos entre los representantes de más de 40 grupos insurgentes y el CMT en Doha, bajo la mediación del enviado especial qatarí Mutlaq bin Majed Al Qahtani. De entre estas decenas de actores armados, solo cuatro representaban una verdadera amenaza militar para el régimen de Mahamat Déby: el Frente para el Cambio y la Concordia en Chad (FACT), el Consejo de Mando Militar para la Salvación de la

República (CCSMR), la Unión de Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo (UFDD) y la Unión de Fuerzas de Resistencia (UFR).

El objetivo del proceso negociador –calificado como pre-diálogo al DNIS– era lograr la participación de estos grupos armados en el DNIS. Finalmente, tras cinco meses de rondas negociadoras, 34 de los 52 grupos político-militares, incluidos la

UFDD y la UFR, firmaron un acuerdo el 7 de agosto en Doha a cambio de la liberación de los presos, la amnistía y el fin de las hostilidades entre el Gobierno y estas facciones armadas, así como de la participación en el DNIS. 18 grupos armados, incluido el FACT, rechazaron el acuerdo,²⁹ denominado Acuerdo de Doha por la Paz y la Participación de los Grupos Político-Militares en el DNIS, y formaron una nueva coalición opositora, el Cadre permanent de concertation et de réflexion (CPCR).30 El CPCR argumentó su rechazo al acuerdo señalando agravios en las cuotas de participación en el diálogo nacional, el incumplimiento de la liberación de prisioneros de guerra y la inelegibilidad de las autoridades de transición para presentarse a las elecciones posteriores a la transición, según destacó el informe del secretario general de la ONU de diciembre.31 Según el acuerdo, el CMT y centenares de representantes de la oposición político-militar podrían participar en el DNIS, y los representantes de los grupos rebeldes tendrían garantías de acceso y protección armada. La UA había acordado en mayo de 2021 apoyar la transición con la condición de que las autoridades celebraran elecciones presidenciales en un plazo de dieciocho meses, transición que debería culminar en octubre de 2022, y también que se prohibiera que los miembros de la Junta Militar se presentaran a las elecciones, exigiendo que la junta modificara la carta de transición para incluir estas cláusulas. Sin embargo, la Junta no enmendó la carta de transición como prometió, y señaló que la revisión de la carta debería discutirse durante el diálogo nacional.

El diálogo nacional

en Chad ratificó la

ruptura constitucional

iniciada en abril de

2021 por Mahamat

Déby y su Junta

Militar

^{28.} Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

^{29.} Mills, Andrew, Chad signs peace pact with rebels, but main insurgents stay out, Reuters, 8 de agosto de 2022.

^{30.} Madjissembaye Ngarndinon, Tchad : les groupes armés non signataires de l'accord de Doha mettent en place un cadre commun de lutte, *Tchad Infos*, 8 de agosto de 2022.

^{31.} Consejo de Seguridad de la ONU, La situación en África Central y las actividades de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central, S/2022/896 de 1 de diciembre de 2022.

El DNIS estaba previsto que se celebrara en diciembre de 2021 y posteriormente se fijó para febrero de 2022, pero fue pospuesto reiteradamente, a la espera de que el pre-diálogo de Doha culminara exitosamente para facilitar la participación de los actores armados. Finalmente, la firma del acuerdo de Doha el 7 de agosto permitió la puesta en marcha del DNIS. El 20 de agosto, más de 1.400 representantes de movimientos políticomilitares, representantes del Gobierno de transición, representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones de mujeres y jóvenes, líderes tradicionales, diáspora, autoridades provinciales, fuerzas de seguridad e instituciones estatales y sindicatos iniciaron en N'Djamena el DNIS,

con la presencia de actores regionales e internacionales. El FACT, la coalición de organizaciones de la sociedad civil Wakit Tama y el partido opositor Les Transformateurs, entre otros, boicotearon el diálogo. La Conferencia Episcopal de Chad se retiró del DNIS debido a que no percibía que hubiera un proceso de diálogo real.³² Este anuncio contribuyó a alimentar la frustración de diversos actores políticos y sociales que veían con preocupación la evolución del DNIS, y que organizaron diversas movilizaciones pacíficas contra el DNIS que fueron duramente reprimidas, tal y como denunció, entre otros, HRW.

La respuesta de la comunidad internacional ante la grave situación de Chad supone un mensaje de graves implicaciones para otros países de la región inmersos en procesos similares como Malí, Guinea, Burkina Faso o incluso Sudán

Sin embargo, el 1 de octubre, los participantes en el diálogo nacional aprobaron las recomendaciones sobre el camino a seguir con la transición, con medidas para la disolución del CMT y el nombramiento del presidente del Consejo Militar como presidente de la transición para una "segunda transición" con una duración de hasta 24 meses, así como para la celebración de un referéndum sobre una versión modificada de la Constitución de 1996 y la forma del Estado, la duplicación del número de escaños en el Consejo Nacional de Transición y el establecimiento de una segunda cámara del Parlamento. En particular, el diálogo recomendó que todos los chadianos que cumplieran con los requisitos legales pudieran presentarse a las próximas elecciones –que se celebrarán en 2024-, incluidos los miembros de las instituciones de transición. El 10 de octubre, el presidente de la Junta Militar, Mahamat Déby, prestó juramento como presidente de la transición y días después nombró un Gobierno de Unidad Nacional encabezado por el ex líder de la oposición y ex vicepresidente del CODNI, Saleh Kebzabo,³³ en el que se incluyeron otras figuras de la oposición y miembros de los grupos político-militares

que firmaron el acuerdo de Doha, como Tom Erdimi, el líder de la UFR.³⁴ Diversos generales cercanos a Déby presentes en el CMT mantuvieron carteras estratégicas. El 20 de octubre culminaba el periodo de 18 meses tras el cual el presidente del Consejo Militar de Transición, Mahamat Déby, debía retornar el poder a las autoridades civiles. La oposición política y social hizo un llamamiento a la movilización ciudadana para el 20 de octubre como consecuencia de la prolongación del mandato del CMT y de su presidente, Mahamat Déby. El Gobierno prohibió las movilizaciones anunciadas para el 20 de octubre.³⁵ La represión violenta de la movilización social provocó al menos 50 víctimas mortales, entre los cuales al menos 10 policías, y unos 100 heridos, según el nuevo primer

ministro del país, Saleh Kebzabo, y anunció el toque de queda en N'Djamena y otras tres localidades, así como la suspensión de las actividades de varios partidos políticos. Mahamat Déby acusó a fuerzas extranjeras de estar detrás de las movilizaciones. La comunidad internacional condenó la represión gubernamental e hizo un llamamiento al respeto de los derechos humanos y al diálogo con la oposición política, pero no se establecieron sanciones contra el Gobierno. Hay estimaciones no confirmadas que elevaron el balance de represión a más de 100 víctimas mortales y centenares de heridos.

La Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC), que había avalado las recomendaciones del diálogo antes de la jornada del 20 de octubre, nombró a su presidente, el congolés Félix Tshisekedi, como facilitador de la transición chadiana y designó una comisión de investigación. Este anuncio chocó con la posición de la UA, cuyo presidente, el chadiano Moussa Faki Mahamat, presentó un informe muy crítico con las autoridades de la transición, en el que exigía a la institución africana que condenara los asesinatos, torturas, arrestos y encarcelamientos arbitrarios de cientos de civiles y denunciara la "represión sangrienta", exigiera "la liberación inmediata de todos los presos políticos", abriera una investigación y tomara medidas por el incumplimiento de los compromisos asumidos que incluyeran la suspensión de Chad de los órganos de la UA. Sin embargo, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA reunido el 11 de noviembre para analizar la situación del país no alcanzó el quorum necesario para suspender a Chad de la organización. Entre finales de noviembre y principios de diciembre se celebró un juicio que no cumplió con los estándares internacionales, según el Colegio de Abogados de Chad,

^{32.} Atemanke, Jude, Catholic Bishops Withdraw from Chad's National Inclusive Dialogue, Cite Lack of "dialogue", ACI Africa, 4 de septiembre de 2022.

^{33.} Olivier, Mathieu, "Tchad : pourquoi Mahamat Idriss Déby Itno a nommé Saleh Kebzabo Premier ministre", Jeune Afrique, 12 de octubre de 2022.

^{34.} Olivier, Mathieu, "Nouveau gouvernement au Tchad : Mahamat Saleh Annadif aux Affaires étrangères, Tom Erdimi à l'Enseignement supérieur", Jeune Afrique, 14 de octubre de 2022.

^{35.} RFI, "Le Tchad interdit les manifestations marquant la fin initiale de la transition", 20 de octubre de 2022.

y en el que se condenaron a 262 personas a penas de prisión en relación al 20 de octubre. A principios de diciembre otras 139 personas fueron liberadas por no recibir penas de prisión o por no haber sido consideradas culpables en el juicio. La comisión de investigación de la CEEAC sobre los hechos del 20 de octubre visitó el país para iniciar sus trabajos el 14 de diciembre, y el Colegio de Abogados de Chad cuestionó su independencia e hizo un llamamiento a que participaran otras organizaciones internacionales como la UA y la ONU.

| RDC - Rwanda | |
|--------------|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Gobierno, identidad, recursos Internacional |
| Actores: | Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupo armado ruandés FDLR, grupo armado congolés pro ruandés M23 (ex CNDP) |

Síntesis:

Las tensas relaciones entre RDC y Rwanda se remontan a principios de los noventa, cuando el Mariscal zaireño Mobutu Sese Seko apoyó al régimen ruandés de Juvenal Habyarimana para frenar la ofensiva del Rwandan Patriotic Front (RPF), insurgencia liderada por Paul Kagame, que tras el genocidio de 1994 consiguió derrocar al regimen genocida y tomó el poder en Rwanda. En 1996 una rebelión liderada por el general congolés Laurent Kabila, con el apoyo de Rwanda y Uganda penetró en RDC para desmantelar los campos de refugiados huidos del genocidio ruandés desde donde se estaban reorganizando miembros del antiguo Gobierno y Ejército ruandeses, e iniciar la guerra contra Mobutu, al frente del Gobierno del por entonces Zaire. Esta rebelión se convirtió en la primera guerra congolesa (1996-1997), que llevó al poder a Laurent Kabila. Posteriormente, en 1998, los países vecinos que habían encumbrado a Kabila le retiraron su confianza y, directa e indirectamente a través de grupos armados organizados y promovidos desde estos mismos países vecinos, especialmente Rwanda y Uganda, iniciaron una nueva rebelión para intentar derrocar al nuevo líder congolés, la llamada guerra mundial africana (1998-2003). La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras, principalmente de Rwanda. Éstas justificaban su presencia por la existencia de grupos insurgentes en territorio congolés a los que pretendían eliminar, ante la ausencia de voluntad de las Fuerzas Armadas congolesas para desarticularlos, mientras ejercían el control y la expoliación de los recursos naturales del este del país directamente o a través de grupos armados tutelados por estos, en especial Rwanda. La existencia de grupos insurgentes enemigos de Rwanda, Uganda y Burundi, la permanencia de las causas de fondo del conflicto en RDC en sus múltiples niveles y la fallida implementación de los acuerdos para desmovilizar estos grupos provocó el surgimiento en 2012 del M23, apoyado por Rwanda. A pesar de la firma de un nuevo acuerdo de paz en diciembre de 2013, en 2021 el grupo volvió a reorganizarse con el apoyo ruandés.

Durante el año se deterioró gravemente la relación entre RDC y Rwanda como consecuencia de los choques esporádicos entre los cuerpos de seguridad de ambos países en la zona fronteriza y de las acusaciones hacia Rwanda de apoyar militarmente y logísticamente la ofensiva del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte. La ofensiva del M23, iniciada a finales de 2021, habría contado con el apoyo de Rwanda, según señaló en agosto la ONU, y junto a los bombardeos transfronterizos e incursiones de soldados de RDC en Rwanda y de Rwanda en RDC, provocó una escalada de la tensión entre ambos países y esfuerzos regionales para desescalar el conflicto y para promover contactos que condujeran a negociaciones de paz entre RDC y el M23 y entre RDC y Rwanda.³⁶ En agosto el Grupo de Expertos de la ONU señaló que disponía de sólidas evidencias sobre el apoyo de Rwanda al M23 -grupo que desde noviembre de 2021 reinició sus actividades tras prácticamente una década de inactividad y desde mayo de 2022 ha llevado a cabo una fuerte ofensiva ampliando su presencia y control del territorio en la provincia de Kivu Norte. El informe, rechazado por Rwanda, destacaba que el Ejército ruandés habría lanzado intervenciones militares en territorio congolés desde noviembre de 2021 proporcionando apoyo militar y logístico a acciones del M23.

Los intentos de los países de la región para desescalar el contencioso y promover el diálogo entre las partes fueron constantes, liderados por Angola bajo el mandato de la UA. En abril los países de la EAC, incluido RDC (que se incorporó a la organización en marzo) aprobaron el despliegue a partir de agosto de una misión militar en el este de RDC para combatir al grupo armado M23 y apoyar al Gobierno a poner fin al clima de violencia como consecuencia del reinicio de las hostilidades por parte del M23, decisión ratificada en junio.³⁷ El despliegue se hizo parcialmente efectivo en noviembre, aunque con incógnitas abiertas en torno a los miembros, la coordinación con la MONUSCO, la financiación y mandato. RDC vetó la participación de Rwanda en la misión.

Ante la escalada de la ofensiva del M23 en octubre, el Gobierno congolés expulsó al embajador ruandés. El 31 de octubre se produjo una movilización de miles de personas en Goma –capital de Kivu Norte– contra Rwanda, pidiendo armas para combatir ante la preocupación de que el grupo armado pudiera ocupar la capital, tal y como hizo en 2012, manifestando su rechazo y frustración ante la pasividad internacional y exigiendo a la comunidad internacional sanciones contra Rwanda por el apoyo al M23. Posteriormente, el presidente congolés, Félix Tshisekedi, y el ministro de Exteriores ruandés, Vincent Biruta, participaron en una minicumbre sobre paz y seguridad en el este de RDC en Luanda el 23 de noviembre, en la que se hizo un llamamiento para una inmediata retirada del M23 de las zonas ocupadas

^{36.} Informe del Secretario General, Aplicación del Acuerdo Marco sobre la Paz, la Seguridad y la Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región, Consejo de Seguridad de la ONU, 4 de octubre de 2022.

^{37.} Sam Mendick y Claude Muhindo, East African military force met with scepticism in DR Congo, *The New Humanitarian*, 25 de noviembre de 2022.

en Kivu Norte y para alcanzar un alto el fuego que debía entrar en vigor el 25 de noviembre, aunque el M23 no lo respetó. El M23 continuó ampliando el territorio bajo su control cometiendo graves vulneraciones de los derechos humanos. Las acciones del M23 provocaron la condena unánime de la comunidad internacional, y numerosos países exigieron a Rwanda poner fin al apoyo al grupo armado, entre ellos EEUU, Francia y la UE. El informe del Grupo de expertos de la ONU del 16 de diciembre encontró "pruebas sustanciales" de que Fuerzas Armadas ruandesas habían penetrado en territorio congolés desde enero de 2022, ya sea para reforzar a los rebeldes del M23 o para realizar operaciones militares, 38 aunque Kigali negó las acusaciones.

A finales de año se produjeron diferentes acciones que pusieron de manifiesto la volatilidad de la situación. Mientras persistía la ofensiva del M23, un avión de combate congolés SU-25 penetró el 7 de noviembre al espacio aéreo de Rwanda y aterrizó brevemente en el aeropuerto de Rubavu, provincia occidental. Rwanda no respondió militarmente, pero acusó a Kinshasa de provocación. Posteriormente, las tropas ruandesas mataron el 19 de noviembre a un soldado congolés que había cruzado la frontera hacia el distrito Rubavu. El 28 de diciembre Kigali dijo que Kinshasa había violado nuevamente su espacio aéreo al volar un avión de combate sobre su territorio, y el 24 de enero de 2023 las Fuerzas Armadas ruandesas dispararon misiles contra un avión de combate congolés por presuntamente violar nuevamente el espacio aéreo de Rwanda, instando a Kinshasa a detener esta agresión. Kinshasa negó que su avión hubiera violado el espacio aéreo de Rwanda y calificó el incidente de acto de guerra.

| Sudán | |
|-------------|---------------------------------------|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | \downarrow |
| Tipología: | Gobierno Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social |

Síntesis:

Sudán vive inmerso en un conflicto crónico derivado de la concentración del poder y los recursos en el centro del país. Aparte de los conflictos en las regiones marginalizadas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, el resto del país sufre también problemas de gobernabilidad derivadas del régimen autoritario del presidente Omar al-Bashir que subió al poder con un golpe de Estado en 1989 y que ejerce una duro control y represión de los disidentes a través de los aparatos de seguridad del Estado. La situación de tensión en el país se agravó con la separación de Sudán del Sur en 2011 ya que afectó gravemente la economía del país que dependía en un 70% de la venta de petróleo, situado mayoritariamente en el sur. Las arcas del estado sudanés vieron disminuir drásticamente sus ingresos por la pérdida del

control en la exportación del petróleo y, más tarde, por la falta de acuerdo con Sudán del Sur para su transporte por los oleoductos que pasan por Sudán. Una situación económica con una alta inflación y la devaluación de la moneda contribuyó al inicio de significantes protestas en verano de 2012 en varias ciudades del país que, a principios de 2019 conllevaron la caída del régimen de al-Bashir y la apertura de un proceso de transición.

Tras un año del golpe militar del 25 de octubre de 2021, que derrocó al Gobierno de Transición y generó una amplia movilización ciudadana contra la Junta Militar, a finales de año se logró un acuerdo marco en el cual los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político. El año, sin embargo, se inició con una nueva crisis política provocada por la renuncia al cargo de primer ministro de Abdalla Hamdok, dejando a los militares con el control total de la transición y provocando protestas masivas que fueron duramente reprimidas. En repuesta a la crisis, la Misión de la ONU en Sudán (UNITAMS) anunció el 8 de enero un proceso de diálogo entre las partes para tratar de salvar la transición. Paralelamente se habían puesto en marcha negociaciones separadas con las partes signatarias del Acuerdo de Paz de Juba de 2020, organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos, incluidas facciones de la coalición política Forces for Freedom and Change (FFC) y los Comités de Resistencia en el estado de Jartum. No obstante, la principal alianza prodemocracia del país, las Forces for Freedom and Change-Central Command (FFC-CC), boicoteó las negociaciones debido a la continua represión policial. El 10 de marzo, UNITAMS, juntamente con la UA y el bloque regional Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) anunciaron una iniciativa conjunta de paz intrasudanesa para mediar entre la Junta Militar y la oposición política con el fin de resolver la crisis de gobernanza en el país. La iniciativa, conocida como mecanismo trilateral, se puso en marcha a mediados de mayo. De forma paralela al mecanismo trilateral, diplomáticos estadounidenses y saudíes pusieron en marcha en el mes de junio conversaciones informales entre la Junta Militar y el FFC-CC, en lo que se conoció como la mediación del Quad (que incluyó a EEUU, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos).

Este diálogo generó críticas por parte del Mecanismo Trilateral, que denunció "interferencia externa", acusando a los países Quad de apoyar públicamente el proceso trilateral mientras lo socava a través del proceso de negociación paralelo.

Tras meses de estancamiento y de tensiones entre las partes –entre ellas entre el jefe del Ejército y jefe de Estado de facto, el general Abdel Fattah al-Burhan, y el líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), general Dagalo "Hemeti"—, en septiembre

^{38.} Informe de mitad de período del Grupo de Expertos, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución 2641 (2022), Consejo de Seguridad de la ONU, 16 de diciembre de 2022.

se logró reanudar las conversaciones después de que el Colegio de Abogados de Sudán presentara un nuevo borrador de constitución que contemplaba la restauración de la autoridad civil durante un período de transición. Finalmente, tras meses de negociación, el 5 de diciembre se logró un acuerdo marco entre la Junta Militar y los principales partidos políticos civiles y otras fuerzas civiles articuladas, en su mayoría, bajo el principal bloque de oposición civil FFC-CC. En el acuerdo los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político y crear un gobierno civil de transición con elecciones en dos años. El período de transición comenzará con el nombramiento del primer ministro, nominado por civiles, después de que concluya la segunda fase de negociaciones prevista para principios de 2023. En esa fase estaba previsto que se aborden cinco temas particularmente delicados: justicia transicional, la reforma del sector de la seguridad (incluyendo la integración de los antiguos grupos rebeldes y las RSF en un ejército unificado), el Acuerdo de Paz de Juba, el desmantelamiento del ex

régimen de Omar al-Bashir y la crisis en el este de Sudán.

Si bien el acuerdo representaba un importante paso para poner fin a la crisis política en el país, el pacto seguía planteando importantes desafíos debido a que la opinión pública y la oposición permanecían dividas; los Comités de Resistencia de base rechazaron adherirse y prometieron sostener las protestas en la capital; tres grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Juba de 2020

rechazaron el acuerdo debido al redactado que sugería que parte del acuerdo de paz pueda ser renegociado; otros grupos rebeldes no signatarios del acuerdo de paz de Juba, SLM/A-AW dirigido por Abdulwahid al-Nur (Darfur) y el SPLM-N encabezado por Abdulaziz al-Hilu (Kordofán Sur), tampoco se unieron al pacto; así como debido a las crecientes tensiones entre el Ejército y las RSF.

Norte de África - Magreb

| Marruecos-Sáhara Occidental | |
|-----------------------------|---|
| Intensidad: | 2 |
| Evolución: | \downarrow |
| Tipología: | Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ³⁹ |
| Actores: | Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO |

Síntesis:

El 5 de diciembre

se logró un acuerdo

marco entre la Junta

Militar y parte de la

oposición sudanesa

para la creación de

un gobierno civil

de transición, pero

continuaban los

desafíos

Las raíces del conflicto se encuentran en el fin del dominio colonial español en el Sáhara Occidental a mediados de los setenta. La distribución del territorio entre Marruecos y Mauritania, sin que se tuvieran en cuenta el derecho a la autodeterminación de los saharauis ni los compromisos sobre un referéndum de independencia en la zona, derivó en la anexión de gran parte del territorio por parte de Rabat y en el desplazamiento de miles de saharauis, que se refugiaron en Argelia. En 1976, el movimiento nacionalista Frente POLISARIO declaró un Gobierno en el exilio -la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)- y lanzó una campaña armada contra Marruecos. Las partes aceptaron un plan de paz en 1988 y desde 1991 la misión de la ONU en el Sáhara, MINURSO, supervisa el cese el fuego y se encarga de la organización de una consulta de autodeterminación en el territorio. En 2007, Marruecos presentó a la ONU un plan para la autonomía del Sáhara Occidental, pero el Frente POLISARIO reclama la celebración de un referéndum que incluya la opción de la independencia.

Tras una intensificación de la tensión en torno al Sáhara Occidental en 2021, los hechos de violencia

se redujeron en 2022. Durante el año persistió la ruptura del cese el fuego –vigente entre 1991 y 2020– y no se observaron avances en la búsqueda de una salida negociada a la disputa, pese a las gestiones diplomáticas desplegadas por el nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura.⁴⁰ Según el informe del secretario general de la ONU dado a conocer el último trimestre, y que cubre el período de octubre de 2021 a octubre de 2022, la situación en el Sáhara Occidental

se caracterizó por hostilidades de baja intensidad entre Marruecos y el Frente POLISARIO. Recuentos informales a partir de informaciones de prensa apuntan a que los hechos de violencia podrían haber causado la muerte de una veintena de personas en 2022. Las dinámicas del contencioso siguieron viéndose afectadas por las tensiones regionales entre Marruecos y Argelia y en 2022 también fue relevante el cambio de postura del Gobierno de España, que se alineó abiertamente con la iniciativa de Marruecos para abordar una salida política al conflicto. Respecto a la evolución de las hostilidades, la misión de Naciones Unidas, MINURSO, reconoció que no está en condiciones de verificar de manera independiente el número ni las localidades en las que se produjeron los diversos intercambios de fuego -a menudo los datos son cuestionados-, pero los indicios apuntan a que la mayor parte de los incidentes a lo largo de la berma se concentraron en el norte del territorio, en las proximidades de Mahbas. A lo largo del año se informó de diversos ataques perpetrados por las fuerzas marroquíes con artefactos aéreos no

^{39.} A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como "internacional" y no como "interna" por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

^{40.} Véase el resumen sobre Marruecos-Sáhara Occidental en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios, Barcelona: Icaria, 2023.

tripulados al este de la berma. Según medios de prensa ataques con drones habrían provocado la muerte de tres civiles mauritanos y de cuatro miembros del Frente POLISARIO en enero. En abril, otra ofensiva similar cerca de la frontera con Mauritania causó la muerte de otros tres civiles, dos mauritanos y un argelino. Tras este último episodio, el Gobierno argelino acusó a Marruecos de perpetrar "asesinatos selectivos", de "repetidos actos de terrorismo" y alertó que los posibles efectos colaterales en territorio argelino de lo que calificó como "belicismo" de Marruecos serían considerados como casus belli. La MINURSO documentó 18 ataques de las fuerzas marroquíes al este de la berma desde septiembre de 2021, uno de los cuales habría provocado la muerte de un alto mando militar del Frente POLISARIO en julio. Por su parte, el Frente POLISARIO aseguró que había matado a una docena de soldados marroquíes en una serie de operaciones a principios de febrero. La misión de la ONU denunció que la falta de acceso a las áreas próximas a la berma imponía grandes retos a sus actividades de observación y a las posibilidades de verificar los hechos en terreno.

Estos acontecimientos se produjeron en un trasfondo de reactivación de las gestiones diplomáticas impulsadas por la ONU después de varios años en los que el puesto de enviado especial para el Sáhara Occidental estuvo vacante. El diplomático Staffan de Mistura asumió el cargo a finales de 2021 y a lo largo de 2022 realizó dos rondas de visitas a la región, durante las cuales se reunió con representantes de Marruecos, el Frente POLISARIO, Argelia y Mauritania. Paralelamente, mantuvo contactos con diversos actores internacionales interesados y/o con capacidad de incidir en la evolución de la disputa. Al finalizar el año, sin embargo, las partes se mantenían en sus posiciones alejadas. Marruecos insistió en que su plan de autonomía es el único punto de partida posible para un proceso negociador y se mostró dispuesto a retomar contactos en un formato de mesas redondas, con participación de Argelia y Mauritania, tal y como ocurrió en 2018 y 2019 bajo los auspicios del anterior enviado especial, Horst Kohler. Este formato, sin embargo, ha sido rechazado expresamente por Argelia, que no desea un marco que pretenda presentar la situación como un conflicto regional. El Frente POLISARIO reiteró su compromiso con la autodeterminación del pueblo saharaui a través de un referéndum y subrayó que el bloqueo político y la indiferencia de la comunidad internacional habían llevado a la reanudación de las hostilidades y el abandono del acuerdo de cese el fuego. Durante 2022 España se sumó a los países que han expresado públicamente su apoyo al planteamiento de Marruecos para abordar el contencioso. En mayo, en una carta dirigida al rey de Marruecos, el presidente español manifestó que la iniciativa de autonomía marroquí como "la base más seria, creíble y realista para resolver la disputa", decantándose así por una aproximación que excluye la independencia como vía para canalizar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.

El cambio de postura fue duramente criticado por el Frente POLISARIO y generó una crisis diplomática entre Madrid y Argel. Por el contrario, la decisión española permitió descongelar las relaciones con Marruecos, deterioradas tras la crisis que generó en 2021 la acogida en territorio español del líder del Frente POLISARIO para ser tratado por COVID-19, un hecho que derivó entonces en represalias diplomáticas y en el control fronterizo de los flujos migratorios por parte de Rabat.

Durante 2022 las cuestiones relacionadas con las vulneraciones a los derechos humanos en el Sáhara Occidental continuaron siendo un tema de preocupación. Diversas ONG denunciaron malos tratos y torturas a activistas saharauis y presentaron quejas contra Marruecos ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Por séptimo año consecutivo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos no pudo realizar visitas al territorio, a pesar de múltiples requerimientos y de la necesidad de investigar diversas denuncias. Entre ellas, el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestaciones que reivindican la autodeterminación, detenciones arbitrarias de activistas y acoso, amenaza y violencia contra personas defensoras de derechos humanos, entre ellas varias mujeres. En paralelo, también se alertó sobre un empeoramiento en la situación humanitaria en los campos de personas refugiadas saharauis. Un informe conjunto de ACNUR, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU advirtió de los riesgos de inseguridad alimentaria severa y malnutrición como resultado de los problemas de financiamiento de los programas de ayuda, los efectos de la COVID-19, el incremento global en los precios de combustibles y alimentos, incluyendo por los efectos de la guerra en Ucrania. La ONU subrayó que la infrafinanciación había obligado al PMA a recortar en un 80% las raciones de alimentos en los campos de personas refugiadas de Tindouf.

| Túnez | |
|-------------|---|
| Intensidad: | 2 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Gobierno, Sistema Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social, grupos armados incluyendo el Batallón Uqba ibn Nafi o Brigadas Oqba ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS |

Síntesis:

Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que

caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de una mayor actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS. Desde mediados de 2021, Túnez está inmerso en una nueva crisis, en un contexto caracterizado por los intentos de concentración del poder por parte del presidente Kais Saïed.

A lo largo de 2022 se acentuó la deriva autoritaria del presidente Kais Saïed, que adoptó una serie de medidas para reforzar su control del país y las instituciones tunecinas. Sus medidas motivaron manifestaciones de descontento y reacciones críticas de grupos opositores durante todo el año, a pesar de la persecución del Gobierno a las voces disidentes. En marzo, Saïed disolvió definitivamente el Parlamento -que había suspendido en julio del año anterior-, después de que los legisladores celebraran una reunión plenaria online en la que llamaron a revocar los decretos presidenciales que desde 2021 han otorgado una autoridad casi total al mandatario. Saïed denunció los hechos como un golpe de Estado y una conspiración, y ordenó una investigación contra los parlamentarios. En paralelo, el presidente tunecino reforzó su control sobre el poder judicial.

En febrero había disuelto el Alto Consejo Judicial, organismo encargado de la designación de magistrados y de supervisar la independencia de los jueces, bajo acusaciones de sesgo y corrupción. Este consejo fue reemplazado por una nueva entidad temporal, con una parte de sus integrantes designada directamente por el mandatario. Saïed también prorrogó en febrero y hasta finales de año el estado de emergencia, designó a tres de los siete integrantes de la nueva autoridad electoral (abril) y destituyó a más de 50 jueces, motivando nuevas protestas y huelgas del sector de la judicatura. En este contexto, y siguiendo la hoja de ruta ideada por Saïed en 2021, se votó la nueva Constitución. En los primeros meses del año el presidente había promovido una consulta online sobre las reformas, que tuvo un alcance muy limitado, y luego un diálogo nacional que fue boicoteado por los principales grupos políticos, incluyendo el partido islamista Ennahda, y también por el poderoso sindicato UGTT. El nuevo texto -elaborado por un panel nominado por el presidente y que se hizo público solo tres semanas antes de la votación- fue aprobado el 25 de julio con un 94,6% de los votos

y una participación del 30,5%, aunque la oposición aseguró que la implicación ciudadana había sido menor. La nueva Constitución establece un sistema presidencialista similar al que existía en el país antes de la revuelta contra el régimen de Zine el Abidine Ben Alí en 2011 y reduce el poder del Parlamento.

Para finales de año, según se había anunciado en 2021, se programaron las elecciones parlamentarias. Tres meses antes de su celebración, Saïed reformó la ley electoral sin ningún tipo de consulta y debate, reduciendo el número de legisladores (de 217 a 161) y permitiendo la votación de candidatos individuales en vez de listas. La medida fue interpretada como un intento de reducir el poder y la influencia de los partidos políticos. Los comicios legislativos se celebraron el 17 de diciembre y contaron con una participación de tan solo 11,2% de los votantes, después de que numerosas fuerzas políticas llamaran a un boicot. A lo largo del año, periódicas movilizaciones y protestas contra el Gobierno fueron impulsadas por activistas de la sociedad civil articulados en el movimiento "Ciudadanos contra el golpe", por el partido islamista Ennahda y por otros partidos de diverso signo. En abril, se anunció la formación de un nuevo conglomerado de fuerzas de la oposición, Frente de Salvación Nacional, que aglutina a cinco partidos políticos -entre ellos Ennahda- y cinco organizaciones de la sociedad civil.

Tras los comicios de diciembre, esta alianza subrayó la falta de legitimidad del mandatario, reiteró su rechazo a la nueva Constitución y exigió elecciones presidenciales anticipadas y la conformación de un nuevo gobierno. Durante 2022, numerosas ONG locales e internacionales, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y algunos gobiernos condenaron las medidas adoptadas por Saïed y expresaron su preocupación por el deterioro en la situación de derechos humanos en el país norteafricano. Esto incluía las restricciones a la libertad de expresión; medidas represivas contra personas críticas, opositores políticos, incluyendo prohibiciones de viaje, detenciones y persecución judicial -en algunos casos en tribunales militares. El líder de Ennahda y ex portavoz parlamentario, Rachid Ghannouchi, tuvo que comparecer por acusaciones de diversos delitos, incluyendo lavado de dinero e incitación a la violencia. También se denunciaron las acciones de las fuerzas de seguridad para prevenir y/o disolver manifestaciones con un uso excesivo de la fuerza y la aprobación, vía decreto presidencial, de una norma que establece delitos vinculados a la información y comunicación y que condena a hasta 10 años a personas acusadas de difusión de noticias falsas. La ONG Reporteros Sin Fronteras denunció que la medida amenazaba la libertad de prensa y pretendía crear un clima de temor.

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

| El Salvador | |
|-------------|--|
| Intensidad: | 2 |
| Evolución: | \downarrow |
| Tipología: | Gobierno Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado |

Síntesis:

Tras el fin de un conflicto armado (1980-1992), que dejó un balance de alrededor de 75.000 muertes, la situación en El Salvador se ha caracterizado por altos niveles de pobreza y desigualdad, por la proliferación de pandillas juveniles y otras estructuras de crimen organizado, así como por unas altas tasas de homicidios que han convertido al país en uno de los más violentos de la región y del mundo. Durante el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) se logró una tregua con las pandillas que comportó una reducción significativa en la tasa de homicidios, pero la llegada a la presidencia de Sánchez Cerén en 2015 comportó un endurecimiento de las políticas de seguridad y un sustancial incremento en los niveles de violencia, generando ello una crisis de desprotección y de desplazamiento forzado de miles de personas.

El Gobierno declaró que se registró el número más bajo de homicidios de la historia reciente del país, pero algunas organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la veracidad de tales cifras y a la vez criticaron que la imposición del estado de excepción desde finales de marzo había comportado numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo la detención de más de 61.000 personas. A finales de diciembre, el Gobierno declaró que durante 2022 se habían registrado 495

homicidios y que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 7,8. Según datos oficiales, en el año 2015, la tasa de homicidios fue de 106,3, y desde entonces fue reduciéndose paulatinamente hasta alcanzar un mínimo histórico en 2022, muy inferior a la tasa de 18,1 del 2021. El Gobierno sostiene que la aplicación del plan de la lucha contra las maras (denominado "Control Territorial") había permitido una

reducción sustancial en la tasa de homicidios tras la Ilegada al poder de Nayib Bukele a mediados de 2019, pues en 2018 esta era de 53, y a finales de 2019 se había reducido a 38. El Ejecutivo señaló a finales de año que la aplicación de la quinta fase del "Plan Control Territorial" no solamente había permitido una drástica reducción del número de homicidios, sino que a finales de 2022 se había debilitado enormemente a las principales maras del país, en especial a la Mara Salvatrucha o MS13, con la incautación de miles de armas y la detención de unos 900 líderes de dichas maras. Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación cuestionaron tanto la cifra de homicidios publicada por el Gobierno

como los motivos que han motivado una reducción en las tasas de criminalidad en el país. Según estas voces, el Gobierno de Bukele se ha mostrado poco transparente respecto de los datos oficiales de criminalidad en El Salvador y ha modificado la definición de homicidio para su propio beneficio, excluyendo de las cifras oficiales a presuntos miembros de las maras y sospechosos de delitos muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado o bien en prisión. Durante el año también se registraron discrepancias importantes entre la Fiscalía del Estado y el Instituto de Medicina Legal respecto de las estadísticas de cadáveres hallados en fosas comunes, por lo que el Estado desautorizó el acceso a tales datos a la prensa. En la misma línea, en el mes de junio el Estado militarizó el Instituto de Medicina Legal, de modo que durante la segunda mitad del año hubo opacidad respecto de los datos de homicidios en el país por parte de dicho Instituto, tradicionalmente una de las fuentes más fiables en este asunto. Por otra parte, algunas organizaciones y analistas en el país denunciaron que la reducción de los niveles de criminalidad en el país no se debía principalmente a la efectividad de las operaciones del Gobierno contras las maras, sino a las negociaciones clandestinas entre el Estado y determinados líderes del crimen organizado para lograr mejores condiciones carcelarias, la liberación o la no extradición a EEUU de determinados líderes mareros. En este sentido, durante el año varios medios de comunicación siguieron publicando de manera regular acerca de los presuntos vínculos y contactos entre funcionarios del Estado y las principales maras del país. A modo de ejemplo, algunos medios de comunicación denunciaron que algunos grupos de crimen organizado habían estado enterrando cadáveres en fosas comunes con conocimiento del Estado. Finalmente, cabe destacar que algunas organizaciones de la sociedad civil denunciaron el

drástico incremento en el número de personas desaparecidas y alertaron de que desde el 2019 el número de desapariciones en El Salvador es superior al número de homicidios. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, por ejemplo, señaló que, según datos de la Policía, entre enero de 2020 y junio de 2022 se habían registrado 4.060 casos de desapariciones, de los

que solamente 1.309 seguían bajo investigación. En la misma línea, organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo por las Personas Desapariciones declararon que

solamente en los cinco primeros meses del año habían desaparecido 577 personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció tal incremento en el número de desapariciones e instó al Estado a tomar medidas preventivas al respecto. La cuestión que provocó mayor número de protestas

Mas de 61.000 personas fueron detenidas en El Salvador tras la imposición del estado de excepción a finales de marzo

> en el país y de denuncias a nivel internacional fue la imposición del estado de excepción a finales de marzo -y su prorrogación mensual a lo largo del añodespués de que se registraran 87 homicidios en dos

días consecutivos. A finales de diciembre, el Gobierno reconoció que desde entonces se habían detenido a más de 61.300 personas, y que unas 3.300 habían sido liberadas al no haber sido debidamente probada su participación en ningún delito. En agosto, el Instituto de Medicina Legal declaró que 73 personas habían muerto bajo custodia policial desde finales de marzo, mientras que el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana señaló haber recibido denuncias de 306 casos de tortura en el mismo periodo. A principios de octubre, el Defensor del Pueblo declaró haber recibido casi 4.800 denuncias por violaciones de derechos humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Naciones Unidas contra la tortura denunciaron numerosas detenciones arbitrarias. A pesar de las críticas y denuncias contra la instauración del estado de excepción, esta medida fue renovada mensualmente durante todo el año. Por otra parte, en septiembre, Nayib Bukele anunció que se presentará a las elecciones presidenciales de 2024, siendo así el primer caso desde la recuperación de la democracia que concurre a la reelección. La Constitución había prohibido hasta ahora que se encadenaran dos mandatos presidenciales consecutivos, pero en 2021 el Tribunal Constitucional –nombrado por el oficialismo– decretó que Bukele sí podía optar a la reelección. Dicha decisión provocó algunas movilizaciones no masivas durante el año y la crítica de algunas organizaciones de la sociedad civil que consideran que Bukele está encaminando al país hacia al autoritarismo.

| Haití | |
|-------------|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Gobierno Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado |

Síntesis:

La actual crisis que atraviesa el país, con movilizaciones masivas y numerosos episodios de violencia registrados en 2019, está vinculada con las acusaciones de corrupción, frau-de electoral y negligencia en la acción de gobierno del Presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, la situación de parálisis institucional, fragilidad económica y crisis sociopolíti-ca empezó a agudizarse tras la salida forzada del país del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país. Desde entonces, el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional y posteriormente de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH, sustituida por MINUJUSTH en 2017 y por BINUH en 2019) y la mayor implicación y coordinación de la comunidad internacional en la normalización del país han propiciado avances en determinados ámbitos de la gobernabilidad del país, pero no han conseguido lograr una estabilidad política, social y económica, ni reducir los altos niveles de corrupción, pobreza, exclusión social y tasas de delincuencia, ni eliminar com-pletamente el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas del país.

La crisis política y bloqueo institucional que sufre el país, el incremento sin precedentes de los niveles de violencia, el creciente control geográfico de zonas de la capital por parte de numerosos grupos armados y un brote de cólera que en dos meses ya habían afectado a más de 20.000 personas provocaron una grave crisis humanitaria y propiciaron una discusión en el seno de Naciones Unidas sobre una eventual intervención militar en el país. En el mes de diciembre, Naciones Unidas señaló que varias de las aproximadamente 200 bandas armadas que se estima operan en el país controlaban el 60% de la capital, en la que vive un tercio de la población de Haití. Naciones Unidas advirtió que tal contexto había contribuido a agudizar la situación de emergencia económica y humanitaria, estimando que el 90% de la población vivía con menos de 7 dólares al día, que la mitad de la población padecía inseguridad alimentaria y que unas 20.000 personas se enfrentaban al riesgo de inanición o hambruna. Según Naciones Unidas, unas 155.000 personas se habían visto obligadas a abandonar en 2022 sus hogares a causa de la violencia y la inseguridad, que también provocó el cierre masivo de escuelas (a finales de año solo la mitad aproximadamente estaba en funcionamiento) y la disrupción de los servicios sanitarios. Por otra parte, a finales de 2022 se estimaba que el brote de cólera que se detectó a inicios de octubre había afectado a más de 20.000 personas y provocado la muerte a 376 personas. Cabe señalar que entre 2010 y 2019 se reportaron más de 800.000 casos y 9.000 defunciones por cólera. Ante tal situación, a mediados de noviembre Naciones Unidas hizo un llamamiento de emergencia de 145 millones de dólares.

Tanto Naciones Unidas como el Gobierno haitiano señalaron que durante el 2022 el nivel de actividad de los numerosos grupos armados que operan en el país había alcanzado niveles sin precedentes, provocando un incremento sustantivo en el número de homicidios, secuestros y casos de violencia sexual. Naciones Unidas, por ejemplo, advirtió que se habían registrado más de 1.200 secuestros, más del doble que en 2021 (que a su vez había experimentado un notable incremento respecto de los años precedentes). El Gobierno no publicó datos oficiales, pero a finales de año la organización Colectivo Défenser Plus señaló que solamente en la capital se habían producido 2.769 homicidios intencionales. Naciones Unidas declaró a principios de julio que en los seis primeros meses del año se habían registrado 934 asesinatos y 680 secuestros en el marco de la violencia de las bandas armadas. En la misma línea, según el centro International Crisis Group, los enfrentamientos entre grupos armados en el área metropolitana de Puerto Príncipe entre mayo y julio había provocado la muerte de casi 500 personas, la mayoría civiles. Aún si en la primera mitad del año se habían producido numerosas manifestaciones antigubernamentales por las altas tasas de inseguridad, desde finales de agosto estas se tornaron más masivas y generalizadas. A mediados de septiembre, poco después de que el Gobierno anunciara una importante reducción en los

subsidios a los carburantes, se produjeron numerosas manifestaciones en la mayor parte de las ciudades

del país que provocaron el cierre masivo de comercios, de algunas embajadas y también de la frontera por parte del República Dominicana, que a principios de año inició la construcción de un muro fronterizo para frenar el flujo de personas indocumentadas. Asimismo, en el marco de las movilizaciones masivas también se registraron numerosos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes, en los que como mínimo 10 personas perdieron la vida solamente en los primeros días de protestas. La situación se hizo todavía más

compleja cuando, el 17 de septiembre, el principal grupo armado que opera en la capital, el llamado G9, tomó por la fuerza la terminal petrolera de Varreux —que contiene el 70% de las reservas de petróleo de todo el país— y anunció su intención de bloquear su suministro hasta que dimitiera el primer ministro, Ariel Henry. El bloqueo de dicha terminal durante casi dos meses provocó el desabastecimiento de combustible en todo el país, generando ello nuevas protestas y nuevos disturbios, la parálisis de buena parte del país y una importante disrupción del funcionamiento de hospitales o en la distribución de agua potable, que a su vez agudizó la ya precaria situación humanitaria de la población y aceleró la expansión del cólera.

Ante dicha situación, a principios de octubre el Gobierno solicitó el despliegue inmediato de una fuerza armada especializada internacional que pudiera revertir la violencia ejercida por los grupos armados y mitigar sus consecuencias humanitarias. Poco después, António Guterres pidió al Consejo de Seguridad el despliegue temporal de una fuerza de acción rápida -que se retiraría del país una vez el Gobierno hubiera retomado el control de las infraestructuras básicas del país- seguido del despliegue de una misión de apoyo a la Policía Nacional de Haití en su combate contra los grupos armados. A mediados de octubre el Consejo de Seguridad aprobó una resolución en el que se imponían sanciones, restricciones de movimientos y embargos de armas a los líderes y colaboradores de determinados grupos armados e inició las discusiones sobre una propuesta de resolución presentada por EEUU y México en la que proponía el despliegue de una misión internacional pero no bajo el paraguas y mandato de Naciones Unidas, pero al finalizar el año no había sido aprobada. En noviembre y diciembre, países como EEUU y Canadá impusieron sanciones adicionales a algunos líderes políticos y el primer ministro de Canadá incluso declaró públicamente que su país estaría dispuesto a liderar una misión internacional. Sin embargo, numerosos partidos políticos en Haití se mostraron reacios o contrarios a tal propuesta, algunos por considerarla inaceptable desde el punto de vista de la soberanía nacional y otros porque consideraban que tal misión podría reforzar la legitimidad del Gobierno de Ariel Henry. Buena parte de la clase política y de las organizaciones de la sociedad

civil en Haití tildan de ilegal el Gobierno de Henry por considerar que su mandato finalizaba el 7 de febrero de

2022, el mismo día que hubiera acabado el mandato del expresidente Jovenel Moïse, asesinado en julio de 2021. De hecho, la principal plataforma opositora del país, el llamado Acuerdo de Montana, hizo una propuesta de transición política en el país y, ante la negativa del Gobierno a negociarla, a principios de año eligió a un presidente y primer ministro alternativos. Sin embargo, Henry sostuvo que la única solución al impasse institucional en el que se hallaba el país era la celebración de unas nuevas elecciones —que deberían

haberse celebrado originalmente en octubre de 2019–, pero al finalizar el 2022 no había una propuesta de fecha sobre las mismas, bien por la falta de acuerdo sobre la composición del organismo electoral o por la situación de violencia e inseguridad en el país.

| México | |
|-------------|---|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | = |
| Tipología: | Gobierno, Recursos Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado, grupos armados de oposición |

Síntesis:

El Gobierno haitiano

solicitó el despliegue

inmediato de una

fuerza internacional

que pudiera revertir

la violencia ejercida

por los grupos

armados y mitigar

sus consecuencias

humanitarias

Desde el año 2006, en el que el presidente Felipe Calderón inició la llamada "guerra al narcotráfico", tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios en todo el mundo. Desde entonces, se han multiplicado el número de estructuras de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico, que en algunas partes del país disputan al Estado el monopolio de la violencia. Según algunas estimaciones, a finales de 2017 la "guerra contra el narcotráfico" había provocado la muerte de más de 150.000 personas y la desaparición de más de 30.000. Además, en México existen algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca -entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. En el estado de Chiapas, tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994, se han mantenido ciertos niveles de conflictividad en las comunidades zapatistas.

En 2022 se redujo ligeramente el número de homicidios, pero siguieron registrándose un número muy alto de desapariciones forzadas y algunas organizaciones internacionales consideraron a México el país con el mayor número de asesinatos de periodistas y activistas de la tierra y el medio ambiente. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 2022 se registraron 30.968 asesinatos intencionales, una reducción del 7,1% respecto del año anterior (33.350 homicidios). Según el Gobierno, es el tercer año consecutivo en el que se reduce el número de homicidios –en 2019 se registraron 34.718 y en 2020, 34.563. En el mandato de Andrés Manuel López Obrador

ya se han producido más de 140.000 homicidios, y desde el 2006, año en el que Felipe Calderón inició la llamada "guerra contra el narcotráfico", más de 340.000. Seis estados concentraron casi la mitad de todos los homicidios del país: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Según declaró el presidente a mediados de año, el 75% de los homicidios registrados en el país son atribuibles a enfrentamientos entre cárteles de la droga rivales. Según datos gubernamentales, en 2022 se produjeron 3.450 asesinatos de mujeres, de los que 858 se clasificaron como feminicidios y 2.592 como homicidios dolosos. Estado de México fue el estado con mayor número de feminicidios (131), seguido muy de lejos por Nuevo León (85), Ciudad de México (70), Veracruz (63) y Chiapas (42). Por otra parte, según Reporteros Sin Fronteras, México fue por cuarto año consecutivo el país del mundo en el que se registró el mayor número de asesinatos de periodistas. En 2022 se registraron 11 asesinatos, 80 en los últimos 10 años. Según la organización de derechos humanos Artículo 19, en 2022 se produjo el asesinato de 17 profesionales de la comunicación, 12 de ellos directamente por ejercer su profesión, convirtiéndose así en el año más letal para el periodismo desde que se tienen registros al respecto. Artículo 19 también denunció el deterioro de la libertad de prensa en el país y los altos niveles de impunidad que existen para este tipo de delitos. México también siguió siendo por tercer año consecutivo el país en el que se registra un mayor número de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Según un informe de Global Witness publicado en septiembre, pero con datos de 2021, ese año murieron asesinadas 54 personas, muchas más que en 2020 (30). Tal cifra es muy superior a la del resto de países con mayor número de activistas medioambientales asesinadas, como Colombia (33), Brasil (26), Filipinas (19) o India (14). La mitad de las víctimas en México eran indígenas y dos terceras partes de los casos estuvieron vinculados a conflictos por tierras y minería. Precisamente dos estados con una importante actividad minera, como Oaxaca y Sonora, concentraron aproximadamente dos terceras partes de los asesinatos. Además, el informe de Global Witness también señaló que en 2021 hubo 19 desapariciones de activistas medioambientales. En este sentido. México fue también uno de los países del mundo con mayores desapariciones forzadas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, al finalizar el año 2022 había 109.516 personas desaparecidas. Por distribución geográfica, el estado de Jalisco era el que concentraba mayor número de casos (15.038), seguido del Estado de México (11.868), Veracruz (7.438), Nuevo León (6.250) y Sinaloa (5.664). En 2022 se registraron unas 9.500 desapariciones, unas 26 cada día. Tal cifra es algo inferior a la del 2021 (10.400, unas 28 por día), pero bajo gobierno de López Obrador ya se han registrado 38.186 casos, una cifra que, faltando todavía dos años para que concluya el mandato, ya es superior al de las administraciones de Peña Nieto (36.064) y de Felipe Calderón (17.095).

Ante tal constatación, el actual Gobierno sostiene que la principal explicación del incremento exponencial de casos tras la asunción en el cargo de López Obrador (se pasó de 419 casos en 2018 a 9.772 en 2019) se debe a cuestiones de definición y metodología y a la voluntad política de la actual administración de encontrar a las personas desaparecidas. Desde que se inició el registro de dichas personas en 1969, más de 269.000 personas han desaparecido en México, aunque el 98% de las mismas lo ha hecho desde el 2006, año en el que Felipe Calderón inició la llamada "guerra contra el narcotráfico". En el mismo período se han encontrado más de 8.200 en fosas comunes, pero los cadáveres que se hallan en ellas no se cuentan como homicidios, porque no se pueden identificar los cuerpos -se estima que hay más de 52.000 sin identificar.

En 2022, los principales hechos de violencia fueron atribuidos a enfrentamientos entre cárteles de la droga. López Obrador declaró que los estados con mayores tasas de homicidios eran aquellos en los que varios grupos criminales se enfrentaban por el control del territorio, mientras que aquellos estados en los que un solo cartel ejercía un control predominante los niveles de violencia eran claramente inferiores. Según un informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, buena parte de la violencia en el país se debe a las acciones protagonizadas por 12 grandes organizaciones dedicadas principalmente al narcotráfico, siete de ellas con mayor antigüedad -Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Cártel de Tijuana, Cártel de Juárez (Organización Carrillo Fuentes), Cártel Beltrán Leyva, Cártel del Golfo y La Familia Michoacana- y otras cinco de más reciente creación -como el Cártel Jalisco Nuevo Generación, creado en 2011- o de menor alcance territorial -como Los Rojos (una escisión de los Beltrán Leyva), Los Caballeros Templarios o Los Viagras. Según otro informe del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en México existen al menos 150 bandas del crimen organizado, la mayoría, aliadas o financiadas por las dos más importantes: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNC). Según tal informe, cuenta con una importante presencia en 14 de los 32 estados del país, mientras que el segundo ejerce el control en unos 23 estados. Según el informe del Congreso de EEUU, el Cártel de Sinaloa controla Durango y Sinaloa y mantiene una férrea lucha con el cártel de Juárez en Chihuahua, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación domina Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima y Querétaro y está en disputas con otras organizaciones en Baja California, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo y Tabasco. Por otra parte, según el mencionado informe, Los Zetas y el Cártel del Golfo mantienen una fuerte rivalidad en San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Tras el CJNG y el Cártel de Sinaloa, la tercera organización criminal con mayor alcance territorial es el Cártel del Golfo, con presencia en las regiones orientales del país. Ambos informes sostienen que ha habido un drástico incremento en el número de grupos armados ilegales que operan en el país desde el año 2006. En esta misma línea, el centro de investigación International Crisis Group sostiene que entre mediados de 2009 y finales de 2020 se ha documentado la existencia de 543 grupos armados, la gran mayoría de naturaleza estrictamente criminal y en algunos casos con motivaciones políticas. Según este informe, 107 de los grupos eran escisiones de grupos más grandes o antiguos, y 212 tenían algún tipo de alianza –aunque a menudo inestable- con las organizaciones criminales de mayor tamaño. Segú ACNUR, el número de personas desplazadas internamente a causa de la violencia entre grupos armados rivales se ha incrementado drásticamente en los últimos años. Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en 2021 hubo 28.867 nuevos desplazamientos por situaciones de violencia, una tercera parte más que en 2020 (9.714) y 2019 (8.664). Los estados más afectados por este fenómeno fueron Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco.

Finalmente, cabe destacar que durante el año varias organizaciones nacionales e internacionales expresaron su rechazo a lo que consideran una creciente militarización de la seguridad pública por parte del Gobierno de López Obrador. A finales de año, la Cámara de Diputados, el Senado y como mínimo 20 de los 32 parlamentos estatales aprobaron una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta el año 2028 –en lugar del año 2024. En la misma línea, a lo largo del año se llevaron a cabo varias movilizaciones contra la intención del Gobierno de integrar la Guardia Nacional –un cuerpo creado por López Obrador en 2019 para combatir a la delincuencia organizada- en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, al finalizar el año, tales intenciones no habían podido materializarse porque un juez federal dictó la suspensión provisional de dicha integración por considerarla inconstitucional.

América del Sur

| Ecuador | |
|-------------|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Gobierno, Recursos Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado |

Síntesis:

En los últimos años, Ecuador ha experimentado uno de los incrementos de la violencia más pronunciados de toda América Latina. En 2022, el Gobierno sostenía que desde el año 2017 la tasa de homicidios se ha multiplicado casi por cinco, y que más del 80% de los asesinatos en el país están vinculados al narcotráfico. Si bien Ecuador había sido históricamente un lugar de tránsito de drogas ilícitas,

algunos análisis sostienen que el país cada vez juega un rol más prominente en la cadena de suministro de drogas a escala internacional, especialmente de cocaína, con una mayor participación en el almacenaje, el procesamiento, la producción y la distribución internacional de estupefacientes, muy principalmente a través de las rutas del Pacífico –la ciudad costeña de Guayaquil concentra casi un porcentaje importante de los homicidios- y de la Amazonía, gracias a su frontera con Brasil. Tal contexto ha dado lugar a un incremento sustancial de los enfrentamientos por el control de lugares y rutas estratégicas entre grupos locales de crimen organizados (como Los Lobos, Los Choneros o Los Lagartos), cárteles mexicanos (especialmente el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación), facciones disidentes de las FARC (como el Frente Oliver Sinisterra o la columna Urías Rondón) u organizaciones criminales internacionales.

Además de unas protestas de gran alcance y de un intento de destitución del presidente, durante 2022 Ecuador registró la cifra de homicidios más alta de la historia reciente del país, el doble de asesinatos que el año anterior, en el que ya se había incrementado en un 180% respecto del 2020. Según datos oficiales del Gobierno, en 2022 se registraron 4.539 muertes violentas y una tasa de homicidios cada 100.000 habitantes de 25,5. Cabe señalar que tal tasa se ha multiplicado por cinco desde el año 2017, año en el que esta era de 5,8, y casi se ha duplicado desde el año 2021, cuando era de 13,7. Aproximadamente un tercio de los homicidios de todo el país se concentraron en la llamada Zona 8 de la provincia de Guayas, que incluye Durán, Samborondón y Guayaquil, la segunda ciudad más poblada del país y una de las que concentra mayor actividad económica. El segundo foco más importante de violencia fue la provincia de Esmeraldas, situada cerca de la frontera con Colombia. En la ciudad de Esmeraldas, la tasa de homicidios fue de 77 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en Guayaquil fue de 46,6. A finales de año, el Gobierno declaró que se habían producido 273 feminicidios, la cifra más alta de la historia del país. Según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), desde enero de 2014 y el 15 de noviembre de 2022, se había registrado la muerte de 1.317 de mujeres y niñas por violencia machista.

El Gobierno declaró que el 83% de las muertes violentas registradas en el país están relacionadas con el control de la distribución y exportación de drogas, especialmente cocaína, y advirtió que el crimen organizado se estaba erigiendo en un estado dentro del Estado. Según el centro de investigación International Crisis Group, históricamente Ecuador había sido un lugar de tránsito importante para drogas ilícitas, pero el incremento de la producción de coca y cocaína en Colombia y algunos cambios en las dinámicas globales del narcotráfico han motivado una creciente participación del crimen organizado en Ecuador en la producción, procesamiento, almacenaje y transporte de estupefacientes. Según el ICG, en los últimos tiempos cárteles mexicanos y grupos delincuenciales colombianos han incrementado la subcontratación de determinadas partes de la cadena de suministros a grupos ecuatorianos. Según fuentes oficiales, más de una tercera parte de los aproximadamente 32.000 reos

que hay en el país —que se cuadriplicaron entre 2009 y 2021— pertenecen a alguna organización de crimen organizado. En el mes de julio, Human Rights Watch denunció que el narcotráfico controla buena parte del sistema carcelario del país y que muchos reclusos, incluso aquellos en prisión preventiva, son obligados a trabajar o colaborar con grupos de crimen organizados para preservar su propia integridad. En este sentido, en los últimos años se han incrementado sustancialmente

los motines y enfrentamientos en las cárceles del país. Aunque en 2022 el número de reos que murieron en tales episodios de violencia -alrededor de un centenarse redujo respecto del año anterior, desde el año 2022 más de 450 personas reclusas han fallecido y otros varios centenares de ellas han resultado heridos. En este sentido, en el mes de noviembre, varias bandas armadas lanzaron 18 ataques simultáneos en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas poco después de que el Gobierno ordenara el traslado de unos 1.000 reclusos de una cárcel en Guayaquil a otros centros de detención controlados por bandas rivales. El ICG señaló que la mitad de los 145 atentados con artefactos explosivos que se habían registrado en todo el país hasta mediados de agosto se habían producido en la ciudad de Guayaquil. En este sentido, el 14 de agosto, cinco personas murieron y otras 17 resultaron heridas tras detonar un artefacto explosivo improvisado en Guayaquil, en un ataque que el Gobierno atribuyó a grupos de crimen organizado y que el ministro de interior consideró como una declaración de guerra contra el Estado. El presidente, Guillermo Lasso, impuso el estado de emergencia -por sexta ocasión desde que asumió el cargo en mayo de 2021.

Además del incremento de la violencia y la actividad vinculada al narcotráfico, durante el mes de junio se produjeron protestas en varias partes del país, durante las que como mínimo siete personas murieron y unas 650 (incluyendo más de 200 policías y unos 100 militares) resultaron heridas. Dichas movilizaciones, también conocidas como Paro Nacional, fueron convocadas y lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) para protestar contra el alto precio del combustible y de otros productos, contra la precariedad del sistema de salud pública, contra los alto niveles de desempleo, contra los altos niveles de inseguridad, y contra la actividad de empresas petroleras y mineras en determinadas zonas del país. Ante la magnitud de las protestas, que provocaron numerosos cortes de carreteras y el desabastecimiento de buena parte del país, el Gobierno decretó el estado de excepción en las zonas más afectadas por las movilizaciones y el toque de queda en la capital. Durante los 14 días en los que las movilizaciones fueron

más intensas, y al amparo del estado de excepción, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo casi 3.000 operaciones militares en varias partes del país. En tal contexto, los

días 25 y 26 de junio la oposición presentó en la Asamblea Nacional una moción para destituir a Lasso, pero solamente obtuvo 80 de los 92 votos necesarios para que la moción fuera aprobada. A finales de junio, el Gobierno y la CONAIE alcanzaron un acuerdo, con mediación de la Conferencia Episcopal, por el que el Gobierno se comprometía a reducir el precio del combustible, a restringir la actividad minera en determinadas áreas protegidas, a derogar un decreto que promovía la

actividad petrolera en la Amazonía, a incrementar los subsidios a las familias más vulnerables y a incrementar el presupuesto para la salud pública y la educación intercultural.

| Perú | |
|-------------|---|
| Intensidad: | 2 |
| Evolución: | = |
| Tipología: | Gobierno, Recursos Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas) |

Síntesis:

En Ecuador la tasa

de homicidios se

ha multiplicado

por cinco desde

el año 2017, en

buena medida por

el incremento de la

actividad vinculada

al narcotráfico

En 1980, precisamente el año en que el país recuperaba la democracia, se inició un conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso que se prolongó durante dos décadas y que costó la vida a más de 60.000 personas. Al amparo de la política contrainsurgente, en los años noventa el Estado sufrió una deriva autoritaria de la mano de Alberto Fujimori, que en el año 2000 se exilió en Japón tras ser depuesto por el Congreso y acusado de numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde el año 2008 las acciones de facciones remanentes de Sendero Luminoso, posteriormente redenominado como Militarizado Partido Comunista del Perú, se han incrementado significativamente en las regiones del Alto Huallaga y, especialmente, del Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Gobierno, que vincula a Sendero Luminoso con el narcotráfico, ha intensificado notablemente sus operaciones militares en ambas regiones, se ha negado a mantener ningún tipo de diálogo con la organización y ha intensificado la lucha política y legal contra su brazo político, Movadef. Por otra parte, varios colectivos, especialmente los pueblos indígenas, han mantenido movilizaciones periódicas para protestar contra la política económica de los sucesivos gobiernos y contra la actividad de empresas extractivas.

La destitución y detención del presidente Pedro Castillo, acusado de querer perpetrar un autogolpe de Estado, motivaron unas intensas protestas durante el mes de diciembre en las que 28 personas murieron y más de 650 resultaron heridas. La crisis se desencadenó a

principios de diciembre a raíz del intento por parte del Congreso de iniciar un proceso de destitución (o moción de vacancia presidencial) contra Castillo, el tercero que enfrentaba tras asumir el cargo en junio de 2021. El 7 de diciembre, fecha en la que estaba previsto que Castillo ejerciera su derecho de defensa en dicho proceso, el presidente emitió un mensaje televisado

en el que anunciaba su intención de disolver el Congreso y reemplazarlo por un "gobierno excepcional de emergencia". En el mismo mensaje, Castillo también adelantó su voluntad de intervenir el poder judicial y la Corte Suprema y también de convocar la elección de un nuevo congreso con facultades constituyentes. Tras esta alocución, que fue considerada por una parte significativa de la clase política y la opinión pública como un intento de perpetrar un golpe de Estado, el Congreso destituyó por amplia mayoría

a Castillo por "incapacidad moral". Buena parte del Gobierno de Castillo dimitió y expresó su rechazo a sus planes, y tanto las Fuerzas Armadas como la Policía emitieron un comunicado para expresar su oposición a cualquier intento de subvertir el orden constitucional. Posteriormente, Castillo fue arrestado por cargos de rebelión y conspiración cuando se dirigía a solicitar asilo político a la embajada mexicana, que sí se lo concedió a su esposa. Posteriormente, la vicepresidenta Dina Boluarte fue designada presidenta del país. Inmediatamente después de estos hechos se iniciaron movilizaciones en varias partes del país para protestar por la destitución de Castillo y en contra de Dina Boluarte y para exigir el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente, en línea con las reivindicaciones expresadas desde prisión por parte del ya expresidente. A mediados de diciembre, la Corte Suprema prolongó el periodo de prisión preventiva de Castillo a 18 meses. Durante las protestas, que se concentraron principalmente entre el 7 y el 25 de diciembre, 28 personas murieron, más de 650 resultaron heridas (la mitad aproximadamente policías). Numerosas carreteras del país fueron cortadas (incluyendo la Panamericana) y el aeropuerto internacional de Arequipa fue bloqueado y el de Cuzco se vio obligado a cancelar sus vuelos. Se registraron protestas en todo el territorio nacional, pero fueron especialmente intensas en zonas como Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cuzco, Puno o Ayacucho, donde se produjeron casi la mitad de las víctimas mortales. Las protestas remitieron en intensidad coincidiendo con las fechas navideñas, pero a principios de año se reanudó una segunda ola de protestas. organizaciones de derechos humanos denunciaron la desproporcionalidad de las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas. Amnistía Internacional, por ejemplo, denunció numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales, desde el uso excesivo de la fuerza hasta la tortura.

Ante tal situación de bloqueos y disturbios de alta intensidad, el nuevo Gobierno anunció un proceso de diálogo y concertación nacional para superar la crisis, y el Congreso aprobó un plan presentado por Boluarte para adelantar las elecciones del 2026 a abril del 2024, adelantando la finalización tanto del mandato presidencial como del Parlamento. Las protestas

remitieron en intensidad coincidiendo con las fechas navideñas, pero a principios de año se reanudó una segunda ola de protestas que provocaron el bloqueo de decenas de carreteras y la muerte de 18 personas. En el plano internacional, varios Gobiernos y organismos internacionales condenaron la violencia que se registró durante las protestas. Varios países justificaron la destitución de Castillo, pero los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por la

destitución y detención de Castillo, denunciaron que éste había sufrido hostigamiento e instaron a las nuevas autoridades peruanas a no revertir la voluntad popular. Los embajadores de dichos países fueron llamados a consultas por parte del nuevo Gobierno peruano, y el embajador de México fue declarado persona non grata e instado a abandonar el país tras acoger en su embajada a la esposa de Castillo. Cabe señalar que la crisis de finales de 2022 se enmarca en una compleja situación política, social y económica en los últimos años, como así lo ilustra el hecho de que Boluarte se convirtiera en la sexta jefa del Estado desde el 2018. En este sentido, entre finales de marzo y mediados de abril se estima que ocho personas murieron y muchas más resultaron heridas durante unas movilizaciones convocadas por el colectivo de transportistas para protestar contra el incremento de los precios de combustible y también contra la acción de gobierno de Castillo.

| Venezuela | |
|-------------|---------------------------------------|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | \downarrow |
| Tipología: | Gobierno Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social |
| | |

Síntesis:

La destitución

y detención del

presidente Pedro

Castillo, acusado de

querer perpetrar un

autogolpe de Estado,

motivaron unas de

las protestas más

importantes de los

últimos años en Perú

La actual crisis política y social que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, que fue considerada inconstitucional por parte de la oposición. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. En un contexto de

creciente crisis económica y de movilizaciones recurrentes y en ocasiones masivas, la crisis política en Venezuela se agudizó después de que la oposición ganara cómodamente las elecciones legislativas de diciembre de 2015, obteniendo su primera victoria en unos comicios en dos décadas. Tal victoria provocó una situación de una cierta parálisis institucional entre la Asamblea Nacional, por un lado, y el Gobierno y buena parte del poder judicial por otra.

Se redujo considerablemente la tensión entre el Gobierno y la oposición y disminuyó sensiblemente la presión internacional sobre el Ejecutivo de Nicolás Maduro, pero siguieron registrándose numerosas movilizaciones sociales, un alto número de homicidios y, según organismos internacionales, importantes violaciones de los derechos humanos. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2022 se registraron 2.328 homicidios, un 25% menos que en 2021. Sin embargo, el mismo Observatorio también señaló que si contabilizan los 5.799 casos de "muerte por averiguación" -casos que no han sido investigados ni enjuiciados- y los 1.240 casos de muerte por intervención policial, el total de muertes violentas en el país ascendía a 9.367, con una tasa de homicidios de 35,3 casos cada 100.000 habitantes. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, tal cifra implica que seguramente Venezuela será el país con la segunda tasa más alta de homicidios de América Latina, por detrás de Honduras. Además, el OVV también declaró que se han registrado 1.370 denuncias por desapariciones, por lo que el número real de homicidios en el país podría ser aún superior. En 2021 se registraron 9.437 muertes violentas, de modo que el incremento en 2022 fue imperceptible. Caracas fue la región con mayor tasa de homicidios (89), seguida de los estados de La Guaira (62), Miranda (54) y Bolívar (50). Por otra parte, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señaló que entre enero y junio se registraron 3.892 protestas en el país, un 15 % más que en el mismo periodo del 2021. El 73% de las protestas estaban relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, especialmente los derechos laborales, mientras que el 27% restante tenía relación con derechos civiles y políticos, y con cuestiones como la persecución, criminalización y detención de defensores de los derechos humanos, opositores, trabajadores humanitarios y miembros de la sociedad civil. A pesar del incremento de las protestas respecto del año anterior, el número de manifestaciones es muy inferior a los de años anteriores (en 2017, por ejemplo, casi se alcanzaron las 10.000 protestas). Además, el OVCS también señaló que se documentó represión en 52 protestas en 14 estados, pero que en ninguna de ellas se produjeron víctimas mortales y que había disminuido la conducta represiva de las fuerzas de seguridad del Estado y de los cuerpos de civiles armados respecto de años anteriores.

A pesar de ello, en 2022 varios organismos internacionales denunciaron la situación de derechos humanos en Venezuela. Cabe destacar especialmente

que en el mes de noviembre, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó formalmente a la Sala de Cuestiones Preliminares su autorización para continuar con la investigación abierta en noviembre de 2021 sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde abril de 2017. En abril, el Gobierno solicitó postergar la investigación argumentando que estaba avanzando en varias investigaciones y juicios sobre la materia, pero a finales de año Karim Khan consideró que tales avances eran insuficientes. La Corte Penal Internacional había abierto una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas de seguridad del régimen en la represión de las protestas antigubernamentales de 2017, en las que se estima murieron unas 100 personas. El Gobierno se opone tajantemente a las observaciones de la CPI, pero en el mes de marzo autorizó la apertura de una oficina de la CPI en Caracas. Previamente, en septiembre, se presentó el tercer informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela –creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014-, en el que se afirma que se siguen cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos contra la disidencia en Venezuela sin una posterior investigación o sanción. Según dicho informe, desde 2014 en Venezuela se han cometido violaciones de lesa humanidad -como Torturas, violencia sexual y detenciones arbitrariascomo parte de un plan urdido y dirigido al más alto nivel para reprimir a la oposición. El Informe de la Misión señala tanto a personas concretas (incluyendo a Nicolás Maduro) como a determinadas estructuras del Estado, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Pocos días más tarde de la presentación del informe, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas extendió por otros dos años el mandato de la Misión y no reeligió a Venezuela como miembro de dicho Consejo, en una decisión que varios medios de comunicación interpretaron como una importante llamada de atención al Gobierno venezolano. En la misma línea, en abril la organización de derechos humanos Foro Penal declaró que en el país hay 240 personas detenidas que considera presos políticos, además de 9.414 personas que están sujetas, a su juicio, a procesos penales injustos por motivos políticos. Además, en varias ocasiones durante el año la oposición denunció hostigamiento contra algunos de sus líderes, incluido el propio Guaidó, durante una gira por el país en el mes de junio.

Además de la situación de derechos humanos, tanto la oposición como organizaciones de la sociedad civil denunciaron la precaria situación económica y humanitaria del país. A fecha de diciembre de 2022 había más de 7 millones de personas venezolanas migrantes o refugiadas en todo el mundo y, según la OIM, había 7,7 millones de personas en el país que necesitaban ayuda humanitaria. En marzo, la Federación Internacional de

Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en Venezuela (Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos, Provea), publicaron un informe que denuncia las graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela y en el que señalan que la pobreza alcanzó al 94% de la población y en los últimos seis años el PIB se ha contraído en más del 80%. Además, la FIDH denunció que al menos 30% de los menores padece de alguna forma de desnutrición —la mitad de dicho porcentaje aguda o severa—, que la distribución de agua potable se ha reducido en un 60% desde 1998 y que la producción de electricidad había caído un 74%, por lo que en 2021 se registraron 174.000 apagones en el país.

En el plano político, aunque la oposición llevó a cabo varias medidas para mejorar su cohesión y coordinación interna y establecer un sistema de primarias en todo el país que permita elegir a la persona que concurra a las elecciones presidenciales previstas para 2024, en el mes de diciembre la propia Asamblea Nacional elegida en 2015 -considerada como único órgano legítimo del país según la oposición, pero ilegalizada por el Gobierno- decretó el fin del Gobierno interino y de la presidencia encargada de Juan Guaidó por entender que ya no es percibido como un instrumento de cambio real. Guaidó criticó tal medida por considerar que refuerza al Gobierno de Maduro, pero previamente ya había habido algunos indicadores de que el apoyo internacional a Guaidó había menguado. En enero de 2022, por ejemplo, la Asamblea Nacional había prorrogado un año la presidencia interina de Guaidó pero había reducido la estructura burocrática que le daba apoyo, y el en mes de octubre 19 países latinoamericanos votaron en contra de que el Gobierno de Guaidó detentara la representación de Venezuela en la OEA, pero la moción no se aprobó porque se requería el apoyo de dos terceras partes de los estados miembro.

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

| Kazajstán | |
|-------------|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Sistema, Gobierno Interna internacionalizada |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales |

Síntesis:

Desde su independencia de la URSS en 1991, Kazajstán ha experimentado un crecimiento económico significativo en

paralelo a una evolución política y social mayoritariamente estable. No obstante, los 30 años en la presidencia del país de Nursultán Nazarbáyev también estuvieron marcados por el déficit democrático y políticas de tendencias autoritarias, sin espacio para la oposición política y social. Tras su salida en 2019, Nazarbáyev continuó detentando posiciones de liderazgo, incluyendo como Líder de la Nación y presidente del partido oficialista Nur Otan. Los ejes de conflicto incluyen la tensión entre las autoridades y sectores de oposición en torno a la gobernanza y el acceso al poder político; así como entre las autoridades y grupos sectoriales en torno a elementos socioeconómicos, en un contexto de desigualdad económica y deficitarias condiciones de trabajo en sectores como el de los hidrocarburos. Por otra parte, en el conjunto de Asia central, actores armados locales y regionales de inspiración islamista han protagonizado incidentes de violencia en diversos momentos, incluyendo en Kazajstán, mientras gobiernos de la región también han instrumentalizado el supuesto riesgo de violencia islamista para justificar practicas represivas.

Kazajstán fue escenario de una crisis social y política en enero, con protestas ciudadanas y grave represión violenta de estas, y un balance de en torno a 200 víctimas mortales, el más mortífero en su historia reciente. Las movilizaciones se iniciaron el 2 de enero en la localidad petrolera de Zhanaozen (al oeste, y escenario en 2011 de represión violenta contra trabajadores en huelga), en protesta contra la retirada por el Gobierno del límite al precio del gas licuado y contra la consiguiente alza de precios. Las protestas se extendieron a amplias zonas del país y fueron abarcando dimensiones múltiples relativas al descontento económico y social y a la mala praxis política, con movilizaciones espontáneas y de carácter ciudadano contra la corrupción, la desigualdad social, los bajos salarios, y con el reclamo de democratización del poder, entre otros aspectos. Un lema aglutinador fue el de "¡Viejo, vete ya!" ("Shal, ket!", usado ya por activistas feministas en 2014) en contra del poder que aun detentaba el expresidente Nazarbáyev y su entorno y contra el autoritarismo y vertical de poder, incluyendo bajo el gobierno del presidente Kasim-Yomart Tokáyev.

La situación se tornó violenta en ciudades como Almaty. Algunos análisis señalaron la aparente retirada de fuerzas de seguridad en la noche del 5 de enero en Almaty y acciones de pillaje y destrozos en ese contexto,⁴¹ así como posible connivencia entre sectores criminales y del régimen o del entorno de Nazarbáyev en la generación de caos,⁴² y también existencia de desafección, frustración e ira⁴³ en unas protestas mayoritariamente de carácter ciudadano, espontáneo y diverso. En conjunto, las protestas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Según HRW, hubo uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, así como otras violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades, como

^{41.} International Crisis Group, Behind the Unrest in Kazakhstan, ICG, 14 de enero de 2022.

^{42.} Marat, Erica y Assel Tutumlu, Kazakhstan's Protests Aren't a Color Revolution, Foreign Policy, 11 de enero de 2022.

^{43.} Rowley, Thomas y Zhanar Sekerbayeva, What really happened in Kazakhstan? A feminist perspective, Open Democracy, 19 de enero de 2022.

detenciones arbitrarias y encarcelamiento, malos tratos y tortura de personas detenidas. El presidente, Kasim-Yomart Tokáyev, declaró el estado de emergencia, cortó internet, ordenó disparar sin previo aviso y atribuyó las protestas a "terroristas" y "figuras extranjeras", pese al carácter ciudadano de la protesta. Tokáyev solicitó el 5 de enero la intervención de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), alianza militar de varios países del espacio postsoviético y liderada por Rusia. En lo que fue la primera intervención de la organización militar en sus tres décadas de existencia, la OTSC envió tropas -mayoritariamente rusas-, que fueron desplegadas en infraestructura considerada estratégica, hasta su retirada gradual entre el 13 y el 19. En las jornadas de protesta y represión al menos 238 personas murieron -en su práctica totalidad manifestantes, y otros 19 miembros de fuerzas de seguridad. Cerca de 10.000 personas fueron detenidas, incluyendo activistas y periodistas, y cientos de personas detenidas denunciaron malos tratos o tortura.

Algunos análisis señalaron que entre sus diferentes capas la crisis podía tener también elementos de disputa entre élites. Así, junto a la respuesta en forma de represión, Tókayev desplazó de cargos de poder en el ámbito de seguridad a Nazarbáyev y aliados de éste, incluyendo la destitución del expresidente de la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional. El Gobierno dimitió y asumió un nuevo gobierno, en el que 11 de los 20 ministros mantuvieron sus cargos. En marzo Tokáyev anunció planes para establecer límites a los poderes presidenciales. En un referéndum en junio se aprobaron enmiendas constitucionales que, en palabras del presidente, cambiaban la "forma super-presidencialista" a una "república presidencia con un parlamento fuerte".

Algunos análisis señalaron la falta de participación de la sociedad civil en la preparación de las enmiendas así como los escasos límites introducidos a los poderes. Tokáyev fue reelegido presidente en elecciones presidenciales anticipadas en noviembre. La misión de observación de la OSCE señaló la falta de competencia y la necesidad de reformas para garantizar pluralismo real. Un año después del que fue denominado como el "enero sangriento" (Qandy Qantar), análisis e informes destacaron la falta de una investigación independiente sobre los hechos de enero y la falta de cambios efectivos en el país encaminados a garantías de derechos y libertades civiles y políticas y justicia social, mientras otros señalaron pasos de cierta mayor apertura a la participación aun si manteniéndose el control.44

| Kirguistán-Tayikistán | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Territorio, Recursos Internacional |
| Actores: | Kirguistán, Tayikistán |

Síntesis:

Kirguistán v Tavikistán mantienen un conflicto fronterizo en torno a la demarcación de una parte de su frontera común, de la cual en torno a la mitad permanece sin delimitar desde la independencia de ambos países tras la descomposición de la Unión Soviética. La disputa abarca la falta de demarcación fronteriza, tensiones intercomunitarias en torno al acceso v uso de áreas de pastoreo y de agua –que escalan en ocasiones a violencia intercomunitaria- y hostilidades entre fuerzas fronterizas. La tensión tiene su epicentro en el Valle de Ferganá (Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán), que cuenta con varios enclaves territoriales, cuyo acceso se ha visto afectado en situaciones de incremento de tensión. En diversas etapas ambos países han llevado a cabo negociaciones en torno a la delimitación de la frontera, sin lograr acuerdos efectivos duraderos. En 2021 la tensión aumentó de forma significativa, con incidentes de violencia que resultaron en medio centenar de personas fallecidas, otras 200 heridas y varias decenas de miles evacuadas. En 2022 se produjo una nueva escalada, con un centenar de fallecidos y uso de armamento pesado, interpretada en algunos análisis como una ofensiva militar de Tayikistán contra Kirguistán. El incremento de la militarización en ambos países añade más riesgos al escenario de tensión interestatal.

Se incrementó la tensión fronteriza entre Kirguistán y Tayikistán, con incidentes durante el año y una escalada militar en septiembre con un centenar de fallecidos y que supuso un salto de mayor militarización con respecto a años anteriores. En enero se produjeron choques entre guardas fronterizos en territorio entre la región de Batken (Kirguistán) y de Sughd (Tayikistán), con dos civiles de Tayikistán fallecidos, una veintena de heridos de ambos países -incluyendo civiles y fuerzas de seguridad- y un millar de evacuados. Se alcanzó un acuerdo de alto el fuego a finales de ese mes. Se produjeron nuevos incidentes en meses posteriores y en septiembre la tensión aumentó. Disparos entre fuerzas fronterizas de ambos países el día 14 de ese mes derivaron en días posteriores en una escalada militar. Ambos Estados se acusaron de uso de armamento pesado, incluyendo tanques, drones y lanzacohetes múltiples. A diferencia de crisis anteriores, se denunció ataques de Tayikistán contra áreas más alejadas de la frontera en disputa, como zonas de los distritos de Batken y Leilek en la región de Batken, incluyendo bombardeos contra la capital regional Batken y su aeropuerto. Medios de comunicación se hicieron eco de denuncias de disparos de mortero también en la región de Osh, en Kirguistán. Algunos análisis caracterizaron la violencia como una operación militar ofensiva

^{44.} Véase, entre otros, Mazorenko, Dmitriy y Paolo Sorbello, Too little has changed in Kazakhstan in the year since 'Bloody January', Open Democracy, 5 de enero de 2023; HRW, Kazakhstan. Events of 2022, en World Report 2023, HRW, 2023; Abishev, Gaziz, Has Kazakhstan Become More Democratic Following Recent Elections?, Carnegie, 12 de abril de 2023.

de Tayikistán contra Kirguistán, diferenciándolo de otras situaciones previas de incidentes entre guardias fronterizos de ambos países.⁴⁵ En torno a un centenar de personas fallecieron, incluyendo al menos 37 civiles –entre ellos, 4 menores–, y más de un centenar resultaron heridos.

Kirguistán cifró en 136.000 los civiles evacuados en su país. HRW denunció que población civil de al menos 12 localidades de ambos países se vio afectada, y se hizo eco de alegaciones de Kirguistán recogidas en medios de comunicación sobre incendios intencionados y saqueo de muchas viviendas en la localidad de Ak-Sai (Kirguistán) y de incendios y daños a más de 300 estructuras y equipamientos civiles, incluyendo mercados y colegios.46 HRW también se hizo eco de alegaciones de Tayikistán de incendios contra viviendas en su territorio y de población civil herida, aunque señaló que no había informaciones sobre evacuaciones dentro de Tayikistán. Hubo varios acuerdos de alto el fuego -incluyendo uno el 16 de septiembre alcanzado por ambos presidentes durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai- si bien ambas partes se acusaron de incumplimientos. En torno al 18 de septiembre las autoridades de Kirguistán señalaron que la situación en la frontera se estaba estabilizando, aunque continuaba tensa. El 25 de septiembre los dos países acordaron un protocolo por el cual se comprometían a retirarse cada uno de cuatro puestos fronterizos, así como a llevar a cabo patrullajes fronterizos en rutas acordadas.

Pese a la desescalada posterior a la crisis de septiembre, la situación permaneció tensa en meses posteriores. Ambos gobiernos intercambiaron a mediados de octubre nuevas acusaciones de despliegue de fuerzas militares en posiciones de asalto en torno a áreas de la frontera en disputa, así como de violaciones del espacio aéreo con drones y de preparación de trincheras. Tayikistán denunció también violaciones del alto el fuego y prácticas de hostigamiento contra la población tayika del enclave de Voruj —rodeado de territorio de Kirguistán-, mientras Kirguistán acusó al país vecino de entrenamiento de mercenarios, de acopio de armamento y munición y de instalación de minas en áreas fronterizas en disputa. Cada país rechazó las acusaciones del otro.

Asia Meridional

| India – China | |
|---------------|-----------------------------|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | <u> </u> |
| Tipología: | Territorio Internacional |
| Actores: | India, China |

Síntesis:

La frontera compartida por China e India ha sido objeto de disputas desde la década de 1950, tras la partición de India y Pakistán y la fundación de la República Popular China en 1949. Esta frontera nunca ha sido formalmente delimitada mediante un acuerdo entre ambos países y son varias las zonas sobre cuya demarcación existe conflicto. En la zona occidental de la frontera la disputa gira en torno a la zona de Aksai Chin, un área deshabitada cuyo territorio India reclama y considera que pertenece a la región de Ladakh (parte de Jammu y Cachemira) y que administra China como parte de la región de Xinjiang. El anuncio por parte de China de la construcción de una carretera que unía Xinjiang con Tíbet atravesando la región de Aksai Chin incrementó la tensión con la India, que se vio agravada tras la concesión de asilo al Dalai Lama en India en 1959. En los años siguientes se produjeron movimientos de tropas por partes de ambos países en la zona. En 1962 se inició una guerra que finalizó con la derrota militar de India, pero sin que se resolviera la cuestión de la demarcación, asunto que siguió condicionando las relaciones entre ambos Estados, así como con otros países de la región, especialmente con Pakistán. En 1988 los dos Gobiernos acordaron resolver la disputa por vías pacíficas. No obstante, desde entonces no se han logrado avances en las negociaciones y la tensión militar en las zonas en disputa ha persistido.

Se agravó la tensión entre India y China en torno a las disputas territoriales por la demarcación fronteriza entre los dos países conocida como Línea Actual de Control, con los primeros enfrentamientos directos entre tropas indias y chinas en dos años. Durante todo el año se produjeron acusaciones verbales y, aunque hubo varias reuniones para tratar de solventar el conflicto entre ambos Gobiernos, no se produjeron avances. En estos dos años se habían producido casi 20 encuentros entre mandos militares con el objetivo de solventar las tensiones en el terreno, aunque sin resultados significativos. Además, persistió la construcción de infraestructura en las inmediaciones a la frontera, lo que elevó el riesgo de incidentes y de escalada de la tensión.

No obstante, cabe destacar que en 2022 se produjeron algunos acercamientos diplomáticos de gran relevancia. En marzo, el ministro de exteriores chino, Wang Yi, viajó a Delhi en la visita de mayor rango desde junio de 2020. Y en noviembre se produjo el primer encuentro presencial entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente chino, Xi Jinping, desde los enfrentamientos de 2020. Este encuentro fue de cortesía, sin que trascendiera ninguna reunión entre ambos mandatarios y tuvo lugar en el marco de la cumbre del G20 en Indonesia. No obstante, a pesar de estos y otros intentos de acercamiento, finalmente, en el mes de diciembre se produjeron enfrentamientos violentos entre soldados de los dos países que causaron 30 heridos en las filas indias y un número indeterminado de heridos chinos, aunque no se utilizaron armas de fuego. Ambos países se acusaron mutuamente de haber traspasado la frontera de forma ilegal. El enfrentamiento tuvo lugar en el sector Tawang del estado indio de Arunachal Pradesh,

^{45.} Sharshenova, Aijan, More than a 'Border Skirmish' Between Kyrgyzstan and Tajikistan, The Diplomat, 19 de septiembre de 2022.

^{46.} Sultanalieva, Syinat, Kyrgyzstan-Tajikistan Border Clashes Prove Deadly for Civilians, HRW, 21 de septiembre de 2022.

una zona considerada por China como parte del Tíbet y un emplazamiento estratégico para ambas partes, lo que incrementó la gravedad del choque. Se trataba

de los primeros enfrentamientos directos en dos años, desde los enfrentamientos en junio de 2020 en el valle de Galwan, aunque en enero de enero de 2021 se había producido un choque en Sikkim. El Gobierno indio señaló posteriormente que tras los enfrentamientos se habían producido contactos diplomáticos entre ambas partes y que había tenido lugar una reunión entre los comandantes locales de ambos ejércitos, pero la tensión entre los dos países se mantuvo muy elevada. Los enfrentamientos se produjeron a pesar de que en el mes de septiembre se había alcanzado un acuerdo para desescalar la tensión por el que ambas partes se

comprometían a una retirada parcial y progresiva en la zona de Gogra-Hot Springs en Ladakh Este, con el objetivo de crear una zona de contención. No obstante, 50.000 soldados de cada uno de los países permanecían en la zona. El acuerdo del mes de septiembre se produjo después de que en agosto India hubiera presentado quejas por la presencia de aviones de combate chinos en las proximidades de la Línea Actual de Control, violando los límites de la zona de contención.

| India – Pakistán | |
|------------------|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | \downarrow |
| Tipología: | Identidad, Territorio Internacional |
| Actores: | India, Pakistán |

Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y parti-ción de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971, 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se trasladó al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera de facto que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que éstos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

A pesar de que persistió la tensión entre India y Pakistán, con numerosos desencuentros diplomáticos y acusaciones mutuas entre ambos países, la situación

Se agravó la tensión

entre India y China

en torno a las

disputas territoriales

por la demarcación

fronteriza entre

los dos países,

con los primeros

enfrentamientos

directos entre tropas

indias y chinas en

dos años

de violencia mejoró considerablemente como consecuencia de la renovación del acuerdo de alto el fuego entre ambos países en 2021. Durante 2022 se registró un único incidente de violencia en la Línea de Control, frontera de facto entre India y Pakistán. India acusó a Pakistán en septiembre de haber disparado en el sector de Arnia, distrito de Jammu, a lo que India habría respondido militarmente. No se produjeron víctimas ni hubo heridos y posteriormente se produjo una reunión entre responsables de las fuerzas de seguridad de ambos bandos, tras la que se acordó seguir respetando el acuerdo de alto el fuego. En marzo se había

producido un incidente en el que un misil se disparó accidentalmente desde India, aterrizando en Pakistán sin causar víctimas.

El Gobierno lamentó lo sucedido, reiterando el carácter accidental del suceso. Aunque no se produjo ninguna escalada, se expresaron dudas sobre los mecanismos para prevenir este tipo de incidentes. Así pues, se consolidó la tendencia de reducción de la tensión en la frontera desde los acercamientos diplomáticos que se llevaron a cabo durante 2021, sin episodios de enfrentamientos ni de violaciones del acuerdo de alto el fuego vigente en la Línea de Control. Algunos análisis señalaron que la tensión en la frontera entre India y China, conocida como Línea Actual de Control, habría llevado a India a concentrar sus esfuerzos militares en esta zona. Además, tras la toma de posesión del nuevo primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, el primer ministro indio Narendra Modi le felicitó e hizo un llamamiento a establecer una relación constructiva, a lo que Sharif respondió instando a la resolución del conflicto por Cachemira. No obstante, persistieron las acusaciones mutuas de terrorismo y de apoyo a diferentes fuerzas insurgentes que operan en cada uno de los dos países y no se produjeron avances diplomáticos para resolver los diferentes conflictos pendientes. El ministro de Interior indio, Amit Ahah, señaló que no tenía intención de dialogar con Pakistán, sino que su objetivo era hacerlo dialogar con la población de Jammu y Cachemira, reiterando las acusaciones al Gobierno vecino de prestar apoyo a organizaciones terroristas. Así, el ministro de exteriores Bilawal Bhutto-Zardari, afirmó en diciembre que había evidencias claras de que India había colaborado con el atentado que tuvo lugar en junio de 2021 en Lahore, y su vez, su homólogo indio acusó a Pakistán de haber dado cobijo a Osama bin Laden.

| Pakistán | |
|-------------|---------------------------------------|
| Intensidad: | 2 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Gobierno, Sistema Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social |

Síntesis:

En 1999 un golpe de Estado perpetrado por el General Pervez Musharraf puso fin al Gobierno del entonces primer ministro Nawaz Sharif, que evitó una condena exiliándose a Arabia Saudita. El golpe de Estado le valió al nuevo régimen militar el aislamiento internacional, que acabó tras los atentados de septiembre de 2001, cuando Musharraf se convirtió en el principal aliado de EEUU en la región en la persecución de al-Qaeda. La perpetuación de Musharraf en el poder, la ostentación simultánea de la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas, los ataques al poder judicial, la impopularidad de la alianza con EEUU en un periodo de aumento del antiamericanismo, la crisis económica y medioambiental, o la creciente presencia de grupos terroristas en otras zonas del país (más allá de las áreas tribales), con el consecuente aumento de la inseguridad, son algunos de los elementos que han explicado durante años la frágil situación política del país. En 2008 Musharraf dimitió como presidente tras las elecciones legislativas, con gran parte del Parlamento en su contra. Asif Ali Zardari del PPP fue votado para sucederle en la presidencia. A pesar del retorno de la democracia al país, y de vivir hitos históricos como el primer traspaso de un Gobierno (PPP) que finalizó su legislatura de cinco años de forma pacífica al siguiente Gobierno electo (Liga Musulmana de Nawaz), Pakistán continuó siendo un país inestable. En 2018 resultó vencedor en las elecciones generales el partido PTI, encabezado por Imran Khan.

Pakistán atravesó una grave crisis durante el año, que se sumó a la situación de conflicto armado en el país. La crisis fue especialmente aguda en las dimensiones política, económica y medioambiental. En lo que respecta a la crisis política, la situación se agravó a partir de marzo, cuando nueve partidos de la oposición, liderados por el PPP, PML-N y U-e-I presentaron una moción de censura que derivó en la destitución del primer ministro, Imran Khan, en abril. Khan había acusado a los partidos impulsores de la moción de actuar al dictado de una "conspiración extranjera". Previamente a la votación de la moción de censura a principios de abril, en la que resultó perdedor Khan, el presidente de la Asamblea Nacional disolvió el parlamento y nombró a Khan como primer ministro interino, en un intento de impedir que la votación se llevase a término. No obstante, el Tribunal Supremo declaró ilegal dicho intento e instó a que se celebrase la votación, que tuvo lugar sin la presencia de Khan. Tras la moción de censura el Parlamento eligió primer ministro a Shehbaz Sharif, del PML-N. En los días posteriores seguidores de Khan Ilevaron a cabo protestas en varias ciudades y se produjeron enfrentamientos con la policía. Durante los mismos, al menos 30 policías resultaron heridos el 25 de mayo y en las semanas siguientes se repitieron múltiples protestas. En agosto Khan fue acusado de terrorismo,

pero un juez estableció un aplazamiento de su arresto y posteriormente se retiraron los cargos. La crisis escaló nuevamente en noviembre cuando se produjo un intento de asesinato contra Khan en la provincia de Punjab. En el transcurso de una marcha a la que el ex mandatario asistía junto con cientos de sus seguidores, Khan fue tiroteado y resultó herido en la pierna. El atentado tenía lugar después de Khan hubiese sido inhabilitado para cargos públicos por la comisión electoral. Khan acusó al Gobierno, incluyendo al propio primer ministro de estar detrás del atentado. Posteriormente se intensificaron las protestas en varias zonas del país por parte de los seguidores de Khan. En paralelo a la crisis política, el país se vio sumido en una grave crisis económica que intensificó las tensiones sociales. Además, en agosto se produjeron unas graves inundaciones que causaron la muerte de al menos 1.700 personas y afectaron de forma importante a diferentes zonas del país. Más del 75% del territorio de la provincia de Baluchistán se vio afectado por la catástrofe, atribuida al impacto del cambio climático en el país asiático. Más de 30 millones de personas resultaron afectadas por las inundaciones y cerca de ocho millones tuvieron que desplazarse de manera forzada, como consecuencia de uno de los peores desastres en el país. El secretario general de la ONU hizo un llamamiento a que se prestara un apoyo internacional de carácter masivo a Pakistán, señalando que el país afectado tenía mucha menos responsabilidad que otros en el cambio climático que había dado lugar a las inundaciones.

| Sri Lanka | |
|-------------|---------------------------------------|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Gobierno Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social |

Síntesis:

En 1983 el grupo armado de oposición independentista tamil LTTE inició el conflicto armado que asoló Sri Lanka durante casi tres décadas. El proceso de creciente marginación de la población tamil por parte del Gobierno, integrado fundamentalmente por las elites cingalesas, tras la descolonización de la isla en 1948 llevó al grupo armado a reclamar la creación de un Estado tamil independiente por la vía armada. Desde 1983, cada una de las fases en las que se desarrolló el conflicto finalizó con un proceso de paz fallido. En 2002 se iniciaron negociaciones de paz con mediación noruega, después de la firma de un acuerdo de alto el fuego, el fracaso de las cuales llevó a la reanudación con gran virulencia del conflicto armado en 2006. En mayo de 2009 las Fuerzas Armadas vencieron militarmente al LTTE y recuperaron todo el territorio del país tras dar muerte al líder del grupo armado, Velupillai Prabhakaran. Desde entonces miles de tamiles han permanecido desplazados y no se han adoptado medidas para avanzar en la reconciliación. Además, el Gobierno se ha negado a investigar los crímenes de guerra del conflicto armado, negando la comisión de este tipo de delitos.

Durante el año escaló gravemente la crisis política en el país, con protestas masivas en Colombo y otras ciudades y un cambio en el Gobierno. La agudización de la crisis económica debido fundamentalmente a la inflación –25% en los productos alimentarios y 18% en términos generales-, la escasez en el suministro de productos básicos y combustibles y el riesgo de hambruna en el país, en un contexto de acusaciones persistentes de corrupción gubernamental generalizada y mala gestión, derivó en manifestaciones masivas en marzo en las que se exigió la dimisión del presidente, Gotabaya Rajapakse, y el primer ministro, Mahinda Rajapakse (hermano del primero), después de que el gabinete en pleno presentara su dimisión con la excepción de los dos mandatarios. Como consecuencia de estas protestas iniciales, al menos una persona murió en las manifestaciones contra el Gobierno y otras tres murieron en las colas frente a las gasolineras. La oposición trató de forzar una moción de censura ante la negativa inicial del presidente y el primer ministro a dimitir de sus cargos. Finalmente, a principios de mayo, el primer ministro Mahinda Rajapaksa, se vio forzado a dimitir tras semanas de intensas protestas en las que al menos ocho personas murieron debido a la violencia y la represión y centenares resultaron heridas. La Policía recibió la orden de disparar sin previo aviso para contener las protestas, al tiempo que se imponía un toque de queda nacional. Al menos 40 viviendas de personas partidarias de Rajapaksa fueron incendiadas y también hubo un intento de asalto a su vivienda oficial. Asimismo, se produjeron violentos ataques contra una zona en la que habían acampado personas que exigían la dimisión del presidente y el primer ministro. Tras su dimisión, se produjo el nombramiento de Ranil Wickremesinghe como primer ministro, quien ya había ocupado el cargo durante varios mandatos, con el cometido de liderar un gobierno de unidad nacional. El Ejecutivo aprobó la completa restricción del acceso al combustible, excepto para servicios esenciales, ante la imposibilidad de importar debido a la deuda de la compañía estatal petrolera. El impacto de la COVID y la desaparición del turismo en el país había llevado al Gobierno a tener que usar las reservas extranjeras para hacer frente al pago de la deuda y las importaciones, lo que habría llevado a la práctica bancarrota, provocando enorme escasez de combustible y falta de suministro de electricidad. El Gobierno solicitó ayuda al FMI para hacer frente a la crisis económica, considerada la más grave en el país en los últimos 70 años. Tras el nombramiento de Wickremesinghe el Gobierno aprobó la completa restricción del acceso al combustible, excepto para servicios esenciales, ante la imposibilidad de importarlo debido a la deuda de la compañía estatal petrolera. La crisis económica que atraviesa el país ha llevado al impago de la deuda y tuvo como consecuencia el desabastecimiento de medicamentos, alimentos, combustible v otros bienes esenciales, generando también una crisis sanitaria de enorme gravedad. En

julio se produjo una nueva escalada de la tensión tras el asalto al domicilio presidencial por parte de manifestantes, lo que forzó la dimisión del presidente Gotabaya Rajapakse —que huyó del país— y llevó al nombramiento de Wickremesinghe como presidente interino. Este declaró el estado de emergencia después de que su oficina también fuera ocupada por manifestantes y en los días siguientes se intensificó la represión de las protestas. Finalmente, el 15 de julio Wickremesinghe tomó posesión de su cargó y ganó la votación parlamentaria para su nombramiento definitivo en los días siguientes. Las protestas sociales y la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad continuaron en los meses posteriores, en un contexto de colapso económico y crisis humanitaria.

Asia Oriental

| Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁴⁷ | | |
|---|--|--|
| Intensidad: | 3 | |
| Evolución: | \uparrow | |
| Tipología: | Gobierno Internacional | |
| Actores: | RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia | |

Síntesis:

La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado "eje del mal". Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

En paralelo al incremento de la tensión política y militar entre Corea del Norte y Corea del Sur, en 2023 se agudizó sustancialmente la preocupación internacional (especialmente de EEUU, Corea del Sur y Japón) respecto del programa armamentístico norcoreano. En todo el año, Corea del Norte lanzó alrededor de 95 misiles, varios de ellos intercontinentales, una cifra claramente superior a los ocho lanzamientos que se produjeron en 2021 o a los cuatro del 2020. Además del dramático incremento en la frecuencia de tales lanzamientos, varios analistas también expresaron su preocupación por el tipo de armamento que testó Pyongyang durante

^{47.} Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano.

el año, incluyendo misiles crucero y balísticos, armas hipersónicas o misiles intercontinentales balísticos de gran alcance (como el Hwasong-17, con un recorrido de unos 15.000 quilómetros). Además, tanto los Gobiernos de EEUU y Corea del Sur como el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y algunos centros de investigación señalaron que Corea del Norte estaba reactivando la principal instalación de ensayos nucleares del país en Punggye-ri -supuestamente clausurada en 2018 como parte del proceso diplomático con EEUU- y advirtieron en varios momentos del año sobre la posibilidad de que Corea del Norte llevara a cabo un nuevo ensayo nuclear, que de producirse sería el séptimo de su historia y el primero desde 2017 (ensayo que, según algunos análisis, fue una bomba de hidrógeno con una potencia muy superior a las de los anteriores ensayos). De hecho, Naciones Unidas afirmó en un informe confidencial filtrado en agosto que Corea del Norte

había realizado preparativos para un ensayo nuclear durante los primeros seis meses de 2022. En la misma línea, a principios de septiembre Corea del Norte promulgó una nueva ley que especifica las condiciones para el despliegue y uso del arsenal nuclear y que estipula que Pyongyang no atacará a los estados no nucleares, excepto si se alían con los estados nucleares, y también que el uso de armas nucleares podría servir para prevenir la expansión o prolongación de una guerra o en respuesta a un ataque contra el país. A pesar de que

la aparente escalada militar de Corea del Norte comportó la imposición de nuevas sanciones por parte de países como EEUU, el Consejo de Seguridad no consiguió aprobar ninguna resolución condenatoria ni nuevas sanciones contra Pyongyang por el veto de China y Rusia.

A principios de año, Corea del Norte acusó a EEUU de enviar armas nucleares estratégicas a la región, avanzó su disposición a reanudar sus actividades armamentísticas suspendidas desde 2017, como el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales, y, solamente en el mes de enero, lanzó casi tantos misiles como en todo el 2021 (incluyendo armas hipersónicas), lo cual comportó la imposición de sanciones por parte de EEUU. En los meses de marzo y abril EEUU impuso nuevas sanciones a Pyongyang por nuevos ensayos armamentísticos (con satélites y misiles balísticos intercontinentales). Durante todo el año, y especialmente tras la toma de posesión del cargo del nuevo presidente surcoreano, Yoon Seok-yeol, EEUU expresó su disposición a reforzar su alianza estratégica con Corea del Sur (y con Japón) y a incrementar sus capacidades disuasorias en la región para hacer frente a la escalada militar por parte de Pyongyang. En este sentido, aunque EEUU descartó públicamente la demanda expresada por Yoon Seokveol de llevar a cabo ejercicios militares conjuntos con armas nucleares, a lo largo del año se llevaron a cabo algunas de las maniobras militares conjuntas entre EEUU y Corea del Sur (que eventualmente incluyeron a Japón) más importantes de los últimos años. Además,

en varias ocasiones a lo largo del año, EEUU y Corea del Sur lanzaron misiles en respuesta al previo lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. Una de las pruebas con misiles balísticos que generaron mayor preocupación en Washington y en otros países fue el lanzamiento en noviembre (y previamente, de manera fallida, en marzo) del misil Hwasong-17, con un recorrido de unos 15.000 quilómetros y, por tanto, con la capacidad de impactar en territorio estadounidense. Sin embargo, algunos analistas albergaban dudas de la capacidad de dichos misiles balísticos intercontinentales de transportar cabezas nucleares hasta su objetivo con precisión. EEUU expresó su preocupación por el discurso de fin de año de Kim Jong-un en el que solicitaba un incremento exponencial de su arsenal nuclear para 2023. Ya en 2021, tras el colapso del diálogo entre el ex presidente Donald Trump y Kim Jong-un y el fin de la aproximación política entre Corea

> del Norte y Corea del Sur, Kim Jong-un ya había anunciado un plan a cinco años vista para modernizar el Ejército y su arsenal, así como para desarrollar nuevas armas.

> Por otra parte, también cabe destacar que durante el año se incrementó la tensión entre Corea del Norte y Japón. A principios de octubre, un misil balístico norcoreano de alcance intermedio sobrevoló Japón por primera vez desde 2017. Más tarde, a principios de noviembre, uno de los 26 misiles que Pyongyang disparó en

dos días consecutivos cayó a 200 km al oeste de la isla japonesa de Hokkaido (norte). Ante tal situación, el Gobierno japonés declaró su disposición a reforzar sus capacidades defensiva y de contraataque, mientras que Washington dejó claro su compromiso con Japón y expresó su voluntad de colaboración con Corea del Sur, Japón y la comunidad internacional para coordinar una respuesta inmediata y a largo plazo a la amenaza que representa el programa armamentístico de Corea del Norte. En esta línea, en la segunda mitad del año Japón participó en ejercicios navales conjuntos con Corea del Sur y EEUU por primera vez desde 2017 y en diciembre presentó públicamente su nueva estrategia de seguridad nacional, que incluye el programa nuclear y balístico de Corea del Norte como amenaza. Por su parte, Pyongyang advirtió que la llamada "capacidad de contraataque" incluida en la nueva estrategia de seguridad nacional de Japón no se refiere al derecho a la legítima defensa de cualquier estado soberano, si no a la capacidad de llevar a cabo un ataque preventivo contra terceros países, lo cual entraña una grave crisis de seguridad en la península de Corea y en Asia oriental en su conjunto. Ante tal escenario, algunos análisis consideraron que el lanzamiento de misiles que crucen el espacio aéreo de un tercer país sin previo aviso ni coordinación -como hizo Corea del Norte en octubre de 2022- no solamente contraviene la legislación internacional, si no que, a la luz de la nueva estrategia de seguridad nacional aprobada por Japón, podría ser interpretado como un ataque en su contra por parte de Tokio.

En todo el año,
Corea del Norte lanzó
alrededor de 95
misiles, varios de ellos
intercontinentales,
una cifra claramente
superior a los ocho
lanzamientos que se
produjeron en 2021 o
a los cuatro del 2020

| Corea, RPD – Rep. de Corea | |
|----------------------------|--------------------------|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Sistema Internacional |
| Actores: | RPD Corea, Rep. de Corea |

Síntesis

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio -por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra- y con el establecimiento de una frontera de facto en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental. Aunque en el año 2000 los líderes de ambos países mantuvieron una reunión histórica en la que acordaron el establecimiento de medidas de confianza, tras la llegada a la presidencia surcoreana de Lee Myungbak en el año 2007 la tensión volvió a incrementarse significativamente y volvieron a producirse algunos enfrentamientos bélicos en la frontera. Posteriormente, la muerte de Kim Jong-il a finales de 2011, sucedido en el cargo por su hijo Kim Jong-un, así como la elección de Park Geun-hye como nueva presidenta surcoreana a finales de 2012, abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

En consonancia con el notable incremento de la tensión internacional acerca del programa armamentístico de Corea del Norte, en 2022 también aumentó considerablemente la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ya en el mes de enero, Pyongyang disparó seis misiles (casi los mismos que en todo el 2021) y declaró la posibilidad de reanudar los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, suspendidos desde 2017. Por su parte, en abril Corea del Sur lanzó dos misiles balísticos lanzados desde submarinos en la costa oriental de la península coreana -la primera prueba de este tipo desde septiembre de 2021- y el ministro de Defensa declaró disponer de la capacidad de alcanzar con precisión cualquier objetivo en Corea del Norte. Tanto Kim Jong-un como su hermana, una de las máximas responsables de la política norcoreana hacia su país vecino, expresaron su disposición a utilizar armas nucleares si Corea del Norte fuera atacada. A pesar de la retórica utilizada por ambos gobiernos en los primeres meses del año, que se enmarca en el deterioro de las relaciones entre ambos países en los últimos años, la elección de Yoon Suk-yeol como nuevo presidente surcoreano en los comicios celebrados en marzo supuso un punto de inflexión importante en el contencioso entre ambos países y un claro distanciamiento de la política exterior de Moon Jae-in, que en varias etapas de su mandato lideró una aproximación hacia Corea del Norte que desembocó en varios acuerdos y en la época de distensión de los últimos años.

Poco después de la toma de posesión del cargo de Yoon Suk-yeol en el mes de mayo, Corea del Sur, conjuntamente con EEUU, dispararon dos misiles en respuesta al lanzamiento por parte de Pyongyang de su misil balístico intercontinental de mayor alcance (Hwasong-17), coincidiendo con un viaje a la región del presidente estadounidense Joe Biden. Pocos días más tarde, a principios de junio, Corea del Sur y EEUU lanzaron ocho misiles en la costa oriental pocas horas después de que Corea del Sur hubiera lanzado ocho misiles balísticos de corto alcance frente a la misma costa. Además, pocos días más tarde, Seúl inició ejercicios militares conjuntos con EEUU y Yoon Suk-yeol pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una respuesta coordinada a lo que tildó de provocaciones por parte de Corea del Sur. Ante tales acciones, varios medios de comunicación señalaron que la nueva administración surcoreana estaba tratando de instaurar una política de reaccionar y responder con proporcionalidad ante cualquier acción armada por parte de Corea del Norte. En esta línea, durante la presentación oficial de su política exterior hacia el país vecino, Yoon Suk-yeol señaló que la desnuclearización de Corea del Norte era un requisito para el avance de la paz y la prosperidad en la región y a la vez también anunció su intención de reforzar las capacidades militares del país, reservándose la posibilidad de incluso llevar a cabo ataques preventivos ante las amenazas y riesgos que entraña el programa nuclear y balístico de Corea del Norte. En línea con el acercamiento estratégico de Seúl a Washington y con su intención de reforzar sus capacidades militares disuasorias, Corea del Sur participó en los ejercicios militares Rim of the Pacific liderados por EEUU (del 29 de junio al 4 de agosto) y, a finales de agosto, Corea del Sur y EEUU llevaron a cabo las mayores maniobras militares conjuntas en años. Igualmente, EEUU y Corea del Sur Ilevaron a cabo nuevos ejercicios militares conjuntos (en algunos de los cuales también participó Japón) a finales de septiembre, coincidiendo con la visita de la vicepresidenta de EEUU Kamala Harris a Seúl y a la frontera intercoreana.

Uno de los momentos de máxima tensión en la península coreana se vivió a finales de octubre, cuando ambos países intercambiaron disparos de advertencia en la Línea Límite Norte (NLL, por sus siglas en inglés), la frontera marítima de facto, en disputa entre ambos países. Según varias fuentes, un barco norcoreano cruzó dicha Línea -que no es reconocida por Pyongyang-, y Corea del Sur disparó varios proyectiles y se adentró varios kilómetros en aguas surcoreanas para garantizar el retorno del buque norcoreano. Ante tal decisión, el Ejército norcoreano habría disparado 10 proyectiles en la costa occidental de la península coreana, cerca de la isla Baengyeong. Poco después, a principios de noviembre, en dos días consecutivos Pyongyang disparó más de 20 misiles -uno de los cuales cayó al sur de la NLL, a pocos quilómetros de la ciudad surcoreana de Sokcho- y unos 100 proyectiles de artillería cerca de frontera marítima, y pocos días más tarde volvió a lanzar varios misiles de corto alcance, así como su misil balístico intercontinental de mayor alcance (Hwasong-17). La tensión volvió a incrementarse nuevamente en diciembre, después de que Corea del Norte consiguiera que cinco de sus drones se adentraran en el espacio aéreo surcoreano -uno de ellos incluso alcanzando el extremo norte de Seúl- y no pudieran ser derribados por aviones y helicópteros que les dispararon numerosos proyectiles. Pocos días antes, el Gobierno norcoreano publicó fotos a gran altitud de las ciudades de Seúl e Incheon y declaró haber lanzado exitosamente un cohete especial como parte del desarrollo de un satélite de reconocimiento militar, una de las prioridades del desarrollo armamentístico del país anunciadas por Kim Jong-un para los próximos años. Finalmente, en su discurso de fin de año, Kim Jong-un tildó a Corea del Sur de enemigo e hizo un llamamiento a incrementar exponencialmente sus capacidades nucleares en 2023. Al día siguiente el presidente surcoreano pidió públicamente que Seúl y Washington intensificaran su colaboración en materia de armamento nuclear, incluyendo la planificación, el intercambio de información, los ejercicios y el entrenamiento.

Sudeste Asiático

| Indonesia (Papúa Occidental) | |
|------------------------------|---|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Autogobierno, Identidad, Recursos Interna |
| Actores: | Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport |

Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los Ilamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

En consonancia con el incremento de la violencia que se ha observado en la región desde que en enero de 2018 el grupo armado OPM declarara la guerra al Gobierno, en 2022 se produjeron numerosos enfrentamientos entre el OPM y las fuerzas de seguridad del Estado y ataques contra población civil, y también se registró un importante

aumento de las protestas por la decisión del Gobierno de crear tres nuevas provincias en Papúa Occidental. Según un informe del centro de investigación IPAC, desde el año 2018 se han incrementado notablemente tanto la frecuencia y letalidad de los enfrentamientos como el alcance territorial y las consecuencias humanitarias del conflicto. Según datos de Naciones Unidas hechos públicos a principios de marzo de 2022, desde el año 2018 entre 60.000 y 100.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares por el incremento de la violencia. Según el centro de investigación ACLED, si en el 2017 se registraron 13 ataques del OPM contra las fuerzas de seguridad del Estado, en 2018 fueron el doble y en 2021 se alcanzaron los 137. En la misma línea, los datos compilados por IPAC muestran que desde 2018, la frecuencia de la violencia aumentó de un promedio de once incidentes por año entre 2010 y 2017 a uno de 52 incidentes por año entre 2018 y 2021. Desde el 2018, se han registrado 183 enfrentamientos entre tropas gubernamentales y combatientes y 74 episodios de violencia contra civiles. Según IPAC, el 66% de las 320 muertes ocasionadas por el conflicto armado entre 2010 y 2021 se registraron entre 2018 y 2021. En dicho periodo, murieron 52 miembros de las fuerzas de seguridad, 34 combatientes y 125 civiles (un incremento sustancial respecto de los 53 civiles que habían muerto entre 2010 y 2017). Según un informe de ACLED publicado en octubre de 2022, desde el año 2018 se ha incrementado notablemente el alcance geográfico del conflicto más allá de los bastiones tradicionales del OPM -el llamado Triángulo Negro, que incluye las regencias de Puncak Jaya. Lanny Jaya y Mimika-, y en los últimos tiempos regiones como las regencias de Intan Jaya, Puncak o Yahukimo también se han visto afectadas por la violencia. Según el Gobierno, en los últimos años el OPM dispone de un arsenal mucho más cuantioso y sofisticado que las armas rudimentarias que había utilizado en las últimas décadas, adquirido gracias a los crecientes ataques a puestos militares o policiales o a la compra de equipamiento procedente de regiones afectadas por la violencia como Ambon (Indonesia), Bougainville (Papúa Nueva Guinea) o Mindanao (Filipinas). El Gobierno acusa al grupo de obtener cuantiosos recursos de la extorsión o de actividades de minería ilegal en varias de las regiones en las que opera. Según el informe de IPAC, la mayor capacidad bélica del OPM se ha traducido en un cambio en su táctica y modus operandi militar, incrementándose la intensidad y duración de los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas con el objetivo de asegurar el control territorial sobre ciertas regiones.

En cuanto a los datos del 2022, según el centro Human Rights Monitor, entre enero y finales de noviembre el conflicto armado había provocado la muerte de 68 personas, una cifra ligeramente superior a la del año anterior. En comparación con el año 2021, la principal diferencia en las dinámicas de violencia fue el claro incremento de ataques del OPM contra población civil. En 2022, 39 de los 43 civiles que murieron en el marco

del conflicto armado lo hicieron por ataques del OPM. Cabe destacar la muerte de ocho trabajadores que reparaban una torre de telecomunicaciones en el distrito de Puncak a principios de marzo, el ataque contra un camión en la población de Nogolai (regencia de Nduga) a mediados de julio en el que 10 civiles murieron y otros dos resultaron heridos, o la muerte de cuatro civiles (y la desaparición de otro) que trabajaban en la construcción de una carretera entre los distritos de Bintuni Bay y Maybrat tras un ataque reivindicado por el OPM. En la mayor parte de este tipo de ataques, el OPM declaró que las víctimas eran espías o informantes del Estado. En los últimos años, en varias ocasiones el OPM ha hecho un llamamiento a la población no papú a abandonar las regiones afectadas por conflicto porque su seguridad no está garantizada. A principios de marzo, los relatores especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas; ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y personas desplazadas internas emitieron un comunicado en el que mostraban su alarma y su condena por las violaciones de los derechos humanos cometidas en los últimos tres años por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como la negación de alimentación y servicios sanitarios adecuados a las personas desplazadas internas. Naciones Unidas también señaló que desde el 2018 habían escrito en más de 10 ocasiones al Gobierno para expresar su preocupación y para solicitar de manera urgente el acceso humanitario a la región y el inicio de investigaciones sobre los abusos cometidos contra la población indígena. A mediados de año el OPM también hizo un llamamiento a Naciones Unidas a intervenir en Papúa por considerar que el Gobierno, al que tilda de colonial, está llevando a cabo crímenes contra la humanidad contra la población local. El Gobierno, por su parte, negó tajantemente tales acusaciones y a la vez criticó a Naciones Unidas por expresar opiniones sesgadas y poco rigurosas. Además, Yakarta declaró que desde finales de 2021 las Fuerzas Armadas están implementado un nuevo enfoque securitario que no contempla solamente las operaciones de contrainsurgencia sino también el desempeño de tareas vinculadas al desarrollo, la educación, la sanidad o la construcción de infraestructuras. Este nuevo enfoque, que según el Gobierno podría comportar la retirada de algunas tropas no orgánicas de Papúa, fue recibido con escepticismo y críticas por parte de varias organizaciones de derechos humanos, pero el Gobierno señaló que desde su implementación en 2022, tanto el número de civiles como el de combatientes del OPM fallecidos en el marco del conflicto han disminuido significativamente respecto del año anterior. A finales de diciembre, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, se mostró partidario de reducir el número de tropas en Papúa, aunque sin dar detalles al respecto y a la vez remarcando la intención del Gobierno de mantenerse firme en su lucha contra el OPM. En el mes de marzo, Amnistía Internacional también criticó el incremento de la violencia y las violaciones de los derechos humanos y pidió revocar el permiso para una nueva mina de oro

en Wabu Block (regencia de Intan Jaya) por considerar que podría agudizar la conflictividad en la región. En la misma línea, el OPM pidió paralizar dicho proyecto y también cerrar la mina de Grasberg, operada por la multinacional estadounidense Freeport McMoRan.

Por otra parte, durante el 2022 se produjeron numerosas protestas en Papúa y en otras partes de Indonesia contra la decisión de Yakarta de revisar y prolongar la Ley de Autonomía especial del año 2011 y también crear tres nuevas provincias en Papúa Nueva Guinea (Papúa Central, Papúa del Sur y Tierras Altas de Papúa Central). El Gobierno sostenía que la nueva división administrativa de la región tenía el objetivo de mejorar la gobernanza y el desarrollo económico en provincias más pequeñas pero que según el OPM y parte de la sociedad civil en Papúa solamente pretendía incrementar el control político y militar del Gobierno sobre la región y debilitar el movimiento secesionista papú. En 2003, poco después de aprobar la Ley de Autonomía Especial, la decisión del Gobierno de dividir la región (entonces denominada Irian Jaya) en dos provincias también provocó protestas.

Pacífico

| Papúa Nueva Guinea | |
|--------------------|---|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | \uparrow |
| Tipología: | Identidad, Recursos, Territorio, Autogobierno Interna |
| Actores: | Gobierno, milicias comunitarias, Gobierno de Bouginville |

Síntesis:

En las últimas décadas, se han registrado altos niveles de tensión y violencia intercomunitaria, clánica y tribal en varias regiones de Papúa Nueva Guinea, un país conformado por más de 600 islas y con una gran diversidad cultural (se hablan más de 850 lenguas). La mayor parte de tal violencia intercomunitaria, que afecta especialmente a provincias como Enga, Hela, Southern Highlands y Western Highlands, está vinculada a conflictos por la tenencia de la tierra -que en un porcentaje muy elevado se regula a través del derecho consuetudinario-, aunque históricamente también se han registrado episodios de violencia relacionados con otras cuestiones, como el control de los recursos, las rivalidades familiares o clánicas o las acusaciones de brujería y magia negra, que han provocado la muerte de decenas de personas. Las tensiones comunitarias se agudizan en periodos electorales (tal y como sucedió en 2022) y cada vez se tornan más letales por el creciente acceso a armas de fuego. Además, las regiones más afectadas por la violencia intercomunitaria se cuentan entre las que sufren mayores tasas de pobreza, menores niveles de educación formal y ausencia y fragilidad de instituciones vinculadas a la seguridad, la aplicación de la ley y el acceso a la justicia o la resolución de conflictos.

Durante el 2022 los numerosos episodios de violencia comunitaria y vinculada a las elecciones del mes de

julio provocaron la muerte de cientos de personas y el desplazamiento de otras decenas de miles. A finales de septiembre, el coordinador residente de Naciones Unidas en el país declaró que estimaba que la violencia relacionada con las elecciones había afectado a 265.000 personas y había provocado el desplazamiento de unas 90.000 personas en la región de Higlands, especialmente en las provincias de Enga, Southern Highlands y Hela. Además, también señaló que unos 25.000 menores se habían quedado sin escolarización y que unas 560.000 personas no tenían acceso (o muy limitado) a servicios sanitarios básicos a causa de la destrucción de infraestructuras, la disrupción de suministros o la huida de personal sanitario. A finales de julio, OCHA declaró que estimaciones no oficiales situaban en más de 300 las personas que habían sido asesinadas desde el mes de mayo en la región de Highlands, la mitad de ellas aproximadamente en la provincia de Enga, advirtiendo sobre la posibilidad de que dicha cifra se incrementara en las semanas siguientes. En las provincias de Enga (especialmente en Porgara) y de Hela (sobre todo en Magarima), cientos de casas fueron destruidas y numerosos edificios públicos incendiados por la violencia sectaria que se desató a mediados de año. Algunos medios de comunicación señalaron que los episodios de violencia atribuibles específicamente a las elecciones nacionales que se llevaron a cabo entre el 4 y el 22 de julio, incluyendo la campaña electoral y el proceso de escrutinio (que se alargó hasta principios de agosto), provocaron la muerte de alrededor de 50 personas. Sin embargo, Naciones Unidas señaló que buena parte de la violencia de matriz comunitaria, tribal o clánica que se registró en la región de Highlands podría tener que ver con motivos no estrictamente electorales -como disputas por tierras-, pero que habrían sido agudizados o acelerados por la inestabilidad y tensión asociados a los comicios. En la localidad de Porgera, por ejemplo, que concentró buena parte de la violencia comunitaria, las tensiones se remontan al cierre de la mina de oro en 2020, que proporcionaba aproximadamente el 10% de las exportaciones del país, pero la violencia estalló precisamente cuando el Ejército custodiaba la retirada de las urnas a finales de julio. Según las autoridades locales, más de 20 clanes de la región se vieron inmersos en enfrentamientos de distinto signo. Durante la espiral de violencia, el Gobierno documentó unos 70 casos de mujeres o niñas que habían sido violadas o secuestradas. Además, en abril, aunque no existen registros oficiales al respecto, Naciones Unidas señaló en el mes de abril que cada año se producen una media de 388 casos de violencia relacionadas con acusaciones de brujería en la región de Highlands. A modo de ejemplo, en la provincia de Enga a finales de julio nueve mujeres tildadas de brujas fueron secuestradas y torturadas, cuatro de las cuales murieron y otras tres quedaron en estado crítico. Aunque en el país ya hay una ley sobre brujería, a principios de año se empezó a tramitar una nueva ley para prevenir y mitigar este fenómeno.

Por otra parte, los enfrentamientos comunitarios a finales de octubre entre los pueblos kulumata y kuboma en la isla de Kiriwina (provincia oriental de Milne Bay) provocaron la muerte de 32 personas y la desaparición de otras 15. A mediados de diciembre, la Policía declaró que 20 personas habían muerto en enfrentamientos comunitarios en la región de Koroba, en la provincia de Hela. En ambos casos, el Gobierno desplegó efectivos policiales adicionales y envió equipos de mediación para tratar de desescalar la tensión y la violencia.

2.3.4. Europa

Europa oriental

| Moldova | |
|-------------|--|
| Intensidad: | 2 |
| Evolución: | \uparrow |
| Tipología: | Gobierno Interna internacionalizada |
| Actores: | Gobierno, oposición política, Rusia |

Síntesis:

Moldova se proclamó república independiente en 1991, en el contexto de disolución de la URSS. Históricamente, su territorio actual a la izquierda del río Dniester formó parte del principado medieval de Moldavia -integrado también por áreas de la actual Rumanía y Ucrania. Atravesó etapas bajo control de diferentes poderes, incluyendo el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, Rumanía y la URSS. Durante la II Guerra Mundial y tras el pacto de no agresión entre la URSS y la Alemania nazi, la Rusia soviética estableció la RSS de Moldova en 1940 (que pasaría a ser una más de las 15 repúblicas socialistas soviéticas que formaron parte de la URSS) uniendo parte de la región histórica de Besarabia y Transnistria -franja territorial al este del río Dniester y anteriormente parte de una región autónoma de la RSS de Ucrania. La actual Moldova, país de 2,6 millones de habitantes y una tasa de pobreza absoluta del 24,5% (2021), es escenario de tensión en diferentes ámbitos entrecruzados. Por una parte, mantiene un conflicto no resuelto en torno al estatus de Transnistria, área de mayoría rusoparlante, independiente de facto desde 1992, apoyada por Rusia y reconocida internacionalmente como parte de Moldova. Por otra parte, el país se ha visto afectado por etapas de inestabilidad y división política, incluyendo en relación a la orientación del país en política exterior, así como por graves problemas de corrupción. Ha mantenido neutralidad respecto a la OTAN, junto a una relación de cooperación con la alianza militar. En diferentes etapas se ha incrementado la tensión entre Rusia y Moldova, incluyendo en la esfera energética, en la que tradicionalmente Moldova ha dependido del gas ruso. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 incrementó la tensión e incertidumbre en la vecina Moldova por los riesgos de extensión del conflicto.

Se incrementó la situación de tensión en Moldova, influida por la invasión de Rusia en Ucrania, con un deterioro del contexto de seguridad, político, social y económico y presiones de Rusia sobre el país en diferentes ámbitos, como el energético. Por una parte, en el ámbito de seguridad, la invasión rusa a Ucrania

generó alerta en país. Ya en febrero el Parlamento de Moldova aprobó la introducción del estado de emergencia, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, prolongado en varias ocasiones -la última en noviembre para otros sesenta días. Se incrementaron los temores por los riesgos de una extensión de la guerra. En abril, el general ruso y vicecomandante del distrito militar central Rustam Minnekáyev declaró que en la segunda fase de la guerra Rusia tenía el objetivo de tomar el control del este y sur de Ucrania, incluyendo la ciudad de Odesa, y llegar hasta Transnistria. Además, a finales de ese mes y en mayo las autoridades autoproclamadas de Transnistria informaron de varias explosiones e incidentes en el territorio bajo su control, sin víctimas.⁴⁸ No obstante, el riesgo de extensión territorial de la guerra se mantuvo en niveles bajos, debido al mantenimiento del control de Odesa por Ucrania, entre otros factores. Las autoridades de Moldova y Transnistria mantuvieron contactos durante el año, descartaron la extensión del conflicto y defendieron una salida negociada. No obstante, la invasión rusa a Ucrania mantuvo la incertidumbre sobre Moldova. En noviembre una investigación periodística señaló que los servicios de seguridad rusos tuvieron órdenes en junio de preparar escenarios de un "segundo frente" en Transnistria y Moldova; y en diciembre el jefe de inteligencia de Moldova también señaló que existía el riesgo de que Rusia intentase en 2023 avanzar militarmente hacia Moldova y establecer un corredor con la región de Transnistria, si bien la agencia de inteligencia moldava matizó después que las declaraciones hacían referencia al análisis de diferentes escenarios que Rusia podría intentar. La proximidad física a Ucrania implicó diversos incidentes de seguridad. Las autoridades moldavas denunciaron en octubre que tres misiles de crucero disparados por Rusia desde el mar Negro y dirigidos contra Ucrania atravesaron el espacio aéreo de Moldova. Además, en varias ocasiones denunciaron que misiles rusos impactaron sobre territorio moldavo.

Se incrementó la tensión también en el ámbito político en los últimos meses del año, de la mano de manifestaciones opositoras, iniciadas en verano y que tomaron mayor envergadura en septiembre y se prolongaron en meses posteriores. Tuvieron lugar principalmente en la capital, Chisinau, organizadas por el partido Shor, con vínculos con Rusia. Los manifestantes reclamaron el fin de las sanciones a Rusia y la dimisión de la presidenta moldava, Maria Sandu, y de su gobierno, de orientación pro-EU. Análisis identificaron en las protestas un intento de Rusia de desestabilizar el país, a través de los vínculos del Kremlin con partidos opositores pro-rusos.

Otro ámbito de tensión fue el energético, esfera en la que Moldova era dependiente del gas ruso (Gazprom) suministrado a través de un gaseoducto de tránsito por Ucrania, así como de la electricidad procedente de Transnistria y, en menor medida, de Ucrania. **Rusia**

redujo su suministro de gas a Moldova y Transnistria en octubre y diciembre -y emitió amenazas en noviembre de paralización de todo el suministro de gas ruso a Moldova si esta no pagaba la deuda de gas acumulada por Transnistria, finalmente no llevadas a cabo. Las autoridades de Moldova lo consideraron un intento de desestabilizar al país. Además, se produjeron apagones en Moldova en noviembre por los bombardeos de Rusia contra la red energética ucraniana. A todo ello se sumó la reducción en octubre e interrupción total en noviembre del suministro eléctrico de Transnistria a Moldova, influida por la reducción del flujo de gas ruso, del cual depende la central eléctrica de Cuciurgan en Transnistria para la producción y suministro de electricidad a la región y a Moldova. En diciembre Chisinau y Tiraspol alcanzaron un acuerdo provisional, por el cual todo el gas ruso importado irá a Transnistria y Transnisitria suministrará electricidad a Moldova a un precio acordado -muy inferior al precio pagado por la alternativa de la electricidad procedente de Rumanía. En paralelo, durante el año Moldova dio pasos para diversificación energética, incluyendo con la sincronización de su red eléctrica con la red continental europea y con la compra de gas del mercado europeo. En conjunto, durante el año la población moldava afrontó una situación socioeconómica compleja, por el alza de precios, incluyendo en los alimentos, productos no alimentarios y servicios, con impactos en la población en un país considerado uno de los más pobres de Europa. Actores internacionales como la UE comprometieron ayuda humanitaria, así como apoyo económico para la diversificación energética. Asimismo, la UE concedió a Moldova en junio el estatus de país candidato a la entrada en la UE, junto a Ucrania. Se intensificaron también los contactos diplomáticos entre actores internacionales y el gobierno moldavo.

Por otra parte, Moldova fue país de tránsito y de destino de población refugiada ucraniana, con 726.705 entradas al país entre el inicio de la invasión (24 de febrero de 2022) y mediados de diciembre, según datos de ACNUR. A fecha 23 de diciembre, había en el país 99.524 personas refugiadas de Ucrania -un 59% eran mujeres, un 48% menores y un 21% población de tercera edad. En una visita en mayo a Moldova, el secretario general de la ONU calificó al país como el país vecino de Ucrania más frágil.

| Moldova (Transnistria) | | |
|------------------------|---|--|
| Intensidad: | 2 | |
| Evolución: | ↑ | |
| Tipología: | Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada | |
| Actores: | Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transdniestria, Rusia | |

^{48.} Véase el resumen sobre Moldova (Transnistria) en este capítulo.

Síntesis:

Transnistria, un territorio de 4.000 km2 y medio millón de habitantes, con mayoría de población rusoparlante, legalmente bajo soberanía de Moldova y de facto independiente, es escenario desde los años noventa de un conflicto no resuelto en torno a su estatus. El conflicto emergió en la etapa final de la URSS, cuando se incrementaron los temores en Transnistria sobre una posible unificación entre una Moldova independiente y Rumanía -ambas con vínculos históricos y culturales-. Transnistria rechazó la soberanía de Moldova y se declaró independiente de esta. Se asistió a una escalada de incidentes, que derivaron en un conflicto armado en 1992. Un acuerdo de alto el fuego ese mismo año puso fin a la guerra y dio paso a un proceso de paz, con mediación internacional. Entre las principales cuestiones en disputa se incluye el estatus del territorio defensa de la integridad estatal y aceptación de un estatus especial para la entidad, por parte de Moldova; y demanda de modelos de amplias competencias, como confederalismo e independencia plena, por parte de Transnistria. Otros ejes de disputa en la negociación incluyen la dimensión cultural y socioeconómica y la presencia militar rusa en Transnistria. La cuestión de Transnistria es uno de los ejes de tensión en un escenario de fragilidad más amplio en Moldova. exrepública soviética, uno de los países más pobres de Europa y afectado por divisiones políticas en el eje pro-UE y pro-Rusia y por problemas históricos de corrupción. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 incrementó la incertidumbre en la región de Transnistria y en el conjunto de Moldova, fronterizas con Ucrania.

Se incrementó la tensión en torno al conflicto entre Moldova y Transnistria, influido por la invasión de Rusia a Ucrania y los riesgos de extensión del conflicto, si bien tanto las autoridades de Moldova como de Transnistria se reafirmaron en su posición de defensa del diálogo como vía de resolución del conflicto en torno al estatus de la región en disputa. Los avances militares de Rusia al sur de Ucrania al inicio de la invasión generaron incertidumbre por los riesgos de una extensión de la invasión y guerra a Transnistria, región fronteriza con Ucrania y en la que Rusia mantiene presencial militar -una parte bajo el paraguas de la fuerza trilateral de mantenimiento de paz integrada por fuerzas de Moldova, Transnistria y Rusia, y otra parte en forma de contingente de fuerzas de Rusia heredero de una unidad militar del Ejército soviético, que permanece en Moldova sin consentimiento de su Gobierno, el cual reclama su salida. Moldova declaró en febrero el estado de emergencia, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Kiev cerró los puestos fronterizos con el territorio de Transnistria. En abril, el general ruso y vicecomandante del distrito militar central Rustam Minnekáyev declaró que en la segunda fase de la guerra Rusia tenía el objetivo de tomar el control del este y sur de Ucrania, incluyendo la ciudad de Odesa, y llegar hasta Transnistria.

A finales de abril las autoridades autoproclamadas de Transnistria informaron de varias explosiones e incidentes en el territorio bajo su control, sin víctimas, incluyendo un ataque con lanzacohetes contra la sede vacía del ministerio del Interior en la capital, Tiraspol; un supuesto ataque contra la base aérea de la localidad; explosiones contra dos antenas de repetición en Maiac e incidentes en Cobasna –localidad que mantiene un

depósito de munición soviética-, que supuestamente involucraron vuelos de drones y disparos. Las autoridades de Transnistria atribuyeron a Ucrania los incidentes, elevaron la situación a "alerta roja" e introdujeron medidas restrictivas, incluyendo de limitación de movimiento de personas e incremento de puestos de control. La primera ministra de Moldova, Natalia Gavrilita, calificó los incidentes de seguridad de acciones de provocación en Transnistria dirigidas a desestabilizar la región. La presidenta del país, Maria Sandu, atribuyó los incidentes a facciones pro-guerra, sin especificar detalles, pero descartó que hubiera riesgos inmediatos de extensión a Moldova del conflicto de Ucrania, al menos al territorio bajo control del Gobierno. El ministerio de Defensa de Ucrania atribuyó las acciones al servicio de seguridad de Rusia. En mayo Tiraspol informó de nuevos ataques, contra una comisaría militar y contra un depósito de petróleo. Pese al incremento de la tensión, las autoridades de Moldova y Transnistria mantuvieron contactos y realizaron declaraciones en que descartaban la extensión de la violencia armada y la opción de la guerra y defendían una salida pacífica al conflicto. Se produjeron diversas reuniones durante el año al nivel de altos representantes políticos de Moldova y Transnistria -el viceprimer ministro y ministro de Reintegración de Moldavia, Oleg Serebrian, y el negociador jefe de Transnistria Vitaly Ignatiev-, en las que también participaron representantes del formato negociador 5+2. No se produjeron grandes acuerdos en el proceso, pero sí se logró mantener un grado fluido de interlocución en un año de gran incertidumbre por la guerra en Ucrania. En conjunto, el mantenimiento del control de la región de Odesa en Ucrania por las fuerzas ucranianas redujo los riesgos de extensión militar del conflicto en el país vecino a la región de Transnistria. Analistas también señalaron otros factores que reducían el riesgo, como el elevado grado de integración comercial de Transnistria con Moldova y con Europa, entre otros. Pese a ello, continuó hasta final de año la situación de tensión y de incertidumbre. En noviembre una investigación periodística señaló que los servicios de seguridad rusos recibieron órdenes en junio de preparar escenarios de un "segundo frente" en Transnisitria y Moldova; y en diciembre el jefe de inteligencia de Moldova también señaló que existía el riesgo de que Rusia intentase en 2023 avanzar militarmente hacia Moldova v establecer un corredor con la región de Transnistria, si bien la agencia de inteligencia moldava matizó después que las declaraciones hacían referencia al análisis de diferentes escenarios que Rusia podría intentar. Otro de los ejes de tensión fue la cuestión energética, en un contexto de dependencia de Moldova del gas ruso y de la electricidad procedente en su mayoría de Transnistria y en menor medida de Ucrania. Rusia redujo su suministro de gas a Moldova y Transnistria en octubre y diciembre -y emitió amenazas en noviembre de paralización de todo el suministro de gas ruso a Moldova si no pagaba la deuda de gas acumulada por Transnistria, finalmente no llevadas a cabo. Las autoridades de Moldova lo consideraron un intento de desestabilizar al país. La reducción de gas también tuvo impactos económicos

negativos en Transnistria, que decretó en octubre el estado de emergencia económica. Además, se produjeron apagones en Moldova en noviembre por los bombardeos de Rusia contra la red energética ucraniana. A todo ello se sumó la reducción en octubre e interrupción total en noviembre del suministro eléctrico de Transnistria a Moldova, influida por la reducción del flujo de gas ruso, del cual depende la central eléctrica de Cuciurgan en Transnistria para la producción y suministro de electricidad a la región y a Moldova. En diciembre Chisinau y Tiraspol alcanzaron un acuerdo provisional, por el cual todo el gas ruso importado irá a Transnistria y Transnistria suministrará electricidad a Moldova a un precio acordado -muy inferior al precio pagado por la alternativa de la electricidad procedente de Rumanía. En conjunto, el conflicto entre Moldova y Transnistria transcurrió en 2022 en un contexto de tensión en el conjunto de Moldova, donde a finales de año seguía en vigor el estado de emergencia decretado en febrero.⁴⁹

Rusia y Cáucaso

| Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) | |
|--|--|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional |
| Actores: | Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Turquía |

Síntesis:

El conflicto entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto- está asociado a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Este comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre esta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego. Desde el alto el fuego de 1994 ha habido diversas escaladas de violencia, como en 2016 con varios centenares de víctimas mortales. La guerra se reabrió en septiembre de 2020. En torno a 6.800 militares de ambos países murieron o desaparecieron, varios cientos de civiles murieron y unos 91.000 armenios y 84.000 azerbaiyanos se desplazaron. En noviembre de ese año las partes alcanzaron un acuerdo que puso fin a la guerra y que supuso un cambio total del statu quo (control por Azerbaiyán de los distritos adyacentes a Nagorno-Karabaj, así como de una parte de Nagorno-Karabaj y despliegue de fuerzas rusas de mantenimiento de la paz), pero que dejaba irresuelto el estatus político de Nagorno-Karabaj.

La situación entre Armenia y Azerbaiyán y en torno al enclave en disputa de Nagorno-Karabaj fue de fragilidad, con una nueva escalada de violencia de la mano de una ofensiva militar aérea de Azerbaiyán contra zonas de Armenia en el centro y sur de la frontera, que causó más de 280 víctimas mortales y medio millar de heridos. Si bien se produjeron contactos diplomáticos y cierto acertamiento en la primera mitad del año, con el establecimiento de comisiones para la demarcación fronteriza entre ambos países y compromiso de avanzar hacia un acuerdo de paz,1 en la práctica la situación continuó tensa. Durante el año Azerbaiyán afirmó su soberanía sobre la región y la condición de ciudadanos de Azerbaiyán de la población armenia de la región y descartó abordar la situación de la población armenia en la región con ningún actor internacional ni con Armenia. Asimismo, durante el año se produjeron incidentes de seguridad tanto en Nagorno-Karabaj como en la frontera interestatal y operaciones militares de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj y en Armenia. Bakú llevó a cabo operaciones y ataques militares que resultaron en la toma de control de algunas áreas de Nagorno-Karabaj y de Armenia, como en marzo, agosto y septiembre. La ofensiva aérea del Ejército azerbaiyano en septiembre contra zonas de Armenia en el centro y sur de la frontera resultó en la escalada interestatal más mortífera desde la guerra de 2020, con 207 soldados armenios y otros 80 azerbaiyanos fallecidos, varías víctimas mortales civiles, decenas de civiles heridos y el desplazamiento de más de 2.700 civiles armenios, entre otros impactos. Armenia y Azerbaiyán anunciaron un alto el fuego el 14 de septiembre, tras una tregua anterior fallida promovida por Rusia y llamadas internacionales a un alto el fuego y a retomar las negociaciones. Pashinián había expresado su disposición a alcanzar un acuerdo con Azerbaiyán si Bakú reconocía la integridad territorial de Armenia, incluyendo las áreas de Armenia tomadas por Bakú en 2021 y 2022, que cifró en 50 km2, y señalando que Armenia a su vez reconocería la integridad territorial de Azerbaiyán. Tras su anuncio se produjeron protestas ciudadanas –algunos miles de personas, según algunos medios- contra Pashinián en la capital armenia, Ereván, así como en la capital de Nagorno-Karabaj, Stepanakert, y en Gyumri, contra lo que se percibía como concesiones. La escalada militar y tregua de septiembre fueron seguidas de nuevos movimientos diplomáticos, con llamamientos internacionales al diálogo. Las partes alcanzaron un acuerdo en octubre para el despliegue de una misión civil de observación de la UE en el lado armenio de la frontera internacional y se comprometieron con el reconocimiento mutuo de la integridad territorial y la soberanía, en base a la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Almá Atá de 1991. La misión se desplegó el 20 de octubre y finalizó en diciembre. Miles de personas -40.000 según las autoridades locales- se manifestaron el 30 de octubre en la capital de Nagorno-Karabaj, Stepanakert, en rechazo a la posibilidad de que la región pase a estar bajo control de Azerbaiyán. El Parlamento de Nagorno-Karabaj, organizador de la protesta, aprobó ese mismo día una declaración en defensa de la soberanía de la región y de su derecho a la autodeterminación y contraria a cualquier documento o propuesta que lo cuestionase.

La cuestión del corredor de Lachin, única vía que conecta Nagorno-Karabaj y Armenia, fue elemento de tensión y discusión durante el año. En agosto Bakú anunció que ya había finalizado su tramo de la nueva ruta que, según el acuerdo de 2020 de fin de hostilidades, sustituirá al corredor de Lachin, y acusó a Ereván de dilación en su tramo. Además de incidentes agosto y evacuación de población de localidades en torno al corredor, a finales de año escaló la tensión a causa del bloqueo en diciembre del corredor por manifestantes azerbaiyanos contrarios a la actividad minera en la región. El bloqueo obstaculizó acceso a bienes básicos y generó riesgo de emergencia humanitaria. Actores internacionales como EEUU, la UE y el secretario general de la ONU llamaron a su apertura. Al finalizar el año el corredor seguía bloqueado.

Sudeste de Europa

| Serbia – Kosovo | |
|-----------------|---|
| Intensidad: | 2 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Autogobierno, Identidad, Gobierno Internacional ⁵⁰ |
| Actores: | Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX |

Síntesis:

La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN contra este último, tras años de represión del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo aislacionismo fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden los problemas internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta del enviado especial de la ONU. En 2008, el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población serbia de Kosovo y por Serbia.

Se incrementó la tensión entre Serbia y Kosovo en torno a cuestiones en disputa como el reconocimiento de matrículas de vehículos, que llevó a incidentes de seguridad, cierre de frontera y disposición de tropas en máxima alerta por parte de Serbia. Uno de los principales desafíos que afrontó el proceso durante el año fue la disputa en torno a medidas de reciprocidad sobre matrículas de vehículos y tarjetas de identidad. El pacto provisional de 2021 en relación a las matrículas expiró en abril de 2022. Ambas cuestiones fueron abordadas durante el año en el proceso negociador facilitado por la UE.51 A finales de junio el Gobierno kosovar anunció que pasaba a exigir matrículas kosovares a partir del 30 de septiembre, así como también documentos temporales de identidad expedidos por Pristina a la población con identificación de Serbia que entrase en Kosovo, a partir de agosto. El anuncio recibió fuertes críticas de Serbia y de representantes serbokosovares y fue seguido de barricadas e incidentes violentos en varios días. En las protestas participaron individuos armados, señalado como un elemento de alarma en el informe del secretario general de la ONU. El Gobierno kosovar responsabilizó al serbio de los bloqueos y las protestas. En medio de llamamientos internacionales, Pristina pospuso la implementación de la medida de los documentos de identificación al 1 de septiembre. A finales de agosto las partes llegaron a un acuerdo sobre libertad de movimiento de personas.52 En cambio, se prolongó la disputa sobre la cuestión de las matrículas. Tras un aplazamiento hasta finales de octubre por parte de Kosovo de la entrada en vigor de la medida y tras nuevos incidentes de violencia, Kosovo optó por una medida por plazos, con un periodo de aviso a conductores hasta el 21 de noviembre de 2022 y entrada en vigor de la totalidad de la medida en abril de 2023.

Pese al acuerdo de noviembre continuó la tensión en el norte de Kosovo. Varios centenares de personas incluyendo políticos, alcaldes. funcionarios parlamentarios serbokosovares dimitieron ese mes de sus cargos en las municipalidades serbokosovares del norte de Kosovo y del Parlamento de Kosovo, denunciando incumplimiento de los acuerdos entre Serbia y Kosovo facilitados por la UE. Además, la dimisión en masa siguió a la suspensión de un director regional del servicio de la Policía del norte de Kosovo que había llamado a desobedecer al Gobierno kosovar en relación a la medida de las matrículas. Tras la renuncia colectiva, el Gobierno kosovar tenía previsto celebrar en diciembre elecciones municipales anticipadas en el norte de Kosovo, rechazadas por el principal partido serbio de Kosovo, Srpska Lista. Se produjeron algunos incidentes violentos contra instalaciones electorales y colocación de barricadas en protesta por la detención de un policía serbokosovar por supuestos vínculos con uno de los ataques. El Gobierno kosovar anunció finalmente la postergación de las elecciones a abril de 2023. No

^{50.} La tensión entre Kosovo y Serbia se considera "internacional" ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

^{51.} Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2023.

^{52.} Véase, Escola de Cultura de Pau, Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios, Barcelona: Icaria, 2023.

obstante, continuó la tensión hasta final de año, con la prolongación de las barricadas en seis localidades del norte de Kosovo. Serbia solicitó a la OTAN que le autorizase a desplegar un millar de efectivos propios de Serbia en Kosovo -solicitud rechazada posteriormente por la organización militar— y ordenó a su propio Ejército pasar a situación del "más alto nivel de preparación para el combate". A su vez, Kosovo cerró tres pasos fronterizos por el bloqueo de carreteras causado por las barricadas. Se produjeron nuevos contactos diplomáticos. A finales de diciembre, Serbia anunció la retirada de las barricadas y la desactivación de la orden de máxima alerta al Ejército. El policía cuya detención por Kosovo desencadenó parte de las protestas pasó a situación de arresto domiciliario. Además, Kosovo afirmó que no existían listas de ciudadanos serbokosovares a arrestar o enjuiciar por las protestas y la instalación de barricadas. Su eliminación -si existían- había sido una de las demandas serbokosovares. Por otra parte, durante 2022 la tensión involucró otras cuestiones, como la negativa de Kosovo a facilitar el ejercicio de voto dentro de Kosovo a la población serbokosovar con doble nacionalidad en el referéndum constitucional de Serbia de mediados de enero y en las elecciones generales de abril. Abandonó así su política anterior de permitir a la OSCE la facilitación del voto en su territorio. En paralelo, y en un año de incremento de la tensión en todo el continente por la invasión de Rusia contra Ucrania, actores internacionales instaron a Kosovo y Serbia a avanzar en la normalización de relaciones a través de una propuesta franco-alemana. A su vez, Kosovo solicitó formalmente en diciembre su entrada a la UE.

2.3.5. Oriente Medio

Golfo

| Irán | |
|-------------|---------------------------------------|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | ↑ |
| Tipología: | Gobierno Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social |

Síntesis:

La tensión se enmarca en un contexto político caracterizado por la polarización, desde hace décadas, entre sectores conservadores y reformistas en Irán, y por el papel clave que juegan las autoridades religiosas y los cuerpos armados –en particular la Guardia Republicana– en el devenir de Irán. La tensión interna se agudizó a mediados de 2009, cuando Ahmadinejad fue reelecto en unos comicios denunciados como fraudulentos por la oposición que motivaron las mayores protestas populares en el país desde la revolución islámica de 1979. El fin de los dos mandatos consecutivos

de Ahmadinejad y la llegada al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani en 2013 parecieron abrir una nueva etapa en el país, despertando expectativas respecto a una posible reducción de la tensión política interna y sobre un eventual cambio en las relaciones de Irán con el exterior. No obstante, las tensiones internas persistieron. Movimientos de protesta recientes, en especial en 2019 y 2022, han evidenciado el malestar político y social en la población iraní y han sido duramente reprimidos por el régimen.

La tensión en Irán escaló durante el último cuatrimestre del año, cuando se activaron nuevas movilizaciones populares contra las autoridades en el marco de un movimiento de contestación que ha sido considerado como uno de los mayores desafíos al régimen teocrático desde 1979. El detonante de las protestas fue la muerte en septiembre de una joven kurda, Mahsa Jîna Amini, mientras permanecía en custodia policial, tras haber sido detenida por llevar el hijab (velo que cubre la cabeza) de manera inapropiada según los estándares del régimen. Su muerte -que Teherán justificó alegando una condición médica previa, pero que fue atribuida a maltratos por las fuerzas de seguridadderivó en masivas movilizaciones que se multiplicaron por el país. Hasta principios de diciembre se habían contabilizado más de 1.600 manifestaciones, que contaron con un alto protagonismo de las mujeres y que pusieron sus derechos y libertades en el centro de las reivindicaciones.53 Las protestas contaron con un apoyo transversal e hicieron patentes agravios y demandas más amplias en ámbitos múltiples -social, político, económico y de género, entre otros. Como en ocasiones anteriores, en particular las protestas de 2019, el régimen optó por una dura represión para sofocar el movimiento a través de la acción de los cuerpos de seguridad y de las milicias Basij. Al finalizar el año, diversos balances apuntaban a que cerca de 500 personas habían fallecido por la represión, entre ellas un centenar de mujeres. Unos 60 miembros de las fuerzas de seguridad fallecieron también en incidentes tras el inicio de las protestas. Otras miles de personas habrían resultado heridas en el marco de la campaña represiva del régimen, en la que se observó un uso excesivo de la fuerza y un uso de la violencia de género, por ejemplo, a través de disparos a las mujeres que buscaban dañar deliberadamente su rostro y genitales. Hasta finales de 2022, miles de personas -más de 20.000 según algunas fuentesfueron detenidas y algunas de ellas sometidas a juicios sin el debido proceso, según denunciaron ONG de derechos humanos. Las sanciones incluyeron condenas a muerte y la primera ejecución de un participante en las movilizaciones se produjo a principios de diciembre. Grupos de derechos humanos alertaron que la represión afectó desproporcionadamente a menores de edad. Se estimaba que hasta finales de 2022 al menos 58 -46 niños y 12 niñas- habían

^{53.} Para más información, véase Pamela Urrutia, La revuelta de las mujeres en Irán: ¿un punto de inflexión? Claves desde el análisis de conflictos con perspectiva feminista, *Apunts ECP de Conflictes i Pau*, No.27, marzo de 2023.

muerto en acciones de las fuerzas de seguridad desde septiembre y se denunció que muchos menores habían sido detenidos en redadas llevadas a cabo incluso en escuelas. A partir de noviembre, también se denunciaron casos de envenenamiento de niñas en escuelas. El régimen también adoptó medidas para intentar impedir o silenciar las protestas, a través de cortes de electricidad, de internet y amenazas a quienes dieran sus testimonios a la prensa.

La contestación popular se produjo en un contexto de acumulación de agravios y de incremento del descontento social por medidas adoptadas por el Gobierno de Ebrahim Raisi, del ala más conservadora, que llegó al poder a mediados de 2021. Desde antes de la muerte de Amini se venía denunciando una intensificación de la represión contra dirigentes sociales y estudiantiles, un refuerzo de la llamada "policía moral" y mayores medidas de control y vigilancia del código de vestuario de las mujeres. Protestas en mayo de 2022 en varias provincias del país por la situación económica y los recortes en subsidios ya habían provocado la muerte de al menos cinco manifestantes en mayo. Cabe destacar que tras la muerte de Amini la represión de las movilizaciones fue especialmente intensa en las áreas habitadas por minorías étnico-religiosas -sobre todo en áreas kurdas y baluchis- donde las movilizaciones reflejaron también la desafección hacia el régimen tras décadas de medidas discriminatorias y políticas que limitan sus derechos culturales y políticos. La ciudad de Zahedan, en Sistán Baluchistán, fue escenario de la peor jornada desde el inicio de las movilizaciones, con más de 90 muerte el 30 de septiembre tras las movilizaciones en solidaridad con las protestas en el resto del país y manifestaciones locales por la violación de una menor por parte de un alto mando policial. Según grupos de derechos humanos, 60% de los menores fallecidos desde el inicio de las movilizaciones eran kurdos o baluchis. Teherán -que atribuyó la contestación interna a una acción orquestada desde el extranjero- también lanzó varias acciones de represalia contra grupos kurdos con base en la Región Autónoma Kurda del norte de Iraq, en particular contra el KDPI y Komala que en el pasado protagonizaron luchas contra las políticas centralistas y homogeneizadoras del régimen. En estas ofensivas habrían muerto al menos 16 personas y decenas habrían resultado heridas, según informaciones de prensa.

| Irán – EEUU, Israel ⁵⁴ | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Intensidad: | 3 |
| Evolución: | = |
| Tipología: | Sistema, Gobierno Internacional |
| Actores: | Irán, EEUU, Israel |

Síntesis:

Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Jomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del "eje del mal" y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015. En los últimos años la retirada de EEUU del acuerdo en 2018 y la intensificación de su política de sanciones, el progresivo alejamiento de Irán de los compromisos adquiridos en el acuerdo y un convulso contexto regional han agravado la tensión y dificultaban la búsqueda de una salida a esta disputa.

La tensión en torno al programa nuclear iraní se mantuvo elevada durante 2022, en un contexto de negociaciones oscilantes y una tendencia general de bloqueo en los intentos por restablecer el pleno cumplimiento del acuerdo de 2015 (conocido como JCPOA, por sus siglas en inglés). Además de los intercambios de amenazas y de los incidentes de seguridad -que involucraron principalmente a fuerzas de Irán, EEUU e Israel-, el proceso negociador se vio influido durante el año por otros acontecimientos, entre los que destacaron las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania en el escenario global y el impacto de la represión por parte de Teherán de una nueva oleada de contestación interna. El año se inició con ciertas expectativas dada la reanudación de las negociaciones del proceso de Viena en el último trimestre de 2021. El proceso diplomático consiguió algunos avances relevantes en el acercamiento de posiciones durante los primeros meses del 2022, pero la actividad negociadora se vio frenada y bloqueada por el impacto de la invasión rusa sobre Ucrania y el consiguiente incremento de tensiones a nivel internacional. Los contactos entre las partes que permanecían adheridas al pacto y conversaciones indirectas entre Irán y EEUU –que se retiró del acuerdo en 2018 durante el gobierno de Donald Trump- se reactivaron hacia mediados de año, bajo la mediación de la UE, pero no desembocaron en acuerdos. Tras el inicio de las movilizaciones populares en Irán y la respuesta represiva del régimen, los contactos volvieron a dificultarse. Según trascendió, los principales puntos de desacuerdo de las negociaciones tenían que ver con las sanciones impuestas a la república islámica

^{54.} Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

y, en particular, con la designación de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) como organización terrorista por parte de EEUU en 2019 – Teherán exige el fin de esta medida, Washington plantea condiciones. Irán insistía en que no reducirá sus reservas de uranio hasta que se levanten las sanciones, mientras que la Casa Blanca demandaba una disminución como condición previa. Ambos países no se ponían de acuerdo en qué sanciones deben retirarse ni en la duración de un nuevo acuerdo. Teherán deseaba garantías de que el pacto durará y no será revertido por un nuevo gobierno en EEUU. Irán también deseaba que se ponga una fecha límite a la investigación del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) en el país.

En este contexto, en noviembre el Consejo de Gobierno de la OIEA aprobó una resolución que reprobaba a Irán por su falta de colaboración en las investigaciones sobre actividades nucleares pasadas y sitios no declarados. Como respuesta, el Gobierno iraní intensificó sus actividades atómicas y comenzó a enriquecer uranio al 60%, un nivel justo por debajo de lo necesario para producir armas nucleares y muy por sobre del límite de 3,67% establecido en el acuerdo nuclear. Previamente, la OIEA había alertado que Irán ya había acumulado 62,3 kilos de uranio enriquecido al 60% y que sus tareas de verificación y monitoreo se habían visto severamente afectadas por la decisión de Teherán de desmontar los aparatos instalados para la vigilancia y supervisión del JCPOA. El secretario general de la ONU hizo entonces un llamamiento a Irán a revertir los pasos que le habían alejado de la implementación del acuerdo desde mediados de 2019. En paralelo a las tensiones en el plano diplomático, durante el año continuaron haciéndose evidentes las fricciones en una serie de incidentes. Por un lado, algunos intercambios de fuego entre fuerzas de EEUU e Irán en hechos ocurridos en Iraq y Siria, sobre todo a principios de año, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte del general iraní Qassem Soleimani a manos de un ataque estadounidense en Bagdad. En agosto, EEUU advirtió sobre las consecuencias que tendría un ataque iraní contra ciudadanos de su país, tras la detención de un presunto miembro de la IRGC involucrado en un complot para asesinar al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton. Durante el año, Irán y EEUU intercambiaron advertencias y amenazas; y también se produjeron algunos episodios de tensión en el espacio marítimo entre naves de ambos países, en el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz. Ambos países también aprobaron nuevas sanciones. Irán también intercambió amenazas con Israel, que perpetró varios ataques contra objetivos iraníes en Siria.55 A lo largo del año, Teherán anunció el desmantelamiento de una presunta red de espías colaboradores con Israel que planeaba actos de sabotaje en las instalaciones nucleares de Fordow (marzo) y de otro supuesto grupo de colaboradores con el Mossad (julio). Las muertes

en extrañas circunstancias de un general y otros tres individuos en una instalación militar aeroespacial iraní (junio) también se vincularon a las hostilidades entre Irán e Israel. Durante la visita del presidente de EEUU a Israel en julio, ambos países emitieron una declaración conjunta reiterando su compromiso para no permitir que Irán desarrolle un arma nuclear. El gobierno israelí enfatizó entonces que la única manera de disuadir a Teherán era mantener una amenaza militar creíble sobre la república islámica. Al finalizar el año, las relaciones de Irán con el exterior también se vieron afectadas por las acusaciones por parte de países occidentales a Irán por su responsabilidad en la transferencia de armas -en concreto, vehículos aéreos no tripulados- a Rusia para su invasión de Ucrania y en vulneración de la resolución 2331 de Naciones Unidas que en 2015 sirvió para respaldar el acuerdo nuclear (JCPOA).

Mashreq

| Egipto | |
|-------------|---------------------------------------|
| Intensidad: | 2 |
| Evolución: | = |
| Tipología: | Gobierno Interna |
| Actores: | Gobierno, oposición política y social |

Síntesis:

En el marco de las llamadas "revueltas árabes", las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas, Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

En 2022 el Gobierno egipcio continuó siendo objeto de críticas y denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos por su persistente campaña de represión y silenciamiento a las voces disidentes y la comisión de diversas vulneraciones de derechos

^{55.} Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

humanos. Las autoridades promovieron algunas medidas, consideradas simbólicas o cosméticas por observadores críticos, que se interpretaron como intentos por apaciguar los cuestionamientos internacionales, en especial en vísperas de la celebración de la conferencia anual global sobre cambio climático (COP27) en el balneario egipcio de Sharm el Sheikhen noviembre.⁵⁶ Así, por ejemplo, se liberó a cientos de prisioneros en el transcurso del año, pero muchos de ellos volvieron a ser arrestados y, además, se produjeron numerosas nuevas detenciones. Amnistía Internacional indicó que antes de la COP27 las autoridades excarcelaron a 897 personas detenidas por motivos políticos, pero arrestaron a casi el triple, incluyendo a cientos de activistas que hicieron llamamientos a manifestarse durante el encuentro internacional. Miles de personas percibidas como opositoras o críticas al gobierno permanecían detenidas al finalizar el año -algunas estimaciones apuntan a unas 60.000-, entre ellas más de una veintena de periodistas arrestados de manera arbitraria y acusados de cargos como difusión de "noticias falsas", mal uso de las redes sociales o terrorismo. Personas vinculadas a la oposición islamista y otras voces disidentes, como el excandidato presidencial Abdelmoniem Aboulfotoh fueron condenados por cargos similares en procesos denunciados por sus irregularidades y motivación política. Las autoridades también detuvieron y sometieron a persecución y acoso a numerosos activistas de derechos humanos. En enero, la Arab Network for Human Rights Information (ANRHI), una de las organizaciones referentes del país en materia de derechos humanos, anunció su cierre tras 18 años de trayectoria tras amenazas, ataques y arrestos por la Agencia de Seguridad Nacional y ante el inminente cumplimiento del plazo (en abril) para registrarse como ONG bajo una draconiana ley de asociaciones aprobada por el Gobierno en 2019. En paralelo, continuaron produciéndose muertes de personas bajo custodia policial en circunstancias sospechosas y sin investigaciones adecuadas pese a los indicios de torturas y/o falta de asistencia. Las fuerzas de seguridad también fueron señaladas por someter a cientos de personas detenidas a desapariciones forzadas, algunas durante meses, y persistieron las denuncias sobre torturas y tratos crueles en prisiones, estaciones de policía e instalaciones de la Agencia de Seguridad Nacional. En un informe conjunto divulgado en abril, las ONG Egyptian Front for Human Rights y Freedom Initiative denunciaron el uso sistemático de la violencia sexual para torturar a mujeres, hombres y personas trans por parte de fuerzas de seguridad y prisiones. ONG internacionales de derechos humanos también insistieron en denunciar las condenas a muerte y ejecuciones de personas tras juicios sin garantías.

El **Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi**, que en septiembre de 2021 lanzó una estrategia nacional de derechos

humanos y declaró 2022 como "el año de la sociedad civil", hizo un llamamiento en abril a un diálogo nacional con sectores de la oposición política. Aunque durante el año se informó de diversas acciones preparatorias, hasta finalizar 2022 la iniciativa no se había lanzado formalmente. El secretariado responsable de su impulso acordó abrir el diálogo a todas las fuerzas políticas y sociales del país, a excepción de miembros de los Hermanos Musulmanes, y excluyó posibles reformas a la Constitución como resultado de las conversaciones. El trabajo de este diálogo nacional se articulará en torno a tres ámbitos -político, económico y social- y resultará en recomendaciones no vinculantes, que se enviarán al presidente al-Sisi para que decida cuáles serán adoptadas. Sectores de la oposición política, de la sociedad civil y observadores externos expresaron su escepticismo ante la posibilidad de que esta iniciativa supusiera el inicio de reformas genuinas o el abordaje de la crisis de derechos humanos en el país.57. Hasta fines de 2022, el opositor Movimiento Civil Democrático -coalición que reúne a una docena de partidos seculares dispuestos a participar- condicionaba su implicación a la excarcelación de más de un millar de personas. A nivel de opinión pública, una de las principales preocupaciones era la situación económica, dado el grave impacto en el país de la guerra en Ucrania. Cabe destacar que, pese a las denuncias sobre la situación de derechos humanos en Egipto, países como Francia, Italia o EEUU continuaron vendiendo armas al país norteafricano. En el caso de Washington, en enero se anunció una venta de armas por 2.500 millones de dólares. No obstante, al mismo tiempo, a lo largo de 2022, se mantuvo la decisión de retener 130 millones de los 300 millones de dólares en ayuda militar a Egipto aprobados en 2021, condicionados a progresos en materia de derechos humanos. En octubre, el Congreso estadounidense elevó esta cifra en 75 millones de dólares. En noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena por la situación de derechos humanos en la que instó a una revisión profunda de las relaciones de la UE con el país. Legisladores europeos también interpelaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que investigue la situación en el país.

| Israel – Siria – Líbano | | |
|-------------------------|---|--|
| Intensidad: | 3 | |
| Evolución: | = | |
| Tipología: | Sistema, Recursos, Territorio Internacional | |
| Actores: | Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán | |

Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelípalestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que

^{56.} Para más información, véase Pamela Urrutia, Emergencia climática y conflictos: retos para la paz en la región MENA, *Apunts ECP de Conflictes i Pau*, No.22, diciembre de 2022.

^{57.} Khaled Dawoud, "Egyptian 'national dialogue' will kick off amid difficult domestic situation", Middle East Institute, 20 de octubre de 2022.

se establecieron en Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

La tensión de décadas entre Israel, Siria y Líbano —que en los últimos años se ha visto influida por el conflicto armado en Siria— continuó motivando periódicos hechos de violencia con un balance de víctimas difícil de precisar. Como en años previos, a lo largo de 2022 se informó de diversas ofensivas israelíes en territorio

sirio que tuvieron como objetivo bases del régimen sirio y fuerzas vinculadas a Irán y Hezbollah. Estos ataques se produjeron en varios puntos de Siria, incluyendo los aeropuertos de Damasco y Alepo, y habrían dejado al menos unos 25 militares fallecidos, además de un civil y de causar heridas a numerosas personas. Medios israelíes justificaron algunas de estas ofensivas asegurando que pretendían evitar la transferencia de armas de Irán a Hezbollah. El líder de Hezbollah aseguró

en febrero que su organización estaba produciendo aviones no tripulados y que con ayuda de Irán en breve sería capaz de transformarlos en cohetes guiados de precisión. Ese mismo mes Israel informó que había derribado un dron de Hezbollah que había accedido a su espacio aéreo. Los informes periódicos de la ONU sobre la implementación de la resolución 1701 –que puso fin al conflicto armado de 2006- reiteraron las continuas vulneraciones del espacio aéreo libanés por parte de las fuerzas de Israel, centenares a lo largo del año. A finales de año un ataque a un convoy de la misión de la ONU en Líbano, UNIFIL, provocó la muerte de un soldado y heridas a otros tres en la localidad Al-Aaqbya, al sur del país. La ONU constató en sus informes que a lo largo de 2022 no se había avanzado en un acuerdo de cese el fuego permanente entre Líbano e Israel.

Uno de los focos de mayor tensión y expectativas durante el año estuvo relacionado con la demarcación de la frontera marítima entre Líbano e Israel. En junio, la llegada de una embarcación al borde marítimo para preparar las instalaciones destinadas a la extracción de gas para Israel desde el yacimiento de Karish, motivó

que el presidente libanés, Michel Aaoun, advirtiera que cualquier actividad en las áreas en disputa mientras continuaban las negociaciones entre ambos países constituía una provocación y un acto hostil. Ministros israelíes aseguraron que la prioridad era la protección de intereses estratégicos y que su país estaba preparado para defenderlos. El líder de Hezbollah llamó a todas las fuerzas políticas libanesas a unirse en la defensa de sus recursos marítimos y amenazó con atacar las infraestructuras de gas israelíes si comenzaban a extraerlo antes del acuerdo de demarcación. En julio, el grupo libanés lanzó varios drones sobre Karish que fueron interceptados por Israel. Dos días más tarde, el primer ministro libanés advirtió que las interferencias de actores no estatales en las negociaciones sometían a Líbano a riesgos innecesarios. Pese a ello, Nasrallah insistió en un ataque armado si la disputa no se resolvía en septiembre, fecha en que Israel tenía previsto iniciar la explotación de gas.58 Finalmente, después de años de mediación intermitente de EEUU, en octubre Líbano

e Israel alcanzaron un acuerdo para la demarcación de su frontera marítima. El pacto, suscrito tras diversas gestiones del enviado especial estadounidense, Amos Hochstein, fue calificado de histórico por numerosas voces. Algunos análisis, sin embargo, subrayaron las dudas sobre su implementación ante la fragilidad política en Líbano y el rechazo al acuerdo por parte de Benjamin Netanyahu, que venció en las elecciones de noviembre y volvió al poder en Israel a finales de año.⁵⁹ Pese

a sus amenazas de desmantelar el acuerdo, analistas señalaban que Netanyahu seguramente priorizará los beneficios económicos del pacto y no enemistarse con EEUU. Tras la intensificación de las tensiones en los meses precedentes, el acuerdo fue considerado como una solución que desactivaba la posibilidad de un conflicto armado en el corto plazo, aunque observadores destacaron que no es garantía de estabilidad a largo plazo ni reduce necesariamente las perspectivas de una eventual nueva guerra entre Israel y Hezbollah.⁶⁰

Tras años de mediación intermitente de EEUU, en octubre Líbano e Israel alcanzaron un acuerdo para la demarcación de su frontera marítima

| Líbano | |
|-------------|---|
| Intensidad: | 2 |
| Evolución: | = |
| Tipología: | Gobierno, Sistema Interna internacionalizada |
| Actores: | Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham |

^{58.} International Crisis Group, Time to Resolve the Lebanon-Israel Maritime Border Dispute, Alert, Middle East and North Africa, 18 de agosto de 2022.

^{59.} Véase el resumen sobre Líbano en este capítulo y sobre Israel-Palestina en el capítulo 1 (Conflictos armados).

^{60.} Ksenia Svetlova, The Israel-Lebanon maritime deal is an example of successful US-led mediation. Can it be copy-pasted to other Middle Eastern arenas?, *Atlantic Council*, 28 de octubre de 2022.

Síntesis

El asesinato del ex primer ministro libanés Rafig Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada "Revolución del Cedro" que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias -presentes en el país desde hacía tres décadas- exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses. En los últimos años, las consecuencias del bloqueo político-institucional y una grave crisis económica, entre otros factores, han repercutido en un severo deterioro en las condiciones de vida de la población.

La situación en Líbano continuó caracterizándose por un persistente impasse político y una severa crisis económica con graves repercusiones en las condiciones de vida de la población y preocupación por la situación de seguridad. En mayo, el país celebró las primeras elecciones parlamentarias desde las masivas protestas populares de 2019. Grupos de derechos humanos denunciaron compra de votos, incitación a la violencia y abuso de poder por parte de partidos políticos.

Durante los comicios se produjeron varios incidentes, incluyendo choques entre seguidores del partido cristiano Fuerzas Libanesas y de los grupos shiíes Hezbollah-Amal,. Dirigentes políticos evocaron el recuerdo de la guerra civil ante las diferencias y pulsos de poder entre las diferentes facciones. Aunque candidatos independentes vinculados al movimiento de protesta civil de 2019 obtuvieron 13 de los 128 escaños, la votación no cambió significativamente el escenario político, que continuó caracterizándose por el bloqueo en los meses siguientes. El primer ministro en funciones Najib Mikati aseguró el respaldo de 54 legisladores -el menor nivel de apoyo desde el fin de la guerra civil- y recibió el encargo de formar

un nuevo gobierno, pero hasta finalizar el año no lo había conseguido en medio de persistentes diferencias sobre la asignación de diferentes ministerios a las distintas comunidades sectarias del país. A finales de octubre también venció el mandato del presidente Michel Aoun. El Parlamento celebró 11 sesiones entre septiembre y diciembre para escoger a su sucesor, sin éxito. Este clima político repercutió en las posibilidades de abordar la profunda crisis económica del país, señalada por el Banco Mundial como una de las más graves a nivel mundial desde el siglo XIX. La crisis ha motivado que la moneda local haya perdido más de

95% de su valor y a finales de 2022 la devaluación de la libra libanesa alcanzaba niveles históricos (47.000 libras libanesas por dólar). La población, el 80% de la cual se encuentra en situación de pobreza, se ha visto afectada por el acelerado aumento de precios, suspensión de subsidios y grave deterioro de servicios, en particular en el ámbito de salud, educación y seguridad, y de suministros como agua y **electricidad.** La inseguridad alimentaria ha aumentado significativamente, en un contexto afectado también por las repercusiones de la guerra en Ucrania (Líbano importaba 80% de grano de Ucrania). Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), desde octubre de 2019 y hasta noviembre de 2022 el precio de los alimentos se había incrementado en 1.800%. La carencia intermitente de pan provocó incidentes en todo el país durante el año y se produjeron continuas huelgas, manifestaciones y bloqueos de carreteras en protesta por el deterioro de la situación económica. Entre agosto y noviembre una veintena de bancos fueron escenario de acciones armadas de personas que exigían acceso a sus depósitos. La ONU también alertó sobre incidentes armados y tiroteos atribuidos a "disputas personales" que dejaron decenas de muertes y personas heridas a lo largo del año. En este contexto, a lo largo del año se activaron una decena de redes de mujeres mediadoras para intentar resolver disputas locales y evitar violencia comunitaria.61

Líbano continuó afectado por un persistente impasse político y por una severa crisis económica que repercutió especialmente en colectivos en situación de vulnerabilidad, incluyendo la numerosa población refugiada que alberga el país

El deterioro de la situación económica afectó especialmente a colectivos en situación de vulnerabilidad, incluyendo la población refugiada que alberga el país (incluyendo 1,5 millones de sirios y sirias). A modo de ejemplo, se calcula que 9 de cada 10 personas refugiadas sirias en Líbano vivía en condiciones de extrema pobreza en 2022. A lo largo del año se informó de varios naufragios de embarcaciones que intentaban alcanzar Europa, con decenas de víctimas mortales libanesas, sirias y palestinas -uno en las costas de Trípoli en abril, otro cerca de la costa turca en agosto, otro en la costa siria en septiembre, entre otros. ACNUR constató que, según la información a

la que había podido acceder, los movimientos en el mar en esta área que involucraban a población desplazada y migrante habían aumentado, pasando de 31 con 1.570 personas implicadas en 2021 a 55 con 4.629 personas en 2022. ONG de derechos humanos también alertaron sobre retornos forzados de población refugiada siria. Persistieron además múltiples retos en materia de impunidad. Grupos como Human Rights Watch denunciaron que el *establishment* político continuó obstruyendo la investigación sobre la devastadora explosión en Beirut en agosto de 2020, que causó la muerte a más de 220 personas y dejó

^{61.} Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

heridas a otras 7.000 y que persistieron los fallos y negligencias en la investigación de cuatro asesinatos políticos ocurridos en los últimos dos años. La comisión nacional independiente establecida en 2020 para investigar el paradero de más de 17.000 personas desaparecidas durante la guerra civil en el país (1975-

1990) aún estaba pendiente de la asignación de presupuesto. A lo largo del año también se informó de diversos incidentes de seguridad en los campos para personas refugiadas palestinas, entre diferentes facciones, incluyendo tiroteos que dejaron al menos una persona muerta y varias heridas.